

Septiembre 15 de 1960

36ª REUNION — 30ª SESION ORDINARIA

Presidencia de los doctores JOSE MARIA GUIDO, BENJAMIN GUZMAN, JOSE MARIA ANTONIO BERTORA, VICTOR HUGO FLEITAS y ALFREDO GARCIA, presidente provisional, vicepresidente 1º, vicepresidente 2º, presidente de la Comisión de Interior y Justicia, y presidente de la Comisión de Economía, respectivamente

Secretarios: señores ALEJANDRO N. BARRAZA y CLAUDIO A. MAFFEI

Prosecretario: señor CESAR ALBERTO RODRIGUEZ

SENADORES PRESENTES:

ARANA, Tomás Pedro  
BAYOL, Augusto G.  
BAZAN, Eduardo  
BERTÍN, Alfredo Felipe  
BERTORA, José María Antonio  
BIAIN, Pablo  
CAÑEQUE, Francisco E.  
CIARLOTTI, Pedro Antonio  
DAVILA, J. Aníbal  
DE LLAMAS, Enrique V.  
DIAZ, Juan Luis  
FIGUEROA, Héctor E.  
FITTIPALDI, Juan Pablo  
FLEITAS, Víctor Hugo  
GALLO, Victorio Manuel  
GARCIA, Alfredo  
GÓMEZ, Carlos Bernabé  
GUIDO, José María  
GUZMAN, Benjamín  
ITURRALDE, Antonio  
JARITONSKY, José  
JUAREZ, José Gregorio  
LEAVY, Napoleón Tomás  
LEBRERO, Carlos Alberto  
MALLEVILLE, Julio A.  
MANSILLA, Juan Argentino  
MARTOS, Francisco Luis

MIRANDA, Guillermo Hldefonso  
NOGUEIRA, Eduardo  
PARRA PÉREZ, Diego  
RACEDO, Lucio E.  
RICA, Diego Isidro  
ROCHA ERRECART, Adolfo  
SANCHEZ, Franklin Alberto  
TRUNSKY, Salomón  
TURANO, Armando Luis  
VERA BARROS, Pedro César  
VILCHEZ, Martín  
VILLALBA, Lucas  
WEIDMANN, Rodolfo A.

AUSENTES, CON AVISO:

CALDERÓN, Segundo Rosa  
FALCO, Clodomiro  
PÉREZ, Bartolomé

SUMARIO

I.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo sobre otorgamiento de subsidio a doña Natalia Rita de San Martín. (Página 1164.)

— II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se ratifica el convenio cultural entre la República Argentina y la República del Perú. (Página 1165.)

- III.—Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se dispone la reestructuración del presupuesto del Consejo de Reconstrucción de San Juan. (Página 1165.)
- IV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica la ley 12.951, sobre servicio exterior de la Nación. (Página 1165.)
- V.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 1166.)
- VI.—Constitución de comisión. (Página 1166.)
- VII.—Despachos de comisiones. (Página 1166.)
- VIII.—Peticiones particulares. (Página 1167.)
- IX.—Proyecto de comunicación del señor senador Mansilla sobre la entrada al país de obreros bolivianos con destino a la zafra azucarera de Salta y Jujuy. (Página 1167.)
- X.—Proyecto de ley del señor senador Rocha Errecart sobre inclusión de todo el personal del Poder Judicial en las disposiciones de la ley 12.579. (Página 1167.)
- XI.—Proyecto de ley del señor senador Rocha Errecart por el que se acuerda al Colegio Normal Nuestra Señora de la Misericordia, de la ciudad de La Plata, un subsidio para la construcción de su nuevo edificio escolar. (Página 1167.)
- XII.—Proyecto de ley del señor senador Bayol sobre desafectación del régimen del decreto ley 8.060/57 de una fracción de terreno ubicada en la localidad de Carcaraná (Santa Fe). (Página 1168.)
- XIII.—Proyecto de ley de los señores senadores Lebrero, Figueroa y De Llamas sobre importación, elaboración y comercialización de especies medicinales y drogas. (Página 1169.)
- XIV.—Proyecto de ley del señor senador Ciarlotti sobre percepción de haberes en los retiros de las fuerzas de seguridad de la Nación. (Página 1171.)
- XV.—Proyecto de ley del señor senador Gallo sobre construcción y habilitación de un edificio para la Universidad Popular de la ciudad de Catamarca. (Página 1172.)
- 2.—A moción del señor senador Guzmán se resuelve girar a la Comisión de Economía los convenios conocidos con el nombre de Club de París. (Página 1172.)
- 3.—Indicación del señor senador Turano para que se designen los miembros de la Comisión Bicameral de Turismo. (Página 1173.)
- 4.—Homenaje a México. (Página 1173.)
- 5.—A moción del señor senador Mansilla se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de

comunicación a que se refiere el punto IX de los asuntos entrados. (Página 1174.)

- 6.—A moción del señor senador Turano se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. (Página 1176.)
- 7.—Consideración del despacho de las comisiones de Industria, de Obras Públicas y de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley en revisión sobre ley de energía eléctrica. Se aprueba. (Página 1177.)
- 8.—Consideración del despacho de las comisiones de Economía y Legislación General en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre fondos comunes de inversión. Se aprueba con modificaciones. (Página 1228.)
- 9.—Consideración del despacho de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley del señor senador Rocha Errecart sobre incorporación a la aeronáutica, con el grado de vicecomodoro, del ciudadano don Eduardo Alfredo Olivero. Se aprueba. (Página 1261.)
- 10.—A moción del señor senador Rocha Errecart se resuelve levantar la sesión. (Página 1264.)
- 11.—Apéndice:
- I.—Sanciones del Honorable Senado. (Página 1265.)
- II.—Inserción solicitada por el señor senador Weidmann. (Página 1267.)

—En Buenos Aires, a los quince días del mes de septiembre de 1960, a la hora 18 y 15, dice el

Sr. Presidente (Guido). — La sesión está abierta.

## 1

### ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Guido). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

## I

Comunicación del Honorable Concejo Deliberante sobre subsidio a doña Natalia Rita de San Martín. — Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1960.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad sometiendo a su consideración las adjuntas actuaciones (expediente 16.552-M-1960, del registro del Ministerio del Interior), por el que la Intendencia Municipal, de la ciudad de Buenos Aires, da traslado de la comunicación sancionada por el Honorable Concejo Deliberante expresando sus deseos de que el Honorable Congreso otorgue por ley de la Nación un subsidio a doña Natalia Rita de San Martín, sobrina bisneta del héroe máximo de la

Industria, de Obras Públicas y de Asuntos Constitucionales, en el proyecto de ley en revisión sobre ley nacional de la energía; como segundo asunto el despacho de las comisiones de Economía y de Legislación General, en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre fondos comunes de inversiones; en tercer lugar el despacho de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley del señor senador Rocha Errecart autorizando al Poder Ejecutivo a incorporar a la fuerza aérea argentina con el grado de vicecomodoro en situación de retiro efectivo al ciudadano Eduardo Alfredo Olivero; luego el despacho de la Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos, en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el protocolo adicional al convenio entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre el suministro de la URSS a la Argentina, a crédito, de equipos de maquinarias para la industria petrolera argentina; a continuación el despacho de la Comisión de Trabajo y Previsión Social el proyecto de ley en revisión que sustituye el artículo 14 de la ley 14.546, de viajantes; el despacho de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley venido en revisión modificando la ley de accidentes del trabajo; de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley del señor senador Rocha Errecart, por el que se crea el Gabinete Técnico Pericial de Calígrafos Oficiales para la justicia nacional; de la misma comisión, en el proyecto de ley en revisión por el que se deroga el inciso b) del artículo 2º y el artículo 10 del decreto ley 5.571/57; de la misma comisión en el proyecto de ley del señor senador Rocha Errecart sobre creación de dos cargos de procuradores fiscales en la Corte Suprema de Justicia de la Nación; de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley venido en revisión por el que se expropia un predio ubicado en la calle Zelarrayán 665, de Bahía Blanca, con destino a colegio nacional; de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley del señor senador Dávila modificando el artículo 26 de la ley 14.370, compatibilidad para docentes; de la misma comisión en el proyecto de ley del señor senador Bértora, por el que se hace un agregado al artículo 3º de la ley 11.317, trabajo de menores; y por último el despacho de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley del señor senador Bértora por el que se acuerda un subsidio de \$ 2.500.000 al Club Central Entrerriano, de la ciudad de Gualguaychú, Entre Ríos.

**Sr. Villalba.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).** — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Villalba.** — Por un error del señor senador por la Capital parece ser que el orden del día número 5 va a ser tratado en la sesión de

la fecha. Por no haber despacho de comisión, solicitaría que dicho asunto no fuera incluido en el plan de labor.

**Sr. Turano.** — En vista de la observación del señor senador por Mendoza retiro la proposición de que ese punto sea tenida en cuenta en el plan de labor de la fecha.

**Sr. Presidente (Guido).** — En consideración la moción formulada por el señor senador por la Capital. Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

7

## LEY NACIONAL DE LA ENERGIA ELECTRICA

**Sr. Presidente (Guido).** — Corresponde considerar el despacho de las comisiones de Industria, de Obras Públicas y de Asuntos Constitucionales de que se dará lectura por Secretaría.

**Sr. Secretario (Barraza).** — (*Leyendo*):

### Dictamen de las comisiones

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Industria, Obras Públicas y de Asuntos Constitucionales han considerado el proyecto de ley, en revisión, sobre ley nacional de la energía eléctrica; y, por las razones que darán sus miembros informantes, os aconsejan su aprobación.

Sala de la comisión, 14 de septiembre de 1960.

*Agusto G. Bayol.* — José Gregorio Juárez. — Rodolfo A. Weidmann. — Eduardo Nogueira. — Francisco E. Cañeque. — Franklin Alberto Sánchez. — Eduardo Bazán. — Victorio Manuel Gallo. — Benjamín Guzmán. — José María Guido. — Francisco Luis Martos. — Pedro César Vera Barros. — Salomón Trunsky.

**Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación**

(Septiembre 3 de 1960)

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

**Artículo 1º** — Quedan sujetas a las disposiciones de la presente ley y de su reglamentación las actividades de la industria eléctrica destinadas a la generación, transformación y transmisión, o a la distribución de la electricidad, en cuanto las mismas correspondan a la jurisdicción nacional; con excepción del transporte y distribución de energía eléctrica cuando su objetivo principal fuera la transmisión de señales, palabras o imágenes, que se regirán por sus respectivas leyes especiales.

Art. 2º — A los fines de esta ley, la energía eléctrica, cualquiera sea su fuente y las personas de carácter público o privado a quienes pertenezca, se considerará una cosa jurídica susceptible de comercio por los medios y formas que autorizan los códigos y leyes comunes en cuanto no se opongan a la presente.

Art. 3º — A los efectos de la presente ley, denominase servicio público de electricidad la distribución regular y continua de energía eléctrica para atender las necesidades indispensables y generales de electricidad de los usuarios de una colectividad o grupo social determinado de acuerdo con las regulaciones pertinentes.

Correlativamente, las actividades de la industria eléctrica destinada total o parcialmente a abastecer de energía a un servicio público serán consideradas de interés general, afectadas a dicho servicio y encuadradas en las normas legales y reglamentarias que aseguren el funcionamiento normal del mismo.

Art. 4º — Las operaciones de compra o venta de la electricidad de una central con una línea de transmisión o de ésta con el ente administrativo o con el concesionario que en su caso presta el servicio público, se reputarán actos comerciales de carácter privado en cuanto no comporten desmedro a las disposiciones de la presente ley.

Art. 5º — La energía de las caídas de agua y de otras fuentes hidráulicas, comprendidos los mares y los lagos, constituye una cosa jurídicamente considerada como distinta del agua y de las tierras que integran dichas fuentes. El derecho de utilizar la energía hidráulica no implica el de modificar el uso y fines a que están destinadas estas aguas y tierras, salvo en la medida estrictamente indispensable que lo requieran la instalación y operación de los correspondientes sistemas de obras de captación, conducción y generación, de acuerdo con las disposiciones particulares aplicables en cada caso.

Art. 6º — Declárase de jurisdicción nacional la generación de energía eléctrica, cualquiera sea su fuente, su transformación y transmisión, cuando:

- a) Se vinculen a la defensa nacional;
- b) Se destinen a servir el comercio de energía eléctrica entre la Capital Federal y una o más provincias o una provincia con otra o con el territorio de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur;
- c) Correspondan a un lugar sometido a la legislación exclusiva del Congreso Nacional;
- d) Se trate de aprovechamientos hidroeléctricos o mareomotores que sea necesario interconectar entre sí o con otros de la misma o distinta fuente, para la racional y económica utilización de todos ellos;

- e) En cualquier punto del país integren la Red Nacional de Interconexión;
- f) Se vinculen con el comercio de energía eléctrica con una nación extranjera;
- g) Se trate de centrales de generación de energía eléctrica mediante la utilización o transformación de energía nuclear o atómica.

Serán también de jurisdicción nacional los servicios públicos definidos en el primer párrafo del artículo 3º cuando una ley del Congreso evidenciara el interés general y la conveniencia de su unificación.

Art. 7º — El Poder Ejecutivo proveerá lo conducente, dentro de las facultades que le otorga esta ley, para promover en cualquier lugar del país grandes captaciones de energía hidroeléctrica.

Art. 8º — Los aprovechamientos de las fuentes de energía hidroeléctrica promovidos por el gobierno federal o por una provincia, en los casos que los trabajos de captación de la fuerza comporten el trasvase del agua de una cuenca fluvial, lacustre o marítima a otra, afectando a más de una provincia, deberán ser autorizados por ley nacional.

Art. 9º — En cuanto se relacione con lo dispuesto en el artículo 6º, el gobierno federal puede utilizar y reglar las fuentes de energía, en cualquier lugar del país, en la medida requerida para los fines a su cargo.

Art. 10. — Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes de cualquier naturaleza, obras, instalaciones, construcciones y sistemas de explotación, de cuyo dominio fuera indispensable disponer para el cumplimiento de los fines de esta ley y especialmente para el regular desarrollo o funcionamiento de la red nacional de interconexión y/o los restantes sistemas eléctricos nacionales.

El Poder Ejecutivo hará uso de esta declaración genérica designando a quién tendrá facultad en cada caso para promover los procedimientos judiciales de expropiación.

Art. 11. — En el ámbito de la jurisdicción nacional a que se refiere el artículo 6º y a los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo otorgará previo dictamen del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, que deberá producirse en el plazo que fije la reglamentación respectiva, las concesiones y autorizaciones, y ejercerá las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional.

Las facultades precedentes comprenden el derecho de otorgar el uso de tierras de propiedad nacional y demás lugares sometidos a la legislación exclusiva del Congreso Nacional.

Queda asimismo autorizado el Poder Ejecutivo nacional, según lo justifiquen las circunstancias, a disponer en aquellos contratos y operaciones que sean consecuencia de esta ley la

exención de gravámenes e impuestos nacionales vinculados a la constitución de los mismos.

En cuanto a los sistemas eléctricos provinciales, referidos en el artículo 35, inciso b) de esta ley, como también a los servicios públicos definidos en el primer párrafo del artículo 39 de la misma que fueran de jurisdicción local, serán los gobiernos provinciales los que resolverán en todo lo referente al otorgamiento de las autorizaciones y concesiones y ejercerán las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional.

Art. 12. — Las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación. No se comprenden en esta exención las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local.

Art. 13. — Las disposiciones de la ley 4.408 (de teléfonos y radiotelegrafía) serán de aplicación subsidiaria en cuanto no esté previsto y sea compatible con la presente, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades locales —provinciales y municipales— en todo lo que sea materia de su respectiva competencia.

#### *Concesiones y autorizaciones*

Art. 14. — El ejercicio por particulares de actividades relacionadas con la generación, transformación, transmisión y distribución de la energía eléctrica de jurisdicción nacional, cualquiera sea la fuente de energía utilizada, requiere concesión o autorización del Poder Ejecutivo, en los siguientes casos:

##### *a) Se requiere concesión:*

1. Para el aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica de los cursos de agua pública, cuando la potencia normal que se concede exceda de quinientos kilovatios.
2. Para el ejercicio de actividades destinadas a un servicio público de electricidad.

##### *b) Se requiere autorización:*

1. Para el establecimiento de plantas térmicas o líneas de transmisión y distribución, cualquiera sea la fuente de la energía a transportar, cuando la potencia sea igual o superior a cinco mil kilovatios.
2. Para el establecimiento de plantas térmicas o líneas de transmisión y distribución, cualquiera sea la fuente de la energía a transportar, cuan-

do la potencia sea menor de cinco mil kilovatios pero sus instalaciones requieran el uso de la vía pública o, en general, de bienes del dominio público o afectados al uso o servicio público.

Art. 15. — En las concesiones para aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica de jurisdicción nacional (artículo 14, inciso a) - 1), que podrán otorgarse por plazo fijo o por tiempo indeterminado, habrán de establecerse las condiciones y cláusulas siguientes:

1. El objeto principal de la utilización.
2. Las normas reglamentarias del uso del agua, y en particular, establecidas en su caso de acuerdo con la autoridad local: las que interesen a la navegación, a la protección contra inundaciones, a la salubridad pública, la bebida y los usos domésticos de las poblaciones ribereñas, a la irrigación, la conservación y la libre circulación de los peces, la protección del paisaje y el desarrollo del turismo.
- En estas normas se deberá tener en cuenta el siguiente orden de prioridad para el uso del agua: la bebida y los usos domésticos de las poblaciones ribereñas, el riego y luego la producción de energía.
3. Las potencias características del aprovechamiento y la potencia máxima de la instalación.
4. El plazo de la ejecución de los trabajos determinados en la concesión.
5. El plazo de explotación de la concesión cuando ésta sea a término, el que no podrá exceder de sesenta años.
6. Las condiciones bajo las cuales al término de la concesión podrán transferirse al Estado los bienes y las instalaciones.
7. Las condiciones y causales de caducidad por inobservancia de las obligaciones impuestas en las concesiones a término.
8. La antelación con que deberá notificarse a los interesados la revocación o la extinción de la concesión, y la forma tiempo y condiciones en que se realizarán las transferencias de los bienes, cuando la concesión fuese por tiempo indeterminado.
9. El canon que deberá abonar el concesionario en concepto de regalía por el uso de la fuente, que ingresará al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica.

Art. 16. — En las concesiones para el aprovechamiento de fuentes de energía hidroeléctrica de jurisdicción nacional, para los trabajos de-

terminados en la concesión o para la explotación de la misma, el concesionario, sin perjuicio de las indemnizaciones que deba pagar a los particulares afectados, tendrá los siguientes derechos:

- I. De ocupar en el interior del perímetro definido por el acto de la concesión las propiedades privadas necesarias para las obras de retención o de presa del agua, y para los canales de aducción o de fuga necesarios, subterráneos o descubiertos, de acuerdo con las leyes generales y las reglamentaciones locales.
- II. De inundar las playas para el levantamiento necesario del nivel del agua.
- III. De solicitar al Poder Ejecutivo que haga uso de la facultad que le confiere el artículo 10, cuando fuere necesaria la ocupación definitiva del dominio de terceros, y toda vez que ello no se hubiera previsto en el mismo acto constitutivo de la concesión y no fuera posible obtener el acuerdo de partes.

Art. 17. — El Poder Ejecutivo, previo dictamen del Consejo Federal, podrá estimular bajo forma de aporte de capital, financiación, contribución y/o exenciones impositivas temporarias a los titulares de las concesiones a que se refiere el artículo 15 cuyos trabajos y obras originaren beneficios múltiples o cuyo objetivo principal interese a la defensa nacional o procure un mejoramiento notable de las condiciones de utilización agrícola de los cursos de agua o la regularización de su régimen o facilite su navegación. Asimismo queda autorizado para avalar la financiación de obras de interés nacional en aquellos contratos que tengan cláusulas de reversión al Estado.

Art. 18. — En las concesiones de servicio público de jurisdicción nacional (artículo 14 inciso a) - 2), sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 en cuanto resulte de aplicación, se establecerán especialmente:

1. Las condiciones generales y especiales de la concesión y los derechos y obligaciones inherentes a la misma.
2. Las condiciones de uso y ocupación del dominio del Estado con los bienes e instalaciones del concesionario, cuando fuere pertinente.
3. La delimitación de la zona que el concesionario del servicio público de electricidad está obligado a atender.
4. La potencia, las características y el plan de las obras e instalaciones a efectuarse, así como de sus modificaciones y ampliaciones, los que en todo momento deberán ajustarse para atender el incremento de la demanda de la zona.
5. El plazo para la iniciación y terminación de las obras e instalaciones.

6. Las garantías que debe prestar el concesionario según determine la reglamentación.
7. Las causales de caducidad y revocación.
8. Las condiciones en que el Estado adquirirá los bienes afectados a la concesión, en caso de caducidad, revocación o falencia.
9. Las obligaciones y derechos del concesionario.
10. Las condiciones, derechos u obligaciones para la interconexión de las instalaciones.
11. La afectación de los bienes destinados a las actividades de la concesión y propiedad de los mismos, y en especial el régimen de las instalaciones costeadas por los usuarios.
12. La forma de determinación del capital inicial.
13. El sistema de justiprecio de los bienes afectados a la concesión, cuando fuere necesario para determinar las tarifas, la utilidad del concesionario o la adquisición de los mismos por el Estado.
14. El derecho de constituir las servidumbres necesarias a los fines de la concesión.
15. Las atribuciones del Estado de inspección, fiscalización y demás, inherentes al poder de policía.
16. El régimen para la constitución de los fondos de depreciación, renovación, ampliaciones y otros que sea necesario prever.
17. El régimen del suministro y venta de energía.
18. El régimen tarifario.
19. El régimen de infracciones y multas.

Art. 19. — Toda cesión total o parcial de una concesión y todo cambio de concesionario requerirán para su validez la aceptación expresa de la autoridad competente.

Art. 20. — El régimen de las autorizaciones de jurisdicción nacional (artículo 14, inciso b), será reglamentado por el Poder Ejecutivo y se caracterizará por la exclusión de uno o más requisitos, según los casos, de los fijados a las concesiones de servicio público.

Se incluirán sin embargo, en cuanto fueran de aplicación, cláusulas que contemplen lo previsto en los incisos 12 a 19 del artículo 18.

Art. 21. — Los aprovechamientos de la energía hidroeléctrica y cualquier otra actividad de la industria eléctrica excluidos del régimen de concesiones y autorizaciones del artículo 14, pero comprendidos en el ámbito de la jurisdicción nacional, se ejercerán con sujeción a las reglamentaciones vigentes o a dictarse.

En especial, podrán los particulares, individual o colectivamente, o agrupados en coopera-

tivas, consorcios de usuarios y otras formas de asociación legítima, utilizar para las necesidades de sus propiedades o industrias la energía hidroeléctrica de cursos de agua pública, con la sola sujeción a dichas reglamentaciones y siempre que la potencia total instalada no exceda de quinientos kilovatios y no afecte a otros aprovechamientos, o los planes nacionales y locales de electrificación.

Igualmente, los propietarios de cursos de agua privada a que se refieren los artículos 2.350 y 2.637 del Código Civil, podrán utilizar la respectiva energía hidroeléctrica para su propio uso y aun cederla a terceros, con tal que ello no revista el carácter de un servicio público.

#### *Importación y exportación de energía eléctrica*

Art. 22. — Queda facultado el Poder Ejecutivo para autorizar la importación y exportación de energía eléctrica, previa determinación de la cantidad máxima de energía a exportar o a importar.

La autorización deberá subordinarse a condiciones y garantías relativas al uso de la energía y al precio de venta o reventa.

Art. 23. — La autorización no tendrá plazo superior a diez años, pudiendo ser prorrogable; y podrá revocarse en cualquier momento, cuando no subsistieren las circunstancias que originaron su otorgamiento, o mediaren graves motivos de interés público.

La revocación podrá también tener lugar por no uso de la autorización, o inobservancia de las condiciones a que se subordinó su otorgamiento.

#### *Consejo Federal de la Energía Eléctrica*

Art. 24. — Créase el Consejo Federal de la Energía Eléctrica dependiente de la Secretaría de Energía y Combustibles, la que reglamentará su funcionamiento.

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica cumplirá los siguientes fines:

- a) Considerar y coordinar los planes de desarrollo de los sistemas eléctricos del país y someterlos a la aprobación de los respectivos poderes jurisdiccionales;
- b) Actuar como consejo asesor y consultor del Poder Ejecutivo nacional y de los gobiernos de las provincias que lo requieran, en todo lo concerniente a la industria eléctrica y a los servicios públicos de electricidad; a las prioridades en la ejecución de estudios y obras; a las concesiones y autorizaciones; y a los precios y tarifas para la industria eléctrica y los servicios públicos de electricidad;
- c) Aconsejar las modificaciones que requiera la legislación en materia de industria eléctrica;

- d) Proponer las disposiciones que considere necesarias para la mejor aplicación de la presente ley y de su reglamentación.

Art. 25. — El Consejo Federal de la Energía Eléctrica estará constituido por:

- a) El secretario de Energía y Combustibles, que lo presidirá, o el subsecretario en su reemplazo;
- b) Un representante de la Secretaría de Energía y Combustibles, que será designado por el Poder Ejecutivo;
- c) El presidente del directorio de Agua y Energía Eléctrica, empresa del Estado;
- d) Un representante y un suplente por cada provincia designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta de los respectivos gobiernos locales;
- e) Un representante de la Capital Federal y Territorio de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, que nombrará el Poder Ejecutivo.

El Poder Legislativo nacional podrá designar de entre sus miembros tres por la Cámara de Senadores y tres por la Cámara de Diputados, que podrán participar en las reuniones del consejo.

Art. 26. — El consejo designará seis de sus miembros que constituirán un comité que será presidido por el representante de la Secretaría de Energía y Combustibles.

Dicho comité tendrá a su cargo:

- a) Preparar y someter a consideración del consejo los estudios y trabajos que éste le encomiende;
- b) Ejercer las funciones que el consejo le delegue;
- c) Expedirse en todos los asuntos de carácter urgente, dando cuenta de inmediato al consejo si el caso lo requiriese o en la primera reunión ordinaria en su defecto.

Art. 27. — Actuarán como organismos técnicos y administrativos del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y del comité, las dependencias que determine la Secretaría de Energía y Combustibles, de conformidad con la reglamentación que dicte para su actuación.

Art. 28. — El Consejo Federal de la Energía delimitará «zonas de electrificación» integrada cada una de ellas por la provincia o provincias que, racional y técnicamente, constituyan un núcleo energético desde el punto de vista del afianzamiento gradual del sistema eléctrico argentino o tengan, cuando se trate de dos o más provincias, una interdependencia real o potencial en la materia.

En cada zona de electrificación así constituida, funcionará un Comité Zonal de la Energía Eléctrica.

trica, dependiente del consejo federal y formado por los miembros titulares de las provincias de que se trate, a que se refiere el artículo 25, incisos d) y e), y por los presidentes o directores de los entes a cargo, en las mismas provincias, de los problemas locales de hidráulica y electricidad.

El Consejo Federal de la Energía será reglamentado sobre la base de reconocer y atribuir a los comités zonales una intervención informativa en todo problema, de la competencia del consejo federal, que se refiera a la respectiva zona; así como la más amplia libertad de iniciativa, por ante el consejo federal y por intermedio de los miembros titulares respectivos a que alude el artículo 26, incisos c) y d) para proponer las tarifas, la aplicación del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y las soluciones energéticas que juzguen de interés para la zona respectiva.

Art. 29. — Los gastos que demande el funcionamiento del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, se atenderán con cargo al Fondo Nacional de Energía Eléctrica.

*Fondos eléctricos. — Fondo Nacional de la Energía Eléctrica*

Art. 30. — Créase el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, con el fin de contribuir a la financiación de los planes de electrificación, el cual se integrará:

- a) Con un aporte del Tesoro Nacional, que se fijará anualmente;
- b) Con el 50 %, como mínimo, del producido de la recaudación del Fondo Nacional de la Energía, pudiendo el Poder Ejecutivo incrementar dicho porcentaje a propuesta de la Secretaría de Energía y Combustibles;
- c) Con las regalías sobre el uso de las fuentes hidráulicas de energía que se establecen en el artículo 15, inciso 9°;
- d) Con el derecho de importación de la electricidad que en cada caso se establezca por los organismos competentes;
- e) Con el recargo de \$ 0,10 por kilovatio-hora sobre el precio de venta de la electricidad. Queda facultado el Poder Ejecutivo, previo dictamen del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, para modificar este recargo, no pudiendo exceder del 15 % de dicho precio de venta;
- f) Con el producido de la negociación de títulos de deuda nacional, que se emitan con cargo a ser servidos con recursos del Fondo;
- g) Con la recaudación por reembolso, y sus intereses, de los préstamos que se hagan de los recursos del Fondo;
- h) Con donaciones, legados, aportes y otros recursos no especificados anteriormente.

Art. 31. — El Fondo Nacional de la Energía Eléctrica será administrado por la Secretaría de Energía y Combustibles, y se aplicará:

- a) El 80 % del mismo, con destino exclusivo a los estudios, construcción y ampliación de las centrales, redes y obras complementarias o conexas que ejecute el Estado nacional;
- b) El 20 % remanente será transferido al Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior, conforme con lo dispuesto en el artículo 32, inciso d).

*Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior*

Art. 32. — Unifícanse el Fondo de Reserva de Energía Eléctrica y el de Electrificación Rural en un solo Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, que se integrará:

- a) Con los excedentes de las tarifas y recargos que establezca el Poder Ejecutivo en la Capital Federal y Gran Buenos Aires;
- b) Con los aportes del Tesoro de la Nación que correspondan a los compromisos del Fondo de Restablecimiento Económico y otros que se determinen en la ley de presupuesto;
- c) Con el diez por ciento (10 %) del producido del Fondo Nacional de la Energía;
- d) Con el veinte por ciento (20 %) (artículo 31, inciso b) del Fondo Nacional de Energía Eléctrica;

Art. 33. — El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior será administrado por la Secretaría de Energía y Combustibles, y se aplicará para:

- a) Aportes y préstamos a las provincias para sus planes de electrificación, siempre que se encuadren en los planes aprobados con intervención del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y no graven el consumo de electricidad para otros fines que no sean exclusivamente de desarrollo de energía eléctrica. Para acogerse a estos beneficios, las provincias deberán establecer tarifas que contemplen la amortización de tales aportes. Las sumas recaudadas en tal concepto deberán destinarse exclusivamente a la renovación, ampliación de plantas existentes o a la ejecución de redes de electrificación, o al reintegro, en su caso, de los respectivos préstamos;
- b) Préstamos a municipalidades, cooperativas y consorcios de usuarios de electricidad para sus obras de primer establecimiento, construcción y ampliación



de centrales, redes de distribución y obras complementarias;

- c) Préstamos a empresas privadas de servicios públicos de electricidad para ampliación y mejoras de sus servicios en centrales de capacidad no superior a 2.000 kilovatios instalados.

Al cierre de cada ejercicio, los saldos anuales no utilizados se transferirán al ejercicio siguiente del mismo fondo.

Art. 34. — La Secretaría de Energía y Combustibles distribuirá el fondo referido con la intervención del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y lo administrará, asegurando, en todos los casos, el retorno de los préstamos de acuerdo con las siguientes normas:

- a) En los casos de los préstamos del artículo 33, incisos a) y b), con un interés no menor del 6 % anual, y con amortización hasta quince años;
- b) Para los casos de los préstamos del artículo 33, inciso c), con un interés no inferior al 8 % anual, y con amortización hasta cinco años.

Los plazos de amortización precedentes podrán ampliarse hasta diez (10) años más en los siguientes casos: 1) Cuando los préstamos se apliquen total o parcialmente para la ejecución de obras de electrificación rural; 2) Cuando se destinen a planes que incluyan la adquisición de equipos electromecánicos y materiales eléctricos de fabricación nacional en una proporción no inferior al 80 % del total de la inversión. En estos casos, para lo invertido en electrificación rural o en la compra de equipos y elementos de fabricación nacional, la tasa de interés aplicable podrá reducirse al 3 % anual.

#### *Transporte y distribución de la energía eléctrica. — Sistemas eléctricos*

Art. 35. — Para los efectos de la presente ley, se denominan:

- a) Sistemas Eléctricos Nacionales (SEN), las centrales, líneas y redes de transmisión y distribución, y obras e instalaciones complementarias —sin distinción de las personas, públicas o privadas, a quienes pertenezcan—, sometidos a la jurisdicción nacional;
- b) Sistemas Eléctricos Provinciales (SEP), las centrales, líneas y redes de jurisdicción provincial;
- c) Sistemas Eléctricos del Estado (SEE), las centrales, líneas y redes de transmisión, y obras e instalaciones complementarias, de propiedad del Estado nacional, o que él administra o explota;

- d) Red Nacional de Interconexión (RNI), al conjunto de sistemas eléctricos nacionales interconectados.

Art. 36. — La Secretaría de Energía y Combustibles, con intervención del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las obras y servicios integrantes de la Red Nacional de Interconexión y la determinación de las centrales, líneas, redes de transmisión y distribución y obras e instalaciones complementarias que integran necesaria y racionalmente la misma, cuya aprobación será efectuada por el Poder Ejecutivo.

Cuando se trate de captaciones hidroeléctricas utilizables mediante aprovechamientos fluviales múltiples, su planificación, estudio y coordinación quedarán supeditados a las condiciones que contemplen la racional y económica utilización de todos los recursos naturales vinculados a la cuenca hídrica.

Art. 37. — Todas las funciones y atribuciones de gobierno, inspección y policía, en materia de generación, transformación, transmisión y distribución de la energía eléctrica de jurisdicción nacional, serán ejercidas por la Secretaría de Energía y Combustibles, la que tendrá a su cargo

- a) Promover el desarrollo integral y racional funcionamiento de los Sistemas Eléctricos Nacionales (SEN), mediante la interconexión de las centrales y redes de jurisdicción nacional;
- b) Asegurar la libre circulación y distribución de la energía eléctrica en todo el territorio de la Nación;
- c) Mantener actualizado el inventario de las fuentes de energía, el catastro de las utilidades y la estadística de la industria eléctrica en todos sus aspectos;
- d) Asesorar al Poder Ejecutivo con relación al otorgamiento de las concesiones y autorizaciones para la utilización de las fuentes de energía eléctrica y para la instalación de centrales y redes de jurisdicción nacional;
- e) Ejercer las funciones de policía de seguridad técnica de los sistemas a que se refieren los incisos a), c) y d), del artículo 35, y de inspección técnica contable sobre las instalaciones, funcionamiento y régimen tarifario de ellos;
- f) Impartir las normas técnicas y disposiciones necesarias para el funcionamiento y operación de los servicios de jurisdicción nacional, de acuerdo con los principios de la presente ley y de los reglamentos que se dicten para su aplicación;
- g) Someter a aprobación del Poder Ejecutivo las tarifas y precios de compra y

venta de la energía a los productores y a los distribuidores de la Red Nacional de Interconexión (RNI), y servicios públicos de jurisdicción nacional;

- h) Reglamentar el funcionamiento de los Sistemas Eléctricos Nacionales (SEN), incluida la Red Nacional de Interconexión (RNI), con aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 38. — El despacho de cargas en la Red Nacional de Interconexión y el manejo y funcionamiento de los Sistemas Eléctricos del Estado estarán a cargo de Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado, la que a dichos efectos, sin perjuicio de las facultades que le confiere su estatuto orgánico, tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Comprar la energía eléctrica a las centrales integrantes de la Red Nacional de Interconexión y atender a su comercialización mediante la venta a las empresas u organismos prestatarios de servicios públicos de electricidad y a las grandes industrias;
- b) Establecer anualmente el régimen de funcionamiento de cada central integrante de la Red Nacional de Interconexión;
- c) Impartir las órdenes necesarias para el despacho de cargas, de acuerdo con las normas preparadas por la Secretaría de Energía y Combustibles.

Los Sistemas Eléctricos Provinciales a que se refiere el artículo 35, inciso b), podrán conectarse a la Red Nacional de Interconexión si desean recibir o entregar energía por dicha red. A tal efecto la autoridad provincial respectiva y Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado, acordarán las condiciones de la operación y régimen del mutuo servicio, a los efectos del despacho de carga.

#### *Precios y tarifas*

Art. 39. — El Poder Ejecutivo Nacional fijará los precios y tarifas para la energía eléctrica que se comercialice en las centrales y líneas que integran la Red Nacional de Interconexión y para los servicios públicos de jurisdicción nacional, los que dentro del principio de lo justo y razonable deberán responder básicamente a los siguientes conceptos:

- a) Costos de capital:

1. Se considerarán en los costos de capital las dotaciones al fondo de renovación que se determinarán sobre la base de un porcentaje fijo a establecer, sobre el valor de reposición de la potencia instalada con sus equipos y elementos conexos.

2. Las dotaciones a los fondos de reserva.
3. Los impuestos.
4. Los seguros.
5. Las amortizaciones de capital, siempre que en la correspondiente concesión o autorización existan cláusulas de traspaso total o parcial sin cargo para el Estado, de los bienes del concesionario o permisionario al vencer la concesión o autorización.
6. Los intereses del capital, que se reglarán de acuerdo con las normas de la correspondiente concesión o autorización.

- b) Costo de los sueldos de personal:

1. Los sueldos, jornales y en general toda remuneración que se paguen de acuerdo con normas legales que los autoricen.
2. Los beneficios de carácter social establecidos y que se establezcan por normas legales y las sumas que anualmente deben destinarse a constituir o incrementar los fondos de reservas especiales que aseguren el cumplimiento de estas obligaciones.

- c) Gastos generales, administración, dirección técnica y asesoría, que se ajustarán a lo dispuesto por la reglamentación de la presente ley;
- d) Combustibles, lubricantes y en general todos los materiales cuyo consumo resulte necesario en el período correspondiente y que estén destinados a la generación, transformación, transmisión y distribución de electricidad, en su caso;
- e) Valor de la energía que se adquiere a terceros;
- f) Intereses y gastos complementarios de financiación sobre bonos y otros capitales crediticios destinados a la explotación y que hayan sido aprobados previamente por el Poder Ejecutivo. El total de dichos intereses no podrá exceder del 10 % anual sobre los respectivos capitales;
- g) Los demás gastos no especificados en los rubros anteriores, siempre que guarden relación de causalidad con las actividades de la explotación;
- h) Las pérdidas de energía por todo concepto, de acuerdo con las normas que establezca la Secretaría de Energía y Combustibles;
- i) Cláusulas de ajuste:
  1. Los costos de capital, mantenimiento y varios se ajustarán anualmente.
  2. Los cambios que sufra el precio de

la mano de obra y de los combustibles serán reajustados dentro de los treinta (30) días de producidos, de acuerdo con las fórmulas que establezca la Secretaría de Energía y Combustibles.

3. Las disminuciones de costo originadas en una mayor eficiencia técnica serán acreditadas por partes iguales a favor de los consumidores y la empresa o entidad productora, transportadora o distribuidora que lo haya originado.

Para la percepción de los importes correspondientes a los precios de compraventa de energía y de las tarifas para venta en bloque por parte del Estado, se seguirá el procedimiento de apremio establecido en el título 25 de la ley 50, siendo título hábil la constancia de deuda expedida por la oficina competente del ente prestatario.

Art. 40. — Las tarifas y precios serán establecidos sobre la base de la demanda probable estimada como conveniente, que soporte cada central durante el año.

#### *Disposiciones complementarias*

Art. 41. — Las empresas del Estado o privadas que integren los sistemas eléctricos nacionales ajustarán sus libros y contabilidad a un plan general de cuentas para permitir la fiscalización contable permanente de los mismos por la Secretaría de Energía y Combustibles.

Art. 42. — Las industrias en el ámbito de la jurisdicción nacional, cuando las circunstancias lo justifiquen y ello se juzgue conveniente y adecuado por la Secretaría de Energía y Combustibles, podrán abastecerse directamente e interconectar sus propias centrales con los servicios eléctricos nacionales.

Art. 43. — Las provincias en cuyos territorios se encuentren las fuentes hidroeléctricas percibirán el cinco por ciento (5 %) del importe que resulte de aplicar a la energía vendida la tarifa correspondiente a la venta en bloque.

En el caso de que las fuentes hidroeléctricas se encuentren en ríos limítrofes entre provincias, o que atraviesen a más de una de ellas, este porcentaje del 5 % se distribuirá equitativa y racionalmente entre ellas.

Art. 44. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a utilizar de los recursos del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior a que se refiere el artículo 32 de la presente ley las sumas necesarias para la continuidad del auxilio financiero establecido por el decreto 11.219/59.

Art. 45. — Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado, y las sociedades en que la misma participe, podrán financiar sus obras de expan-

sión futuras o en ejecución mediante la emisión de títulos de deuda, bonos u obligaciones.

Los fondos provenientes de estas financiaciones deberán aplicarse exclusivamente a obras y/o instalaciones estrictamente retributivas, en modo tal que el producido de las mismas cubra las amortizaciones e intereses de las deudas que se contraigan al amparo del presente régimen.

El Poder Ejecutivo podrá otorgar a los títulos, bonos u obligaciones que se emitan, las exenciones y franquicias impositivas acordadas o que se acuerden a los títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos por la Nación, por las provincias o municipios y por los organismos o empresas descentralizados.

El Poder Ejecutivo nacional fijará la oportunidad, tipos de interés y características financieras que considere convenientes a los fines de proceder a la emisión de los valores de que se trata. La garantía de la Nación será prestada por el Poder Ejecutivo cuando ella se considere necesaria.

Art. 46. — El patrimonio de Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado, se integrará con todos los bienes muebles e inmuebles, ocupados o afectados en cualquier forma, modo y lugar a sus actividades, comprendidos los terrenos, edificios, obras e instalaciones, planteles y equipos, instrumentos y vehículos, fondos y demás efectos destinados a sus actividades específicas de persona jurídica de derecho privado.

Consecuentemente, decláranse transferidos a la Empresa los dominios sobre todos los terrenos de propiedad del Estado nacional que ocupa o se encuentran afectados a dichas actividades, con excepción de aquellos que correspondan a obras, trabajos o servicios que se ejecutan o prestan por cuenta del gobierno nacional, cuando ellos sean totalmente de fomento y en la proporción que corresponda en las que lo sean parcialmente, o en las que respondan a finalidades múltiples.

El Poder Ejecutivo formalizará los respectivos títulos, su registro y demás recaudos pertinentes, quedando autorizado para transferir asimismo los bienes inmuebles que en lo sucesivo se requieran con iguales propósitos, conforme a los planes de acción y presupuesto anuales que apruebe, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Art. 47. — Declárase cancelada la deuda de Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado con el gobierno nacional, proveniente de fondos entregados a ella y a los organismos antecesores por la Tesorería General de la Nación, el Fondo Nacional de la Energía o el Fondo de Reserva de la Energía para la ejecución de obras, cualquiera sea su naturaleza, para realizar estudios o para costear déficit de explotación, así como los servicios de amortización e intereses vencidos si ellos existieran.

Art. 48. — (Transitorio). El Consejo Federal de la Energía Eléctrica se constituirá una vez

que la mitad de las provincias haya comunicado al Poder Ejecutivo nacional su propuesta para el nombramiento de los representantes y éstos hayan sido designados. Si en el término de los treinta días las provincias no hubiesen realizado tal propuesta, el Consejo Federal de la Energía Eléctrica será integrado con el número de representantes designados.

Constituido el consejo deberá proceder dentro de los treinta días siguientes a elevar para la aprobación del Poder Ejecutivo nacional el proyecto de reglamentación de la presente ley y el proyecto de organización funcional a que ajustará su cometido.

Art. 49. — Quedan derogadas las leyes y demás disposiciones vigentes, en cuanto se opongan a la presente ley.

Art. 50. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FEDERICO F. MONJARDÍN.

Guillermo González.

**Sr. Presidente** (Guido). — En consideración.

**Sr. Cañeque**. — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Cañeque**. — Señor presidente: parecerá extraño que empiece el informe sobre ley nacional de la energía hablando de un viejo problema argentino, pero que es el que está en el fondo del debate que ha promovido esta ley en el ámbito público argentino. Me refiero a los conceptos clásicos de imperialismo. El imperialismo, indiscutiblemente fue postulado y esclarecido por Lenin en su libro *Imperialismo, etapa superior del capitalismo*. Allí aparecen determinadas condiciones de lo que ha de ser la exportación de capitales y consecuentemente el imperialismo. Y es del caso, señor presidente, que las izquierdas, las derechas oligárquicas — incluso aquellos que manifiestan que todo hombre que tiene el deseo de profundizar en materia económica, y lo definen como materialista — tomaron este concepto. Y yo digo categórica y expresamente, que ese viejo concepto leninista hoy, en el mundo contemporáneo, no tiene vigencia. Y voy a decir por qué.

El mundo contemporáneo ha tendido, después de la segunda guerra mundial, a una rápida interdependencia. Es indiscutible que de una política bipolar, en la que uno de los polos era Moscú y el otro polo era Washington, se está pasando, gradual y aceleradamente, a una política multipolar, donde hasta los pequeños pueblos pueden realizar grandes reivindicaciones. Es decir, la división del poder político mundial está llevando a que este viejo concepto de imperialismo, tomado con sentido político, no tenga la significación que tenía en la época de Teddy Roosevelt, por ejemplo. La política del *big stick*, del garrote, que practicaron a comienzos de este siglo los Estados Unidos, que

simbolizó, en cierta manera, Teddy Roosevelt, cuando la marina de los Estados Unidos avasallaba cualquier bandera centroamericana, hoy, señor presidente, no tiene vigencia.

En consecuencia, cualesquiera sean las posiciones que adoptemos cuando pensamos con respecto a Cuba o con respecto al Congo Belga, es decir, seamos pro fidelistas o antifidelistas, hay una verdad esencial que debemos decir desnuda y descarnadamente, y es, señor presidente, que países de una pequeña estructura económica interior, países que me atrevo a decir que no están siquiera en condiciones demográficas que les permitan una relación de fuerza con las grandes potencias, hoy pelean, y pelean un poco como decía Arévalo: es a lo mejor la lucha entre el tiburón y la sardina. Yo no voy a hacer ningún tipo de calificación, pero sí quiero significar la dimensión de dos países, uno de los cuales, de escasa estructura interna, ha nacionalizado todos o casi todos los sectores que estaban en manos de extranjeros. Esto, señor presidente, lo digo para hacer resaltar que, indiscutiblemente, el imperialismo opera en la medida en que haya una clase social que le signifique una alta receptividad interna, o sea, que si aquí el imperialismo británico logró doblegar nuestra economía, no fue exclusivamente por los aparatos de tipo económico que pudiera el imperio británico, la Albion, introducir en la Argentina. Fue también porque había una clase oligárquica interesada en esa deformación económica porque era la beneficiaria directa de la misma. Es decir, una oligarquía agroproductora, y al mismo tiempo, también agroexportadora, que posibilitaba, actuando como catapultas políticas — digamos así —, que Inglaterra realizara lo que realizó a fines del siglo pasado y comienzos del presente.

De modo, entonces, que tenemos que tener cuidado en no caer en manifestaciones de este nacionalismo oligárquico, que se mezcla en la Argentina con postulaciones de centro izquierda, y de no caer en una especie de complejo de inferioridad. Cualquier ley que posibilite, como lo hace la ley nacional de energía eléctrica, el aporte de capitales extranjeros para nuestro desarrollo energético, no será peligrosa en la medida en que el país esté preparado para recibirlos, en la medida en que su estructura interna, conformada por sus fuerzas obreras, por sus fuerzas empresarias, por sus partidos políticos, por sus fuerzas armadas y por su pueblo, permita defender en totalidad lo que nosotros entendemos que es nacionalismo popular.

Ahora bien: se propicia una ley nacional de energía en la Argentina y aquí como ocurre siempre con respecto a los grandes temas, se produce una división vertical en la opinión pública, que no sé si cala profundo y no sé si llega en sus reales términos al hombre de abajo, a ése

que vive en el Gran Buenos Aires y cuando regresa a su piecita, que alquila por ahí en algún conventillo, no tiene luz eléctrica; no sé si a esos hombres les llega el planteamiento de algunos teóricos de izquierda y de derecha que sólo buscan la quinta rueda del carro con respecto a la ley nacional de energía.

En esa forma, señor presidente, la opinión pública se divide en forma tan vertical y tajante que inclusive se presentan cosas que nosotros creíamos ya superadas en la vida política argentina. Los señores conservadores, representantes de la Federación de Partidos de Centro —que nunca he podido saber si es una federación de partidos o una federación de fuerzas económicas—, se presentan en el comité de la Unión Cívica Radical del Pueblo y, juntamente con los disidentes de la UCRI, esgrimen una táctica para oponerse a la ley, en vez de concurrir al recinto, como es su obligación, porque para eso el Estado, que es el pueblo argentino, les paga, para debatir en el recinto lo que ellos entienden que está contra los intereses nacionales.

De manera que esto no es así porque sí. Y en apoyo de la tesis que voy a sustentar, citaré al doctor Walt Rostow, profesor del Instituto de Massachussets, quien sostiene, en su libro *Las etapas del desarrollo económico*, que a cada etapa del desarrollo corresponde, invariable e inexcusablemente, un tipo de mentalidad.

Diré, señor presidente, que en la Argentina están jugando dos mentalidades que surgen, precisamente, de la conformación de la estructura social o demográfica de tipo tradicional y de la irrupción, dentro de esta estructura, de hombres que quieren transformar drásticamente la estructura económica para posibilitar un desarrollo que nos dé auténtica soberanía nacional.

Dice el profesor Rostow que en el proceso de desarrollo de los pueblos se producen cinco etapas, a partir de 1700. Sostiene que la primera etapa es la tradicional; la segunda son las precondiciones para el *take off*, término inglés que significa el *decollage*; la tercera etapa, el *decollage* en sí, y este término tiene el siguiente significado socio-económico: una sociedad que logra llegar a una etapa tal que tiene la posibilidad de un crecimiento autónomo, es decir que posee una economía que está a poca elevación de la tierra —como si fuera un avión—, pero que permite una sustentación y expansión propias. La cuarta etapa —prosigue— es el camino hacia la madurez económica, y termina, como etapa superior de este proceso del desarrollo, con el análisis de las naciones altamente industrializadas como son Estados Unidos y los países del continente europeo, que están ya en la quinta etapa, que él define como la del «alto consumo masivo» y que individualiza en el consumo popular del automóvil. Y entonces añade este profesor, en la página 72 de su libro, lo siguiente: que se suceden distintas generaciones en el proceso de

desarrollo, con distintos objetivos y mentalidades. La primera generación, partiendo de las precondiciones del *take off*, que hace arrancar o pone en movimiento el desarrollo; la segunda generación —dice— es la mano dura que conduce a la madurez a pesar de sí misma; y la tercera —dice— es la cautelosa y cómoda, una vez que el país está desarrollado, que conduce los negocios como profesión. En esta etapa estaría Estados Unidos, es decir el individuo que ya heredó un país hecho y que lo conduce con técnica burocrática y profesional. Pero nosotros estamos en la etapa de la mano dura, en la etapa de lograr que el país entre precisamente por el camino de la madurez. Y en la primera hoja, donde él dice en qué momento ha entrado cada país a esta etapa de *decollage*, vemos que la Argentina entró alrededor de 1955, contra un ingreso a esta misma etapa por parte de, por ejemplo, Gran Bretaña, en 1850.

Muy bien, señor presidente; es decir, entonces, que en su camino hacia la madurez económica, la Argentina crea dos mentalidades: la del nacionalismo económico, tipo Marcelo Sánchez Sorondo, con su, digamos así, periódico «Azul y Blanco», y la de centro-izquierda, que representa el radicalismo populista a través de quizá su teórico, Miguel Angel Zavala Ortiz, y aquí, los hombres que piensan serenamente en política no entienden absolutamente nada de nada, porque evidentemente esas dos fuerzas que aparecen totalmente en pugna en los aspectos teóricos o doctrinarios, cuando llegan a la realidad están ubicadas dentro de la línea colonialista. Y yo califico y digo sin ningún temor que están en esa línea porque lo único auténticamente revolucionario en la Argentina de 1960 es crear las condiciones del desarrollo económico. (Aplausos.)

Es muy fácil ser revolucionario en las tribunas públicas, y sobre todo pretender que la Argentina tenga el desarrollo energético que necesita, como dicen ellos, por vía del ahorro nacional, cuando saben que hasta para pagar el déficit presupuestario, el que nos deja fundamentalmente las empresas del Estado, hemos tenido que pedir fondos al exterior, porque el país no tiene poder de capitalización suficiente como para lograr disminuir drásticamente ese déficit.

Y ya, señor presidente, entrando propiamente en el problema de la energía y considerando la energía en su totalidad, o sea no hablando exclusivamente de energía eléctrica sino de todo lo que es energía, desde los combustibles hasta la energía eléctrica, haré consideraciones de orden general.

En primer lugar quiero decir que la energía, evidentemente, no tiene una gran participación en el producto bruto nacional de los pueblos. Está en el orden, para América latina del 2,3 %, pero la energía sirve a su vez como factor de producción y como factor de consumo. En los países subdesarrollados —caso Argentina, por

ejemplo— la electricidad, hasta hace muy pocos años, ha sido fundamentalmente un bien de consumo, y quizá de ahí que algunas compañías hayan podido hacer lo que hicieron.

Generalmente, cuando la electricidad o cuando la energía sirve a fines de producción general, están las estructuras de tipo empresario que se oponen y resisten y a veces vencen a las compañías para cualquier aumento arbitrario de tarifas.

La energía, en general, es el factor que define y delimita la productividad de un país. Un país se mide no solamente por los kilovatios hora por habitante que produzca sino que también se mide por el grado de eficiencia técnica y por los niveles tecnológicos en los que hay que incluir también la cultura industrialista que un país posea. Es decir, si lanzamos dos millones de kilovatios sobre una región cualquiera de los Estados Unidos, y si los lanzamos sobre la República Argentina, su rendimiento aquí, respecto de los Estados Unidos, sería fácilmente alrededor del 30 % inferior, porque no contamos con niveles tecnológicos sino que tenemos una industria brutalmente obsoleta, que necesita por supuesto un reequipamiento a fondo para poder colocarse en el tipo de rendimiento ordinario de los grandes países industrializados. La demanda de la energía está dada en función de varios factores. Por una parte, en los países subdesarrollados fundamentalmente está en función del nivel del ingreso *per capita* y tiene una curva en su elasticidad-ingreso muy similar a la de los alimentos. Es decir, en los países subdesarrollados, a medida que aumenta el ingreso, aumenta también el consumo de energía. Eso es así, porque posibilita fundamentalmente como bien de consumo el artefacto semidurable del hogar, que levanta los niveles de vida. Y una vez que el ingreso ha tomado determinado *plafond*, la curva de la demanda general de energía decae rápidamente con respecto a la de ingresos. Lo mismo pasa con los alimentos, que tienen una curva con una elasticidad tal que para determinado ingreso ya muy superior, los alimentos no aumentaban en la misma proporción en que aumenta el ingreso. Por supuesto que la demanda de energía —y en esto quería hacer especial hincapié— depende también de la estructura económica. Es decir, señor presidente, en general, en los países desarrollados la demanda de energía sigue una curva más suave, menos violenta, con menos curvatura que la del desarrollo general del país. Pero en los países de estado intermedio, como el nuestro, la estructura de la demanda está fundamentalmente definida por los sectores de las industrias pesada y extractiva. En la medida en que la Argentina logre, por ejemplo, llevar adelante su política de extracción minera y de industria pesada, a través de ferroaleaciones y de la llamada electroindustria, en las cuales la electricidad es precisamente materia prima, nuestras necesidades de energía han de seguir una curva

mucho más empinada que la del desarrollo económico general del país.

Por ejemplo, en Mendoza existen dos o tres grandes firmas que producen ferroaleaciones. Esta mañana estaba observando las estadísticas de las de ferrosilicio, por ejemplo, que para una concentración del 45 al 50 por ciento requiere alrededor de 7 mil kilovatios por tonelada. Y para esa misma aleación —que es básica para la siderurgia, es decir la que se necesita para la producción de aceros de alta resistencia, e incluso de mediana resistencia—, para una concentración de ferromanganeso o de ferrosilicio del 70 al 80 por ciento, nos encontramos con que la necesidad de kilovatios está en el orden de los 16 mil por tonelada.

Esto quiere decir que en esta industria, precisamente la materia prima no está constituida por el silicio o el manganeso, porque cuestan mucho menos que el valor del kilovatio que se emplea en el producto manufacturado. De manera entonces que la perspectiva en la Argentina, si dan resultado nuestros planes, como lo están dando, y se ensanchan los sectores de industrias básicas, va a producir una aceleración de las necesidades energéticas. Aun cuando nosotros no lo digamos, la Argentina tiene que violentar su grado de crecimiento: permanecer en una tasa de crecimiento de nuestra economía del orden del 2 ó 2,5 por ciento, no nos va a sacar sino en un largo período, de nuestro drama actual.

Y yo digo con toda responsabilidad, señor presidente, que la Argentina debe hacer lo que el señor John Kennedy en los Estados Unidos de Norteamérica, que propone, como él dice, el *new frontier*, nueva frontera, al pueblo norteamericano, y lo hace por el lado del sacrificio del bolsillo por una parte, porque dice que necesita ampliar el sector público de la economía, y también le manifiesta que la tasa de crecimiento de la economía norteamericana tendrá que llegar a un 5 %. Si Argentina quiere salir de las «peladuras», tendrá que violentar su tasa de crecimiento a expensas del consumo, con el sacrificio popular, pero en la seguridad de que en estas condiciones de difusión del poder mundial de que yo hablaba al comienzo de mis palabras, si nosotros no lo hacemos drástica y rápidamente, no sé yo si ese nuevo plan Marshall de los Estados Unidos —e incluso del occidente europeo— para América latina, no sé yo, repito, si ese plan, en lugar de ser beneficioso para la Argentina, no va a significar una disminución de las posibilidades de nuestro desarrollo en virtud de que serán muchas más las potencias para repartir los escasos recursos mundiales.

En materia de energía el mundo camina rápido, y son muchas las experiencias que se hacen en este momento para tratar de superar este cuello de botella de todas las economías

latinoamericanas y mundiales. Los técnicos de todos los países desarrollados del mundo están tratando de buscar nuevas fuentes de energía, porque a pesar de que los valores agregados sean escasos, el significado económico de la energía es un cuello de botella para todas las economías subdesarrolladas que frena todas las posibilidades. Los señores senadores recordarán perfectamente bien lo que significó en su momento la política de Nasser en la represa de Assuan, precisamente porque padecen el mismo drama que nosotros.

Entonces el técnico moderno se dedica a buscar nuevas fuentes de energía, y por supuesto que las encuentra. La nuclear, por ejemplo, que es una forma de energía térmica, está siendo rápidamente estudiada. Hay quienes hablan de que en 20 años estará en condiciones competitivas con respecto a la hidroeléctrica o a la térmica; hay quienes dicen que eso ocurrirá recién para el año 2000, pero es evidente, señor presidente, que las condiciones de estrategia mundial incluso hacen que estos planes se aceleren, no porque corresponde a la función exclusivamente económica sino porque conviene a fines exclusivamente militares y estratégicos.

No hay que olvidar, también, que en determinados aspectos la ciencia suele retrasarse no porque el técnico no está en condiciones de dar solución a los problemas, sino porque los ingentes intereses creados hacen que se retrasen los avances tecnológicos exclusivamente para poder salvar el capital invertido en el resto del mundo, en bienes que pueden convertirse súbitamente en obsoletos.

Se trabaja también en energía geotérmica y hay ya usinas de 230 a 250.000 kilovatios funcionando. En Italia se está terminando una.

La energía geotérmica es la que surge por vía, digamos, de chorros de agua caliente que vienen de gran profundidad de la tierra, que se aprovechan, por supuesto, para tratar de crear las condiciones de generación a través del calor que significa una forma de energía que contiene el agua caliente.

Otra fuente que debemos observar con detención para tratar de lograr el progreso técnico en materia de producción de energía es la mareomotriz. Esta energía, como todos los señores senadores lo saben, se produce en el proceso de ida y vuelta de las aguas en las playas. El agua, una vez que llega a la playa, sube, y es almacenada en verdaderos recintos, es decir, en diques especiales, y luego, cuando se produce la baja, se origina una diferencia de nivel que posibilita que el caudal, por la altura, dé una determinada potencia hidráulica.

Por supuesto que estas obras son muy caras, porque para darle continuidad necesaria, es indispensable realizar multitud de recintos estancos que convierten la obra generalmente en antieconómica.

La energía eólica no tiene significado sino en forma aislada, pero sí lo podrá tener en un futuro próximo la energía solar, sobre la que se están realizando estudios en todas partes del mundo, y para terminar estas experiencias del mundo científico contemporáneo, quiero significar también que en materia de energía a través de la diferencia de temperatura en las aguas del mar, está siendo estudiada con fines económicos. No se cree en la posibilidad inmediata, pero es evidente que la diferencia de temperatura que existe entre el agua a nivel del mar y el agua a 200 ó 250 metros de profundidad, puede ser aprovechada con fines técnicos para la creación de energía.

De manera, señor presidente, que conviene que esto lo tengamos presente con toda seriedad, y que lo tengan presente estos teóricos «a la violeta» que salen a luchar contra una ley que puede y debe provocar nuestro desarrollo económico. Es evidente que hay que tener en cuenta a estos factores porque nuestra necesidad de construir obras hidráulicas en el momento actual no sólo se circunscribe al estricto campo de la energía eléctrica, sino que determinadas obras que el país exige perentoriamente cumplen dos, tres y hasta cuatro fines. Es decir, si nosotros en el tiempo nos alejamos de la economicidad de determinados diques —los diques sobre el río Mendoza, sobre el río Tunuyán, El Chocón, las grandes obras que se pueden hacer en la Mesopotamia—, por la posible sustitución de otras formas de energía, no veremos privados de ampliar zonas de cultivo, de regularizar el tráfico fluvial en determinados ríos, y de multitud de beneficios derivados que trae una obra de este tipo.

No hay que olvidar que en el Tennessee Valley Authority, donde existen 32 diques, todavía se siguen estudiando sistematizaciones para lograr una explotación en intensidad, y esta experiencia, sobre todo a los fines del valle del río Negro, debe hacernos pensar que la energía en la Argentina no sólo va a provocar un desarrollo derivado, sino que a la vez puede crear nuevas y altas formas de la técnica moderna.

Yo he visto, señor presidente, en el Tennessee, por ejemplo, cómo hay más o menos 2 millones de kilovatios hidráulicos, derivados de la potencia hídrica de los ríos, y hay cerca de 10 millones térmicos que ha sido necesario colocar allí porque se estableció la industria de los fertilizantes, que hoy cubre todas las necesidades de los Estados Unidos y que ha permitido y le permiten a este país aumentar su producción de trigo arriba del 120 ó 150 por ciento en el término de los últimos 25 ó 30 años, porque ya en vez de hacer el proceso de producción agrícola extensiva, lo hace en forma intensiva, a través de estos fertilizantes que se obtienen del valle del Tennessee.

El país atraviesa una difícil situación en materia energética. Tenemos 1.039 centrales de

electricidad, con una potencia instalada de 2.305.000 kilovatios, que producen un trabajo energético que medimos en kilovatios hora de 7.800.000.000 de kilovatios hora, que atienden aproximadamente 1.300 ciudades y pueblos en el interior de la República. Pero existe también, aparte de esta energía contabilizada en forma de empresas comerciales o estatales, la autoproducción, es decir, aquellos industriales o comerciantes que por falta de energía se ven precisados a producir su propia energía. Y quiero significar al pasar, señor presidente, que generalmente esas autoproducciones de energía son deformantes de la economía, y son totalmente antieconómicas.

Observen los señores senadores este detalle: todo el país tiene una autoproducción de energía de 950.000 kilovatios de potencia, con una producción de 2.525 millones de kilovatio hora por año.

En cuanto al *ranking* mundial, los argentinos estamos en el 21º lugar, con 480 kilovatios por habitante y por año. En América ocupamos el cuarto lugar, y en América latina somos los segundos, ya que está por sobre nosotros Chile, en virtud de que, como dije hace un momento, las industrias extractivas son de alto consumo energético y Chile, como todos los senadores conocen, es un país que tiene una industria minera desarrollada, y en consecuencia un gran consumo energético y un gran desarrollo de sus fuentes hídricas de producción. Cerca de 410.000 kilovatios de estos 3.000.000 y poco de que hablo están ya totalmente obsoletos, y necesitan ser repuestos prácticamente a nuevo. Obsérvese el siguiente efecto económico: una determinada empresa, que tiene una usina diesel y que debe consumir 250 gramos de diesel oil o fuel oil por kilovatio, gasta 500 gramos de fuel oil —como está ocurriendo en la actualidad— y si se multiplican los 410.000 kilovatios de potencia por un excedente de 200 gramos de fuel oil o de diesel oil en la producción total de energía que estamos considerando, fácil será advertir las consecuencias económicas, derivadas del bajo rendimiento.

CADE y CIADE tienen en el país 820.000 kilovatios, pero se estima que las necesidades del Gran Buenos Aires están en el orden de 1.400.000 kilovatios. Es decir, tenemos que cubrir un déficit de 630.000 kilovatios. Si se tiene en cuenta el crecimiento vegetativo, este déficit exigiría un sacrificio a la Nación de alrededor de 20.000.000 de dólares por año. Pero como ese 6 % se aplica a cantidades que cada vez son más grandes, significa que tenemos que invertir por año 1.600 millones en la Capital Federal para mantener la curva de crecimiento vegetativo.

Por supuesto que este espantoso déficit podrá ser cubierto con el turbogenerador que viene para la usina de Puerto Nuevo, de 140.000

kilovatios, y con la usina de Dock Sud cuando esté terminada, de 600.000 kilovatios, teniendo presente que esta obra que inició la Revolución Libertadora se encuentra poco menos que paralizada porque el país no puede pagarla. La Nación necesita que el Banco Mundial o alguna institución internacional le financie los 80 ó 90 millones de dólares que le cuesta la usina de Dock Sud.

En cuanto a las posibilidades hídricas del país, me atrevo a decir que el nuestro no sólo tiene bastante potencialidad hidráulica, sino que, además, posee la ventaja de que está bien distribuida. Nuestra República tiene cinco zonas hídricas, de tal manera que las curvas de los caudales cronológicos de los ríos son complementarias. Y esto, que después seguramente el profesor Weidmann explicará en su aspecto jurídico, hace también a una realidad concreta que el técnico tiene que advertir: y es la necesidad de la interconexión en una gran red nacional que posibilite, por ejemplo, que el macizo andino, que es uno de los grupos o las zonas en que se divide la República, que tiene aproximadamente el 20 % de la energía total del país, pueda ser interconectado con la zona litoral dado que, repito, son complementarias sus curvas de caudales cronológicos y, consecuentemente, las posibilidades del diagrama de carga eléctrica básica que configura, con el 33,2 %, la zona del litoral. La zona Norte de la República tiene el 5,8 % del total; la zona centro, es decir San Luis y Córdoba, el 2,8 %; la andina, como dije, el 20 %; la litoral el 33 %, y la patagónica el 38 por ciento.

Y esto, señor presidente, tiene que configurar un solo sistema, que van a manejar manos argentinas a través del despacho de cargas y que posibilitará, incluso, que en la medida en que el capital nacional y el Estado posean dentro de esa red compensadas posibilidades de mantener el mayor número de horas o motores a sus turbogeneradores en marcha. Nosotros podemos, de esta manera, fijar desde la casa de despacho de carga el funcionamiento y el control total de la red de alta tensión.

La ley, señor presidente, ha sido atacada fundamentalmente en tres aspectos. Por una parte, se ha hablado de que el Congreso hace una delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Yo personalmente, no como legislador sino como ciudadano del país, prefiero que sea el presidente de la República —que es amigo nuestro, y aunque no lo fuera—, que es un solo hombre, el que ponga su firma sobre las concesiones que dicta la ley y sobre los convenios internacionales que se puedan hacer, y que sea no nosotros sino incluso la historia argentina quien lo pueda juzgar.

Personalmente, con el respeto que me merece el Congreso de la Nación, del cual soy parte accidentalmente, y con el respeto que me merecen todos los grupos colegiados, tengo la obli-



gación de decir que los negociados que en materia energética se han hecho en este país, se han realizado a través de cuerpos colegiados, y buscando el concejal o el representante popular que sea fácil o suave —mejor suave— y asequible a cualquier situación personal que se le pueda ofrecer para votar en contra de los intereses auténticamente nacionales.

Pero, aparte de eso, y dejando la cita que podría hacer con respecto al profesor Bielsa —porque seguramente la hará el señor senador Weidmann, quien va a informar sobre la parte jurídica—, quiero sí hablar de una famosa comisión de poderes ministeriales de Inglaterra, y de las opiniones vertidas por una señorita Wilkinson y el profesor Laski. Este de Laski lo traigo al recinto porque viene bien para los intelectuales de pseudoizquierda que creen que nosotros estamos cometiendo un acto que incluso, dicen, podría estar penado con ese famoso artículo de la Constitución Nacional según el cual podríamos ser en lo futuro traidores a la patria.

Esta comisión de poderes decía, por ejemplo, en el informe de la señorita Wilkinson: «El Parlamento sólo puede tratar, real y efectivamente, con los principios y el plan general de la legislación propuesta. Los detalles deberán ser dejados a los expertos. Esto haría posible que la Cámara de los Comunes discutiera, cabal e inteligentemente, sus grandes lineamientos, y permitiría ejercer un control más efectivo sobre el Ejecutivo.» Y esto va para los radicales del pueblo y los conservadores de diputados, al decir: «Cuando el Parlamento se transforma en una carrera de obstáculos en la que el único deber de la oposición es el de imponer vallas y fosos en el camino...» Y Laski dice: «Estoy en un todo de acuerdo con la señorita Wilkinson en recalcar la conveniencia de la legislación delegada como el único medio de abordar las funciones que ahora ejecutan los gobiernos modernos.»

Es decir, señor presidente, que estos dos tratadistas, uno de ellos político, admiten que es necesario, para darle ejecutividad al Poder Ejecutivo, la delegación de poderes.

En cuanto a la jurisdicción —y aquí que me perdone el señor senador Weidmann por incursionar en el tema— algo tengo que decir porque soy el representante de una provincia que tiene, a lo mejor, un concepto exagerado del federalismo, pero también una profunda conciencia formada de la importancia del agua. De niño vengo leyendo los diarios cuando algún agricultor mata a otro por el «chorrito» de agua, porque en Mendoza todo se refiere, en su economía, a las posibilidades hídricas de la provincia. Así se ha hecho una campaña en contra del gobierno de la provincia, lo mismo que en el orden nacional, tratando de decir que nosotros estamos vendiendo o entregando la provincia.

Mendoza cuenta con una ley, la 2.625, dictada en 1958 por el gobierno de la UCRI, cuyo artículo 1º establece textualmente: «El otorgamiento de concesiones para aprovechar los cauces públicos naturales y artificiales en la producción de energía eléctrica estará condicionado al cumplimiento previo de los trámites y requisitos establecidos en la presente ley.» El artículo 2º dice: «La energía hidroeléctrica que se genera en las concesiones de los cauces públicos, en las condiciones que esta ley determine, será utilizada en las actividades que se enumeran seguidamente» y se declararán después industrias de interés provincial, etcétera.

Es decir que Mendoza avanzando sobre lo que es concesión, en esta ley que estamos tratando, establece la posibilidad de que el gobierno de la provincia diera concesiones en su cauce para todas aquellas empresas que quisieran utilizar esa energía con fines exclusivamente industriales, para proveer energía a una determinada industria de interés provincial, con la sola restricción de que un 10 % ó un 15 % de esa energía se pasara a una determinada empresa de la provincia, a los efectos de cumplir y de satisfacer las necesidades de los servicios públicos. Y con vistas a esta ley, y con conocimiento de que sería sancionada —porque no lo dudábamos— nosotros tenemos pedidos en este momento en Mendoza, por parte de Carbometal, 35.000 kilovatios, sobre el río Tunuyán; de Industrias Siderúrgicas Grassi, 20.000 kilovatios, en Malargüe; de CIBA, 30.000 kilovatios, en el río Mendoza; de Ecsal, 3.000 kilovatios, en el río Tunuyán, y de Casale, 10.000 kilovatios en el arroyo Las Tunas.

De modo que, señor presidente, el total, de acuerdo con los pedidos a que me he referido, asciende a la suma de 2.000 millones de pesos.

El gobierno de Mendoza y los legisladores observamos la primera ley que salió, y sobre la base de esa observación que le hicimos juntamente con los representantes de Córdoba se han realizado las modificaciones que permiten decir que el interés provincial de ninguna manera se ve disminuido, ni la jurisdicción entorpecida o disminuida por la ley nacional de energía eléctrica. Es más: el artículo 15, en su inciso 2º, reconoce taxativamente la facultad privativa originaria de la provincia para reglar todo lo concerniente al uso y aprovechamiento de las aguas públicas, y sólo por excepción, cuando ese uso sea con el objeto de producir energía hidroeléctrica, según los términos del artículo 6º de la presente ley, podrá ser reglada con el objeto de salvaguardar los otros usos provinciales.

En el aspecto que correspondería a la Comisión de Industrias del Senado, en el tratamiento de este proyecto de ley, yo podría hacer una exposición sobre los distintos sistemas eléctricos que prevé la ley y sobre los dife-

rentes mecanismos técnicos que se han concebido. Honestamente, no lo creo necesario; por ello omitiré tal exposición. Pero sí quiero decir, antes de finalizar, algo con respecto al tercer punto, por tratarse de un punto que ha sido tan criticado, en particular por los radicales del pueblo. Acotaré, señor presidente, que los radicales del pueblo, cuando estábamos juntos, representaban la derecha, y ahora, súbitamente, representan la izquierda estatizante en la República Argentina; los radicales del pueblo quieren ahora que todo se estaticé, porque ésa es la mejor forma para colocarse en el camino del coloniaje. En realidad, el hecho es que la ley posibilita la participación del capital privado y que en el fondo lo único que hace al servicio público es la distribución final de la energía; es decir, todo lo anterior, la energía vendida en barra, las redes secundarias, las redes de alta tensión y la generación, de acuerdo con los conceptos que fija la ley, no constituyen servicio público.

Quiero citar, señor presidente, el estudio de la CEPAL con respecto a la energía en América latina, y lo hago advertido y convencido de que si bien los técnicos internacionales de este organismo no representan un partido político determinado, no son, me atrevería a decir, por sus concepciones económicas, la derecha del mundo capitalista contemporáneo, sino que representan más bien la izquierda.

Dice en ese estudio un párrafo que voy a leer: «no se formularon hipótesis acerca de las fuentes que financiarán las necesidades de capital para el suministro de la energía en América latina —es decir, el principal problema, por otra parte—, pues ello dependía de varios factores que son difíciles de prever y cuyo análisis rebasaría los límites del presente trabajo. La labor por realizar es tan vasta que cada vez se ahonda más el convencimiento de que sólo podrá encontrarse la solución adecuada mediante la acción coordinada del esfuerzo fiscal y privado. Además, la ayuda de las instituciones internacionales de crédito podrá facilitar la ejecución de muchos proyectos, colaborando así eficazmente en el desarrollo económico de estos países y en el mejoramiento del nivel de vida de sus poblaciones».

Es decir, señor presidente, que la CEPAL admite que incluso por vía del ahorro nacional no es posible realizar las inversiones necesarias, y sobre todo si analizamos y advertimos que, en la Argentina, hay que hacer un proceso de selección en cuanto a en qué sector vamos a aplicar los fondos estatales. Por ejemplo, no es lo mismo conseguir financiación exterior para energía que para caminos. Generalmente, para caminos hay que conseguir alguna institución internacional pública que quiera prestar, en tanto que en materia energética podrá colaborar el capital privado.

Se me dirá que viene la American And Foreign Power Company, es decir el grupo ANSEC, y que va a venir SOFINA, etcétera, y yo les digo que admito que podrán venir los trusts a realizar determinada obra, pero que si nosotros los argentinos hemos superado nuestro complejo de inferioridad, debemos advertir que el capital no podrá ser colonialista si nosotros permitimos que se desarrolle en el área que nosotros queremos. Dicho de otra manera, el capitalismo nacional puede ser colonialista —no hace falta que vayamos a buscarlo a Estados Unidos, Inglaterra o Alemania Occidental— en cada sector económico donde se invierte; a pesar de ser dinero del ahorro del producto nacional, puede ser instrumento de sustentación colonial.

De manera que, señor presidente, de qué bandera será el capital que se incorpore al país, me tiene personalmente sin cuidado, porque sé que si hemos superado el complejo de inferioridad y tenemos estructuras que posibiliten la defensa de lo nacional y popular, no habrá ninguna potencia en el mundo que pueda sojuzgarnos o meternos en caminos por donde los argentinos no queremos ir.

Para terminar, quiero decir simplemente esto: como hombre de una generación nueva, como hombre joven con muchas inquietudes, quiero decir desde esta banca de senador nacional a Moisés Lebensohn que nosotros, esta generación, con sacrificio está realizando la Argentina por él soñada. Nada más. (*¡Muy bien! Aplausos prolongados.*)

**Sr. Nogueira.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Nogueira.** — Señor presidente: el momento que vive el país y la acción que para su desarrollo y expansión se ha propuesto llevar a cabo el gobierno nacional, requieren la formación de un cuerpo legal de carácter general que estimule y promueva el uso de los recursos económicos y técnicos en materia de energía, tendientes a posibilitar la capitalización del país.

No por sabido está de más expresar que la energía constituye para la humanidad un elemento de capital importancia, no sólo como factor de regulación de las actividades económicas, sino también como elemento de bienestar, al elevar, bajo el aspecto social, el nivel de vida de los pueblos.

Energía es sinónimo de fuerza y trabajo, o lo que es lo mismo, poder y riqueza, que se reflejan en la posibilidad de concretar las aspiraciones humanas para una vida mejor, producto de actividades fecundas y productivas.

De allí el propósito perseguido por los principales países de alcanzar en el más breve plazo la producción de energía necesaria para enjugar sus propios déficit, y si en el mundo existe infraproducción de energía, esa descapitalización es más notoria aún en nuestro país, donde

sus necesidades están bien lejos aún de ser ni medianamente cubiertas.

De allí la urgencia de impulsar el desarrollo energético, mediante un instrumento que haga posible la necesaria armonía que debe existir entre las múltiples partes intervinientes comprendidas entre el usuario y el proveedor, sin desconocer la preponderancia que cabe asignar a los intereses generales de la población. En esa forma será factible la promoción intensiva y racional de los imponderables recursos de que dispone el país en todos sus ámbitos.

La iniciativa del Poder Ejecutivo se particulariza en la energía eléctrica, que representa hoy el medio más favorable para elevar los rendimientos de la producción que habrá de sacarnos de la situación de escasez en que vivimos.

Para tener una idea de nuestro subdesarrollo en tal sentido, podemos decir que, mientras el promedio de consumo eléctrico mundial oscila en los 1.200 kilovatios por habitante y por año, en el país sólo alcanza de 350 a 400 kilovatios, correspondiendo a algunas provincias la irrisoria cantidad de 35 kilovatios. De más está decir que en nuestra campaña la electricidad es casi desconocida, existiendo estadísticas que fijan en un 35 por ciento de la población la que no hace uso de electricidad.

De ahí la necesidad, repetimos, de formar el ambiente propicio para incrementar la producción de este medio de progreso, a lo que habrá de contribuir el proyecto en tratamiento que posibilita la cooperación de capitales, ya que nada ganaría el país si el fomento de este medio energético quedara totalmente en manos del Estado.

Para dar un ejemplo más de la necesidad de disponer con toda urgencia la adopción de medidas que hagan cesar nuestra situación de atraso, retardatoria y hasta paralizante, quizá, de toda actividad creadora, traemos a colación el siguiente análisis. En condiciones normales, el consumo de electricidad se duplica —según el ritmo de desarrollo industrial y la expansión de los servicios públicos— entre ocho y doce años. Si además de ese aumento se deseara cubrir el déficit energético del país, que para 1959 fue de 1.600 millones de kilovatios, para 1970, por ejemplo, deberíamos disponer de plantas de producción que nos suministren no menos de 20.000 millones de kilovatios año.

Ahora bien; si la producción de energía hidroeléctrica siguiera el ritmo actual, es decir, si no se impulsara la utilización de las inmensas posibilidades de esa índole que dispone el país y se conservara por lo tanto la proporción actual de energía eléctrica producida por medios térmicos e hidráulicos —que es de 92 y 8 por ciento, respectivamente—, para el año 1970, que tomamos como ejemplo, se habrán consumido combustibles por un valor no menos de los 100 mil millones de dólares.

Es evidente, entonces, que debe recurrirse a la producción de hidroelectricidad mediante la utilización de los fabulosos recursos que posee el país hasta llegar por lo menos a disponer de 4 millones de kilovatios y sus correspondientes sistemas de transporte y distribución.

Sólo así podrá conseguirse el propósito que inspira el Poder Ejecutivo al someter a nuestra consideración el proyecto que nos ocupa, es decir, cubrir en un futuro cercano nuestras actuales demandas y las nuevas que el crecimiento vegetativo e industrial originen. En una palabra, disponer de energía abundante y barata, aun en los lugares apartados, esto por medio de la interconexión de las grandes centrales que dispondrá el país al resolver el aprovechamiento de nuestras enormes reservas.

Resultará ahora interesante exponer algunos conceptos relacionados con esa interconexión, que tantos cambios de opiniones ha motivado.

La producción de hidroelectricidad está reglada por dos factores esenciales: la diferencia de nivel del salto de agua y el volumen disponible de esta última.

Resulta evidente, entonces, que para aquellas zonas del país donde en determinadas épocas se disponga de grandes caudales, será factible la obtención de significativas potencias energéticas.

Tal lo que acontecería en aquellos lugares donde los cursos de agua son alimentados por los deshielos, en los que se acentúa la disponibilidad de energía en primavera y verano y correlativamente disminuye en el invierno.

En esta consideración general se descuentan aquellos ríos de grandes y permanentes caudales. Debe aclararse que si bien el represamiento permite cierta regulación de caudales, ello no lo es en grado tal que posibilita una producción uniforme de energía en el transcurso del año. Por otra parte, aunque fuese posible esa producción uniforme, los consumos no guardan la misma relación en el transcurso del día.

De allí la necesidad de buscar el medio de compensar esas fluctuaciones y disparidades entre producción y consumo, lo que es factible conseguir no sólo mediante equipos suplementarios de producción para su puesta en marcha en los instantes de picos de máximo consumo, sino por medio de la interconexión de centrales de variables regímenes de producción.

Resulta evidente, entonces, que el sistema significa una sensible economía al posibilitar una utilización más racional de las potencias posibles de transportar de cada central, ello relacionado por supuesto con el factor económico emergente del costo de la instalación, de interconexión y transporte.

Si analizamos lo expuesto con cifras, podemos decir que la energía eléctrica que podemos obtener de nuestro sistema hidrológico, está calculada en algo más de 10 millones de kilovatios, de los cuales corresponderían: a) la zona del Nor-

deste de la República ubicada al Norte del paralelo 28, cuya mayor posibilidad hídrica se produce en verano, sólo contribuye en aquel total con 700.000 kilovatios; b) la región de Córdoba y San Luis, cuyos recursos energéticos de la índole que nos ocupa están en vías de ser casi totalmente aprovechados, contribuye tan sólo con alrededor de casi 300.000 kilovatios, potencia completamente insuficiente en relación a sus verdaderas necesidades, y de obtención también en épocas estivales; c) Mendoza, San Juan y La Rioja poseen un sistema hidráulico que posibilita la obtención de una potencia del orden de los dos millones de kilovatios, la que por su vecindad habrá de compensar a los picos de consumo de la región central ya tratada; d) nuestro litoral mesopotámico, con ríos de grandes caudales que hasta podrían ser tributarios entre sí, suministrarían no menos de 3 millones de kilovatios; e) por último, la zona patagónica, desde la provincia de La Pampa al Sur, posibilita la obtención de alrededor de 4 millones de kilovatios.

Ahora bien; un estudio detenido de las necesidades de las regiones nombradas permite determinar que no es precisamente en sus momentos de mayores posibilidades de producción energética que se presentan las mayores demandas de consumo, por lo que surge como solución de equilibrio la aludida interconexión que posibilita una racional utilización de las centrales, y como reflejo de esa adecuada disponibilidad de energía la expansión industrial del país y, por ende, el progreso de todas y cada una de las provincias mediante este arbitrio, que estará en manos del Poder Ejecutivo con la intervención reguladora que la ley en tratamiento otorga al Consejo Federal de la Energía Eléctrica, en el que estarán representados los Estados provinciales y esta Legislatura nacional, entre otras instituciones.

Resulta evidente, entonces, que la puesta en marcha del sistema legal encarado en este proyecto en revisión requiere una serie de medidas tendientes a facilitar las obras de captación, producción y transporte de energía. Entre ellas se encuentran las disposiciones contenidas en el artículo 10, que estatuye la declaración de utilidad pública y la posibilidad de expropiación de aquellos bienes de cualquier naturaleza, obras, instalaciones, construcciones, etcétera, de cuyo dominio fuera necesario disponer para alcanzar los altos fines perseguidos.

En el articulado se hace mención a lo genérico de declaración de utilidad pública, a lo que la Comisión de Obras Públicas encuentra atendible si se tienen en cuenta las múltiples facetas de estos tipos de obras que hacen casi imposible su determinación previa.

De allí entonces la diferencia entre las disposiciones de este artículo y lo establecido en el artículo 29 de la ley básica de la materia, la 13.264, donde se determina que la declara-

ción de utilidad pública se hará en cada caso y con referencia a bienes determinados.

Contra esta determinación genérica de utilidad pública habrá de asistir a quien pueda ser afectado por la expropiación el derecho de reversión del bien, si cesaren o no se cumplieren las causales de esas expropiaciones.

Resumiendo todo lo expuesto, podemos expresar que la aprobación de la ley de energía eléctrica posibilitará llevar la producción de ese tipo de energía a su nivel apropiado para cubrir el déficit actual y satisfacer las necesidades futuras, sobre todo en el interior del país, permitiendo así la expansión de sus economías hoy resentidas, casi podríamos decir principalmente por el problema energético, que abruma a la generalidad de las provincias. El problema de la Capital Federal y la zona del Gran Buenos Aires podrá ser encarado en todos los aspectos de su gran complejidad.

En nombre de la Comisión de Obras Públicas dejo pues informada, en la parte que a ella compete, la ley de energía eléctrica. Nada más. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Weidmann.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Weidmann.** — Señor presidente: se encuentra abocado el Senado de la República al tratamiento de una de las leyes más fundamentales que han entrado en debate desde el advenimiento del gobierno que asumió el poder el 19 de mayo de 1958. La ley de nacionalización del petróleo y la correspondiente batalla librada en 1958, así como esta ley de la energía eléctrica que va a posibilitar el aprovechamiento integral de ese gran elemento indispensable para el progreso económico de la República, constituyen dos factores promotores del desarrollo nacional en una etapa en que el país necesita, ineluctablemente, energía en abundancia y en condiciones de economicidad para poder utilizar la enorme riqueza potencial de que tanto nos enorgullecemos, pero que yace en gran medida, sin explotación y sin utilidad social, sirviendo tan sólo para inspirar el canto de los poetas y para la fácil declamación de todos los que hoy, en una posición negativista, añoran viejos tiempos y desconocen la realidad dramática de la hora actual.

Como hombre de una generación nueva, en lo que hace a compartir las responsabilidades del gobierno de la República, no tengo ninguna vacilación en decir que, interpretando que la política es la ciencia y el arte de gobernar, dicha ciencia y dicho arte tienen que estar al servicio de los intereses nacionales. De nada valen las disquisiciones metafísicas, las grandes concepciones doctrinarias y las lucubraciones teóricas, por sí solas, si ellas nos mantienen alejados de la realidad nacional.

Durante muchos años, y ésta es una confesión que debemos hacernos nosotros mismos, señor presidente, hemos vivido enamorados de hermosas teorías tendientes a labrar el bienestar nacional, a liberar al hombre del estado de necesidad, a independizar al país y a que todo el pueblo conquiste un nivel de vida decoroso y con suficiente grado de capacitación cultural y de perfeccionamiento espiritual, que lo haga digno de los grandes forjadores de la nacionalidad. Pero esas argumentaciones contenidas en nuestras concepciones programáticas han demostrado, a través de las transformaciones de las condiciones en que se desenvuelve el universo, su falencia definitiva por falta de concordancia con la realidad. No han fracasado los fines, porque los fines son inmutables. El perfeccionamiento social, la independencia del hombre, su liberación del estado de necesidad, del atraso, la miseria, la ignorancia, la enfermedad y de todo signo de regresión; eso, señor presidente, es lo eterno, es lo que llevamos nosotros escrito en la portada de nuestra concepción programática, y ése es el signo que nos guía a través de tan dura lucha. Lo cambiante, lo mutable, lo que debemos adecuar, son los instrumentos que han permitido la realización de esos grandes fines. Y si las teorías nacionalistas, proclives a la estabilización de los servicios públicos, han demostrado su falibilidad por la imposibilidad de llevarlas a la práctica, ¿por qué, señor presidente, nos hemos de aferrar a viejas concepciones, hermosas en su contenido teórico pero inadecuadas en la hora actual para servir al país?

Yo digo, señor presidente, que no tengo prejuicios mentales y que considero que lo ideal hubiera sido que el país se autoabasteciera de energía mediante sus propios recursos, y que fuera la comunidad nacional la que —mediante organismos autárquicos o mediante cooperativas de usuarios— atendiera la prestación de sus servicios públicos, desde la etapa de la generación, en el caso de la electricidad, hasta la de su distribución. No obstante, considero también que querer hoy encerrarse en términos de una concepción de ese tipo es cerrar las puertas al progreso y condenar al país al atraso, al estancamiento y a la regresión. Y eso jamás lo puede aceptar un hombre que sienta palpitar en su sangre el espíritu nacional, que quiera servir a su país y no a ideas y doctrinas puramente teóricas, por hermosas y brillantes que sean, por atraentes que resulten cuando se las expone en la tribuna pública y en discursos parlamentarios.

Yo celebro que nuestro partido haya anunciado públicamente que se va a proceder a una revisión de su programa. Es indispensable, aunque más no sea que para hacer comprender a muchos que viven apegados a fórmulas y que no tienen sensibilidad humana, por más que asu-

man las responsabilidades del gobierno, que la hora actual del mundo ha evolucionado y que todos los partidos políticos que cumplen sus fines como instrumentos de gobierno, en todas las latitudes, han evolucionado paralelamente al fenómeno económico-social, que es mutable, cambiante, y en cuyo dinamismo tiene decisiva influencia el extraordinario progreso de la ciencia y de la técnica. En materia de gobierno, no podemos aferrarnos a viejas fórmulas, a concepciones obsoletas en el campo de la programación. Debemos ceñirnos a la realidad, y la realidad —como se ha dicho tantas veces desde que estamos abocados a la elección de medios idóneos para promover el desarrollo del país y dar el gran salto que nos permita recuperar los cincuenta años de atraso en que el colonialismo y un nacionalismo irreflexivo, quizá inconsciente, nos mantenían sumidos— nos indica que para ello es necesario romper muchos diques y cambiar esquemas mentales cargados de prejuicios, encadenados a un pasado que jamás volverá, a menos que queramos ver una vez más al país condenado al atraso y al estancamiento.

De ahí, señor presidente, lo que precisamente va a hacer nuestro partido: incorporar a sus programas los medios técnicos y científicos más modernos, así como las novísimas concepciones que, en materia de gobierno de los pueblos, se consideren más adecuadas y todo lo que la experiencia de nuestros investigadores y de nuestros pensadores haga aconsejable para promover el bienestar general.

Yrigoyen y Alem, Moisés Lebensohn, Luis Dellepiane y tantos otros que hemos ido dejando en el camino, nos mirarán con orgullo, admiración y respeto, porque la bandera que ellos nos legaron, no la vamos a dejar enmohecer en el asta del atraso, so pretexto de someterlos a un pasado histórico, que nada construye. La vamos a recoger y hacer flamear llena de vigor por los campos de la República, como signo del gran avance a que llevaremos a la Argentina. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Voy a encarar, señor presidente, dos aspectos fundamentales de esta ley de la energía eléctrica, que han concitado la mayor oposición de los sectores políticos, económicos y sociales que han hecho público su disenso: el de la jurisdicción nacional, en lo que hace a la generación, producción y transformación de la energía eléctrica en los términos en que el proyecto que nos viene en revisión de la Cámara de Diputados lo ha concretado, y el de las concesiones para la explotación de estos servicios, a que se refiere el artículo 11.

Hace pocos días, con motivo de crearse una comisión que va a estudiar un régimen legal para los ríos interiores, con el objeto de proponer también los medios de lograr el aprovechamiento integral de las cuencas hidrográficas de la República, tuve oportunidad de decir

que la vieja concepción del federalismo llamado histórico, está totalmente perinclinada y sirve solamente como medio de obstrucción. Porque lo que se está haciendo en el Parlamento, en las columnas de los diarios, a través de la radio y en muchos otros ámbitos en que se ha llevado a la opinión el debate, es obstrucción con mayúscula, y eso debe decirse. Yo no admito, señor presidente, que sea honesta, desde el punto de vista democrático, la táctica de obstruir el desarrollo de un país. Acepto la crítica. Convento que esta ley tiene defectos, que es perfectible, pero señalo desde aquí que no nos han indicado medios idóneos de posible ejecución que sustituyan a los que este proyecto de ley propone como medio de lograr el aprovechamiento de la energía eléctrica en la República.

Todos los proyectos que han visto la luz pública en esta materia, pretendiendo sustituir al del Poder Ejecutivo, adolecen del mismo defecto: se desenvuelven en el terreno de la utopía; pretenden realizar un ideal y olvidan la realidad dramática del país. Saben perfectamente que nuestro ahorro nacional, nuestra capitalización, son totalmente insuficientes para llevar a cabo esta gran realización económica, y conocen perfectamente que los capitales extranjeros y las industrias de otras naciones que puedan venir a facilitarnos el alcance de estas metas de nuestro desarrollo, no lo van a hacer por la vía que ellos proponen, solamente lo van a hacer, si nosotros establecemos una regulación legal que signifique una garantía para esos capitales. En tal sentido, ratifico lo que dije, con la claridad mental que lo distingue, mi colega por Mendoza. No tememos a las inversiones extranjeras; ellas irán a los sectores que les señalemos; se invertirán en aquellas actividades económicas que indique el gobierno federal, a través de su Parlamento y del Poder Ejecutivo. Por otra parte, el control del Estado, que es —en este caso— el poder delegante del ejercicio de una actividad, estará siempre presente, y cada vez que haya un asomo de desviación de los fines de utilidad nacional o de interés social en la prestación de un servicio adjudicado, allí estará el ojo avizor y el brazo firme y seguro del Estado, ejerciendo su potestad, que, repito, no la delega como tal, sino solamente como ejercicio de una función. El Estado tiene y reserva el poder como tal, porque éste es indelegable dentro de la acepción jurídica de esta institución.

Me voy a permitir, señor presidente, dado lo complejo de la materia, leer algunas acotaciones que he hecho sobre este asunto, pudiendo desde ya dispensas a la Presidencia y a mis colegas. Como voy a efectuar algunas citas de jurisprudencia y de autores nacionales que intervienen en esta polémica, quiero ser fiel para evitar luego discusiones acerca de lo que se dijo y de lo que no se dijo.

El Preámbulo de nuestra Constitución Nacional establece como objetivos fundamentales el de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, proveer a la defensa común y promover el bienestar general. La enunciación teleológica de las bases fundamentales contenidas en el Preámbulo facilita la valoración de las normas que integran el cuerpo jurídico de nuestra carta fundamental.

Dice Bielsa que «los preceptos constitucionales tienen, si no todos, en su mayor parte, una base en el Preámbulo». Ubicada esta base fundamental, hay que hallar las normas que garanticen el cumplimiento de ese objetivo. En este sentido, el artículo 67, inciso 16 de la Constitución Nacional, establece, entre las atribuciones del Congreso, la de «proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias... promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros... por leyes protectoras de estos fines...».

Luego de señalar los casos en que procede la legislación exclusiva del Congreso (inciso 27), el artículo 67 dice en su inciso 28 que es atribución del mismo «hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina».

Este poder de dictar leyes implica, como lo hace notar Bielsa, el poder interpretar la Constitución. En esta parte, señor presidente, sigo al doctor Eduardo Bengolea Zapata, a quien ya mencioné cuando se trató el proyecto de la comisión para el régimen legal de los ríos interiores.

El doctor Bengolea Zapata fue también la base de la exposición, en aquel célebre debate que tuvo como escenario este mismo Senado, en el que el doctor Alfredo L. Palacios sostuvo la tesis de la jurisdicción nacional sobre los ríos interprovinciales, sean o no navegables, porque los navegables, a mérito de la cláusula comercial de la Constitución —inciso 12 de este artículo— están sometidos ya a la jurisdicción nacional.

El juez Marshall, en el caso McCulloch v/ Maryland dijo a este respecto: «Creemos que una razonable interpretación de la Constitución concede a la legislatura nacional un poder discrecional para elegir los medios por los cuales ejercitará los poderes que le han sido conferidos y que permitirán a este cuerpo cumplir los altos deberes que le han sido encomendados, de la manera más benéfica para el pueblo. Y si el fin es legítimo, si se encuentra comprendido dentro del plano de la Constitución, todos los medios que sean apropiados y que se adap-

ten a esos fines, serán constitucionales, siempre que sean conformes con el espíritu y con la letra de la Constitución y que no se encuentren prohibidos por ella.» Alberto E. Coussio: *Facultad de las Comisiones Investigadoras del Parlamento*, p. 234, Colegio Abogados, Rosario, 1942.

Más que al concepto político-histórico del federalismo, la hermenéutica debe orientarse hacia aspectos económicos sociales que gravitan fundamentalmente en la estructuración de nuevas modalidades, más acordes con las necesidades y características impuestas por la realidad vital de cada día.

Conceptualmente, el federalismo constituye coincidencia de intereses armónicos, relación de entidades políticas de igual jerarquía y naturaleza, organización institucional realizada sobre la base del mutuo respeto y solidaridad, con el propósito de asegurar el bienestar general y la defensa común.

Dice Bengolea Zapata: «Federalismo implica fusión de intereses generales, la regulación de los cuales, en virtud de ese carácter, sólo puede corresponder a la autoridad federal, a las autoridades nacionales.»

Las nuevas y cada vez crecientes necesidades de la vida moderna, que se configuran sobre bases marcadamente técnicas y económicas, exigen soluciones eficaces de carácter integral y orgánico, que tengan en cuenta la realidad nacional, en relación a las características de la época y a las necesidades del momento.

El incremento industrial de nuestro siglo gravita de tal modo en la economía general, que resulta indispensable su regulación por vía legislativa, en defensa de la unidad económica del país. De ahí la «notable variación que van sufriendo las concepciones clásicas relativas a las relaciones interestatales y federoestadales» y el nuevo enfoque del federalismo, en el sentido dinámico, funcional, que permita un continuo y eficaz reajuste del ordenamiento jurídico, para adecuarlo a las cambiantes exigencias y modalidades de la vida nacional.

Vale la pena, señor presidente, detenerse un instante para comentar esta concepción que es novísima en nuestra interpretación de la Constitución Nacional. Estamos diciendo continuamente que hemos adherido al Mercado Común Latinoamericano y que queremos participar juntamente con el Mercado Común Europeo, el grupo de EFTA, los Estados Unidos, el Canadá, Australia y Nueva Zelandia, en la nueva comunidad económica europea, o sea, la Organización para la Cooperación Económica, con la finalidad de crear un gran mercado único, susceptible de elevar el nivel de vida de los pueblos, de permitir el aprovechamiento integral de todos sus recursos y de posibilitar la disminución de todos los costos, a través de la dimensión mayor de su mercado.

Si nosotros nos mantenemos en el federalismo histórico, en el aislamiento, de acuerdo con las viejas concepciones de la época de la Colonia, sería totalmente imposible llevar a cabo esa gran aspiración que, por supuesto, tiene que empezar por ejecutarse dentro de nuestro propio territorio, porque si bien es cierto que hay un gran principio de solidaridad que hace que consideremos también a los otros países hermanos, no es lo menos que debemos empezar por desarrollar nuestros propios recursos; ése es el principio de la interdependencia que signa las características de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

Bien lo ha dicho el señor senador por Mendoza: la interconexión entre las distintas jurisdicciones, además de corresponder a una exigencia de orden técnico, yo diría que es ineludible porque lo contrario sería una economía que implicaría la bancarrota y la imposibilidad del funcionamiento de sistemas aislados para las respectivas economías; no soportarían los costos. Esto también es necesario para hacer el gran mercado nacional. Teniendo energía en abundancia, con la compensación de las cargas de la economía —lo que explica el sistema de interconexión—, nosotros tendremos el gran mercado nacional. Habrá siderurgia, habrá caminos, y habrá industrialización.

Esta es la etapa que debemos alcanzar nosotros a breve lapso, redoblando esfuerzos, sacrificando en alguna medida el consumo nacional e imponiendo, si es necesario, grandes restricciones que serán compensadas, señor presidente, con la realización de este objetivo fundamental. La meta que queremos alcanzar no debe ni puede ser abandonada, por más que hallemos en el camino gansos capitolinos de la reacción. Ellos quieren vernos fracasar, quieren la inoperancia de nuestra acción, porque sólo nuestro fracaso y nuestra inoperancia podrían darles alguna posibilidad para ocupar los sitios del poder.

Pero qué cosa rara, señor presidente: en medio de la algarabía que se produjo alrededor de este proyecto de ley, hemos visto cosas inverosímiles, tal como un pretendido recurso —yo no sé de qué, porque es realmente una herejía jurídica— a las fuerzas armadas para que vengán a tutelar el interés nacional, impidiendo la sanción de esta ley. En medio de toda esa gama de técnicas de obstrucción, que con mucha profusión y gran habilidad —que ojalá estuviera puesta al servicio de una causa mejor—, desplegaran los adversarios de esta ley, el pueblo que no se ha hecho eco de este revuelo artificial, está callado; mira y observa. Está un poco receloso; está cansado de muchas promesas incumplidas a través de tantos años de vida institucional; está un poco dolorido y apretado por la necesidad, porque el costo de la vida se ha ido muy arriba. Pero ve las realizaciones, y aun-



que sufre y protesta, haciendo uso de un legítimo derecho y de una expresión muy humana del pensamiento, en esta alternativa el pueblo repudia a los eternos obstruccionistas, a los declamadores, y está con nosotros, señor presidente, porque ve que hacemos algo por el bienestar de la República. (Aplausos.)

Todo esto no significa —de ningún modo— crisis del federalismo ni desmedro de su jerarquía institucional; antes bien, implica una interesante evolución conceptual que favorece la utilización de las posibilidades económicas del país en beneficio general, sobre bases realistas de dinamía social. Es que, como acertadamente lo señalan la doctrina, la jurisprudencia y la legislación de los últimos años, los factores económicos y el progreso técnico que los caracteriza influyen fundamentalmente en el desenvolvimiento y la evolución del concepto federalista.

Las consideraciones económico-sociales van colocándose —por imperativo de la realidad—, en planos de preeminencia sobre los meramente políticos e históricos de gravitación tradicional, en la hermenéutica jurídica, inspirando nuevos criterios de interpretación constitucional. Se ha llegado así a comprender que una interpretación racional del federalismo no puede prescindir del factor económico, tan decisivo en la vida de la humanidad.

Y es así, señor presidente. Las mismas fronteras políticas a que aludíamos cuando la sanción del proyecto de creación de esa comisión especial, están superadas por el hecho económico y el hecho social. Ese es un atavismo del cual tendríamos que desprendernos, superando los prejuicios y preconceptos, y teniendo la valentía de afrontar la crítica.

Cómo vamos a estar eternamente estagnados en un estancamiento intelectual, regresivo y contrario a toda noción de progreso. ¡Yo me rebelo, señor presidente, y prefiero ser colocado en el banquillo de los acusados! No reniego de nada, pero sí hago una excogitación de los medios y de los arbitrios más eficaces para llevar a cabo el desarrollo nacional, y me quedo con ellos a despecho de todos los teorizadores y de todos los catedráticos que quieren pontificar en el ámbito de la República.

• Muy brevemente me voy a referir a la regulación de la energía hidroeléctrica en los Estados Unidos, país de sistema federal muy similar al nuestro, gran democracia, de cuyo espíritu republicano nadie podrá dudar. No sin dificultades ha sido superado el criterio clásicamente localista, y es así como por obra de la doctrina, la jurisprudencia y la legislación, se abrió paso el criterio dinámico de la concepción racionalista del federalismo. Es que el desarrollo de las interconexiones en vastos sistemas de producción y distribución de energía ignora las barreras artificiales de los Estados

y parece indicar la necesidad de un racional contralor federal.

Esto, señor presidente, es magistral. Lo ha dicho nada menos que François Trevous, en su conocida obra *Le développement et la réailementation de l'industrie électrique aux Etats Unis*, aparecida en 1933, cuando las obras del Tennessee estaban en sus planeamientos iniciales, y cuando nadie asistía al fenómeno contemporáneo de la interdependencia universal, a que hacía referencia el señor senador Cañeque hace unos momentos. Esto revela gran visión del porvenir, y ofrece singular importancia frente a espectáculos que cinco años atrás nos hubieran parecido inauditos o insólitos; tal el de los Estados Unidos de América contemporizando con una Cuba hostil, que es realmente la sardina endina enfrentada con el tiburón.

¿Y por qué, señor presidente? Hay una interdependencia tan grande entre los pueblos que basta que uno de ellos tenga conciencia de su ser nacional y mantenga los vínculos de solidaridad con las otras naciones, para que ya no sea posible que ocurran los episodios que ensombrecieron la historia de las últimas décadas del siglo pasado y las primeras del primer cuarto del presente. Hay una gran solidaridad internacional, y ya la injusticia y el despotismo no tienen cabida en las fronteras de la tierra, en esta época de los cohetes interestaciales y de las grandes realizaciones de la ciencia y de la técnica.

Precisamente, la Foreign Power Commission se creó en los Estados Unidos como manifestación de la política de Roosevelt para ocuparse de los aspectos relacionados con la energía eléctrica, aunque posteriormente su radio de acción fue amplísimo, pues se extendió a otras funciones. La ley de su creación —la Federal Power Act de 1920— fue el antecedente directo de la ley federal de energía eléctrica (Federal Power Act) de 1935.

La expansión del gobierno federal en los Estados Unidos de ningún modo destruye el federalismo, ni ha producido crisis de sus principios, sostienen personalidades como Perry Clark en su *The rise of a New Federalism*. Antes bien, al actuar como «un todo» el gobierno —en los órdenes federal, estatal y local— favorece el progreso y el desarrollo económico. Otro tanto puede afirmarse de países como Brasil y Suiza. El Código de Aguas de Brasil, de 1934 en su artículo 29 establece expresamente que «queda limitado el dominio de los estados y municipios sobre cualquier corriente por la servidumbre que se le confiere a la Unión para el aprovechamiento industrial de las aguas y de la energía hidráulica y para la navegación».

La propia constitución nacional de Brasil, de 1946, establece, entre las atribuciones de la Unión, la de legislar sobre energía eléctrica. En Suiza, país esencialmente democrático, donde



existe el más indiscutido y tradicional culto del federalismo, la Confederación es la que, por disposición constitucional, tiene a su cargo lo concerniente a energía hidráulica, en todos sus aspectos.

Pero vamos a ver, señor presidente, algo de lo que nuestra Corte Suprema de Justicia ha dicho en esta materia, en lo que hace a la jurisdicción de la Nación sobre las islas pertenecientes a los Estados y situadas en el mar territorial o en los ríos y lagos navegables, derivada de la vinculación más o menos directa de esos centros con los grandes intereses de la navegación y el comercio exterior e interno. Ha manifestado la Corte que «es lógico deducir que en todo aquello que de ninguna manera afecta a esos intereses, el poder de la Nación no puede supeditar a su predominio el régimen legal allí establecido por el imperio de las instituciones locales, a menos que se trate de asuntos que, con arreglo a la Constitución, correspondan a la justicia nacional...». Fallos T. CXLVIII, pág. 106, cons. 39 in re Lataillade). A contrario sensu, entonces, en todo aquello que de algún modo pueda afectar el interés general el poder de la Nación, no puede supeditarse a la jurisdicción provincial.

Otro tanto ocurre en todo aquello que pueda gravitar en la defensa nacional. Esta comprende no solamente aspectos represivos, generalmente militares, sino también preventivos, entre los cuales puede considerarse el industrial.

Es evidente, señor presidente, que las últimas guerras, inclusive las que yo espero que nunca alcancen a desatarse en el ámbito del universo, van a tener en la retaguardia, en el desarrollo económico de los pueblos, en el alto grado de industrialización y de tecnificación de su actividad económica, el mayor poderío que les permita a los países —yo quiero esperarlo, señor presidente— controlarse recíprocamente para evitar un desenlace por la fuerza. Las industrias y el desarrollo de todos los recursos económicos que requieran fundamentalmente la energía eléctrica son el presupuesto más efectivo dentro de la computación del poderío bélico de las naciones. Aún ahora, en esta época de la era atómica, en que los conflictos bélicos han de transcurrir en otros términos en lo que hace a los elementos a emplearse, es indispensable, para que las armas nucleares puedan producirse en la medida requerida para lograr la hegemonía o para imponer el equilibrio por vías del control recíproco, es necesario, repito, un alto grado de industrialización.

En la energía atómica se requiere un consumo de energía eléctrica que está por encima de todos los consumos registrados en cualquier otra actividad conocida. Es por eso que en el Tennessee Valley el gobierno de los Estados Unidos ha instalado grandes plantas de energía atómica. ¿Por qué? Porque tiene la energía eléctrica muy bara-

ta a raíz de los grandes diques allí construidos para aprovechar las corrientes de las aguas de los ríos interestatales.

Dijo bien mi colega por Mendoza cuando habló de lo que yo llamo trascendencia de esta federalización de la energía. Al través de la regulación de los ríos interprovinciales y de las grandes cuencas hidrográficas se logrará el aprovechamiento integral. Si nos circunscribimos a la producción de energía eléctrica, resultaría sumamente costosa y antieconómica, al par que retardaría u obstruiría nuestro progreso. En cambio, aprovechando el agua para consumo de las poblaciones, para las industrias, para la irrigación de los campos —dado que tenemos enormes superficies áridas por falta de agua—, para la navegación, para el desarrollo y el fomento del turismo y cuantos otros fines son conocidos dentro de la técnica moderna de lo que se ha dado en llamar aprovechamiento integral de las cuencas hidrográficas, nosotros, merced a este arbitrio de la federalización de esos recursos económicos, lograremos la meta que perseguimos en forma económica. Esto servirá en primer término, a las propias provincias marcadas por esos cursos de agua, que serán las directas e inmediatas beneficiarias de esta obra de progreso general.

Intimamente vinculado al desarrollo industrial se halla lo relativo a la energía eléctrica, tan relacionada al interés colectivo del campo como al de la ciudad, a la radicación de capitales, al arraigo del hombre al lugar (condiciones de vida confortable), al desarrollo del comercio y la navegación, al mejoramiento de las condiciones sociales, etcétera. Resulta evidente que el interés general de la Nación debe anteponerse —por su carácter fundamental— a los intereses locales o regionales. Sólo así se propenderá a una auténtica unidad nacional, real progreso económico y efectivo bienestar social, tal como lo desearon nuestros constituyentes y lo garantizaron a través del Preámbulo y del artículo 67, incisos 12, 16, 27 y 28, y de los artículos 25, 27, 31, 33 y concordantes de la Constitución Nacional.

Un antecedente inmediato que conviene traer a colación es el ordenamiento que hicimos del petróleo. Recuerdo, señor presidente, la gran batallola verbal que se desató en el país; cómo se habló, a través del federalismo histórico, del despojo a las provincias, del avasallamiento de las autonomías, del centralismo y de tantas otras cosas que siempre son agitadas cada vez que se quiere impulsar a la Nación hacia la realización de sus grandes destinos. No me voy a detener en este aspecto, porque mi distinguido colega el señor senador por Tucumán tiene a mano cifras interesantes para controvertir con la realidad irrefutable de los números, de las estadísticas, todas esas antojadizas afirmaciones que son verditas por la ofuscación y el apasionamiento de quienes las formulan. Dice, por últi-

mo, Bengolea Zapata que conviene recordar que quien tiene a su cargo la tarea de estructurar la norma jurídica debe cuidar especialmente que las vías de realización elegidas no malogren, por inadecuadas, el logro del objetivo deseado. Esto, que parece tan elemental, no lo entienden nuestros detractores. Tenemos nosotros que cumplir los grandes fines de la Constitución, y, como lo dice Bielsa —y también González Calderón, a quien citaré más adelante—, no habiendo nada que prohíba en la Constitución la realización de este tipo de actividades legislativas, nosotros podemos acudir a ellas siempre que sean idóneas para promover el progreso general.

De este modo, el legislador no solamente afianzará la economía sobre bases sólidas, sino también se proyectará en obras con visión de futuro ajustadas a la realidad nacional.

Me voy a referir muy brevemente a algunas objeciones que se han hecho sobre la constitucionalidad de esta jurisdicción federal. Por ejemplo, se ha dicho que el proyecto es inconstitucional porque exime de todo gravamen, incluso tasas y contribuciones de mejoras, con lo cual se le hace una grave imputación, que está desvirtuada terminantemente, porque el artículo 12 del proyecto excluye de las exenciones impositivas a las tasas retributivas por servicios y a las mejoras de orden local. Quiere decir que las provincias que presten cualquier servicio o que hagan alguna mejora, por la que cobren luego una tasa o una contribución, están perfectamente autorizadas a hacerlo, y la ley no ha cambiado en nada el ejercicio de esta potestad de los Estados.

Con respecto al inciso 16 del artículo 67 de la Constitución Nacional, se incurre también en otro grave error, y yo no creo que sea por inadvertencia. Creo que un poco se ha aprovechado la circunstancia de que este debate no se haya mantenido en términos de concreción jurídica. Este es un problema jurídico-constitucional-económico. Sin embargo, se lo ha debatido en el terreno de una polémica de tipo personal, donde en lugar de aportar razones y argumentaciones se ha ido al denuesto, al agravio, a los calificativos denigrantes.

He leído una gran cantidad de publicaciones periodísticas conteniendo lo que se ha dicho en los últimos tiempos en contra de la ley de energía. He buceado, con el ánimo de encontrarlas, para poder refutarlas, si ello me era posible, porque no tengo petulancia en hacer esta afirmación; he buscado las razones jurídico-constitucionales-económicas, y no las he encontrado. Montañas de adjetivos, adjetivos calificativos impropios de hombres de tan grande responsabilidad intelectual y de la envergadura con que están ellos considerados en el medio social en que viven. En manera tal que no ha sido posible realizar esa tarea que nos-

otros gustosamente hubiéramos hecho, intentando la controversia en el campo en que ella debió haberse situado.

Se dice que las concesiones violan el inciso 16 porque admiten que dichos contratos administrativos sean establecidos por tiempo fijo o indeterminado, y que el inciso 16 habla de concesiones temporales. Pero se confunde una cosa con otra. El inciso 16 del artículo 67 de la Constitución Nacional, cuando habla de que el Congreso promoverá la instalación de nuevas industrias y de capitales extranjeros, se refiere a concesiones temporales de privilegios y de recompensas de estímulo, pero la temporalidad nunca está referida al término de duración del contrato. Nuestro proyecto de ley, con toda claridad, en el artículo 17 faculta al Poder Ejecutivo a establecer exenciones temporarias, lo que quiere decir que la desgravación o la inmunidad fiscal, como se la llama, en favor de estas inversiones o de estos inversores que vengan a promover nuestro desarrollo eléctrico, está circunscrita exactamente en los límites del inciso 16 del artículo 67; es decir, es temporal.

En nuestro derecho positivo, señor presidente, como lo he dicho con motivo del debate a que varias veces me he referido en esta exposición, tenemos el artículo 67 de la Constitución Nacional, en sus incisos 4, 9, 12 y 16, y en el Código Civil (artículos 2642, 2645 y 2646) interesantes antecedentes. Ya me referí a ellos, señor presidente, cuando dije que era sumamente interesante cómo el Congreso Federal, que tiene la potestad de dictar el Código Civil sin que ese código altere las jurisdicciones locales, se consideró con poder en materia de legislación para prohibir a los ribereños sin concesión especial de la autoridad competente mudar el curso natural de las aguas, cavar el lecho de ellas o sacarlas de cualquier modo y en cualquier volumen para sus terrenos. Ese es el artículo 2642. El artículo 2645 es más riguroso todavía en el avance del ejercicio de esta potestad. Ni con licencia del Estado, provincia o municipalidad podrá ningún ribereño, sin consentimiento de los otros propietarios ribereños, represar las aguas de los ríos o arroyos, de manera que las alcen fuera de los límites de su propiedad, haciendo más profundo el río o arroyo en la parte superior, o que inunden las inferiores; ni detener las aguas de manera que los vecinos queden privados de ellas. Y el artículo 2646 concluye: ni con la licencia del Estado, provincia o municipalidad podrá ningún ribereño extender sus diques de represa más allá del medio del río o arroyo. Lo que se ha dado en llamar un verdadero avance sobre la legislación local en materia de jurisdicción federal. Nunca, señor presidente, ningún tribunal de la República ha declarado la inconstitucionalidad de esta disposición del Código Civil, que es tan vieja como el mismo código. Es más: el anteproyecto de Bibiloni, de

todos conocido, y el formulado por la comisión redactora de las reformas al Código Civil, que tomó en cuenta el trabajo de Bibiloni y que estructuró un trabajo magistral no hace muchos años, cuya reedición ha dispuesto el Honorable Senado de la Nación para actualizar ese valiosísimo aporte para la reforma de nuestra legislación, siguen exactamente las mismas líneas que inspiraron a Vélez Sársfield cuando preparó nuestro Código Civil.

Otra objeción que se hace a la ley de energía, y que ha motivado quizá la alarma mayor que ha cundido en algunos espíritus, es que se ha exagerado la nota al extremo de querer decir que nos encontramos frente de una delegación que caería bajo la fulminación del artículo 29 de la Constitución Nacional. Este, como es sabido, configura como infame traición a la patria el otorgamiento de la suma del poder público y la delegación de facultades extraordinarias por las que la vida, la fortuna y el honor de las personas queden a merced de gobierno o persona alguna.

Yo, señor presidente, no quiero cansar a mis colegas con la enunciación de los caracteres jurídicos de lo que es una concesión. Me basta referirme a un antecedente que honra a nuestro acervo jurídico y científico. Es el de la Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, celebrada en la ciudad de Tucumán en el mes de julio de 1936. Esa Cuarta Conferencia Nacional de Abogados estudió el tema del régimen de las concesiones de servicios públicos. Después de definir las concesiones y de establecer cuál es el régimen de las mismas, hizo toda la especificación de la competencia, poder de policía, continuidad, ejecución directa, tarifas, efectos jurídicos, extinción y jurisdicción, y aprobó por unanimidad el despacho que voy a analizar muy brevemente, porque veo que la hora avanza y mis palabras están llevando más tiempo del que razonablemente puedo tomarme.

Empezó definiendo la concesión como «un acto jurídico del derecho público, por el cual el concedente delega en el concesionario un poder jurídico sobre una manifestación de la actividad administrativa, con el fin de que realice, por propia cuenta y riesgo, bajo el contralor del concedente, el servicio público concedido».

En consecuencia, se trata de un acto jurídico de derecho público en virtud del cual el concedente delega el ejercicio de una atribución en el concesionario a efectos de que éste realice, por cuenta y riesgo propios, una actividad que, en principio, corresponde al Estado cumplir. De manera que lo que el Estado delega es el ejercicio de una atribución y no la función misma. El Estado conserva la titularidad del poder.

Eso es lo que hay que decir en todos los tonos, señor presidente. El régimen de concesión de la ley de energía eléctrica, perfectamente preestablecido a través de su texto, está totalmente acorde con lo que preconizó la Cuarta Confe-

rencia Nacional de Abogados en Tucumán en todos sus aspectos, y no sólo en cuanto a la naturaleza jurídica, que es fundamental. El Estado —repito— delega el ejercicio de una atribución para cumplir una función, pero nunca la función, que el Estado conserva. Tanto la conserva, que en el despacho de la comisión se deja perfectamente establecida esta situación. He de pedir, señor presidente, la inserción del despacho en el Diario de Sesiones para que su contenido sea difundido en todo el ámbito de la República, porque se han agotado los anales de la Cuarta Conferencia Nacional de Abogados y se los utiliza fragmentariamente, ocultando aspectos tales como el de la militarización del servicio público —que propugnaron aquí hombres como Bielsa, Villegas Basabilvaso y Mauricio Yadarola, quienes estuvieron presentes y firmaron por unanimidad este despacho— en el momento en que el interés nacional así lo haga pertinente. Y ahora, cuando nos encontramos en la dolorosa necesidad de la movilización de algunos servicios públicos, los opositores se solazan haciendo tremendas acusaciones y atribuyéndonos el ejercicio de actos despóticos negadores de la esencia de las instituciones democráticas.

Aquí está, señor presidente, en este texto cuya inserción solicito para no cansar a mis colegas con una lectura que sería fatigosa, perfectamente aclarada esa situación.

El despacho, en ese mismo orden de ideas, dice que «la delegación no implica, para el poder concedente, renuncia de sus facultades; sólo atribuye el concesionario las indispensables para la realización del servicio en la forma y modos establecidos o que establezca el poder concedente» (artículo 29). «El poder concedente se reserva sus poderes de intervención, contralor y dirección» (artículo 39). «El Poder concedente mantiene el poder de prestar el servicio» (artículo 59). Vemos cómo se opera, muy a menudo, la ejecución directa en que el poder concedente —o sea el Estado— reasume circunstancialmente la prestación de la actividad que forma el contenido de ese servicio público por inoperancia del concesionario o por imposibilidad jurídica o económica de éste, o por cualquier otro evento que cree una situación de emergencia y que quebrante o malogre la posibilidad de que el concesionario actúe. Y eso está perfectamente previsto en el régimen jurídico de esta concesión que consagra la ley de energía eléctrica: «Es nula la delegación directa o indirecta que el concedente haga de sus facultades como tal, especialmente las de contralor del servicio, la de no declarar la caducidad en casos de incumplimiento de la obligación de prestar el servicio, la de percibir tasas no autorizadas, la de someter a arbitrajes, la determinación de la clase u objeto del servicio público, la de no rever las tarifas y la de preferencia en los nuevos períodos de explotación», es decir,

una serie de medidas generales que protegen efectivamente el interés del usuario y defienden el interés de la Nación.

Toda concesión, señor presidente, tiene dos tipos de relaciones: las de derecho público y las de derecho privado. Son de derecho público, y obsérvese cómo todo esto lo encontramos en el proyecto de ley que estamos debatiendo y que ha dado motivo a tan tremendas críticas por parte de tratadistas y por parte de sectores políticos: a) El derecho que se confiere al concesionario para expropiar en la forma que determinen las leyes generales y especiales; b) Los privilegios que se reconocen al concesionario por créditos originados en la prestación del servicio; c) El derecho de servidumbre y de imponer restricciones al dominio en el interés público; d) La protección y amparo del poder concedente, para el regular y continuo funcionamiento del servicio. Son de derecho privado las relaciones que se originan en la gestión patrimonial o económica puramente privada.

No caben, pues, mayores garantías jurídicas para la eficaz realización de un servicio público: la satisfacción del interés colectivo y del bienestar general.

Se debe establecer, señor presidente, una clara distinción entre el acto en virtud del cual se autoriza la concesión y el contrato de concesión. Como muy bien lo señala Bielsa, «la autorización legislativa es necesaria cuando el atribuir la concesión compete al poder legislador». En principio, la facultad de atribuir la concesión de un servicio, esto es, la de disponer, pertenece «al poder representativo: Congreso, legislaturas provinciales y, por delegación, los consejos deliberantes o comisiones locales dentro de sus jurisdicciones». (Bielsa, Departamento Administrativo, 5ª edición, tomo 2, página 218.)

«Toda concesión de servicios públicos, máxime si asume la forma de monopolio o comporta exenciones o privilegios, es precedida de una autorización previa, que es requisito esencial para que la concesión se perfeccione.» Esto es lo que está haciendo el Congreso en estos instantes. Esta ley es una autorización previa para el otorgamiento de una concesión en la que todos estos requisitos sustantivos e irrenunciabiles, porque tutelan el interés nacional, están específicamente establecidos.

»Con todo —agrega Bielsa, a quien sigo en esta exposición—, no se ha de confundir el acto por el que se autoriza la concesión (y también se delega el ejercicio de una atribución) con el contrato de concesión, para lo cual es necesario que concurre la voluntad de las dos partes y que esa voluntad se exprese en la forma prescrita por la ley. (Pág. 227.)

»La autorización legislativa se justifica y se regula, pues, por virtud del principio según el cual la potestad de otorgar concesiones, exenciones y privilegios es una atribución propia de

las legislaturas o del Congreso, y tanto las legislaturas como el Congreso sólo en parte pueden delegar esa atribución.» De acuerdo con ese principio —prosigue Bielsa, p. 228— en virtud de autorizaciones legales expresas, en los límites y formas considerados, también el poder administrador puede otorgar concesiones.

Obsérvese, señor presidente, cómo el distinguido tratadista, profesor universitario y eminente pensador, el padre del derecho administrativo argentino, dice en su último tratado de la materia, ampliamente conocido en todo el ámbito de la República, que también el Poder Ejecutivo en los límites y en las formas consagrados, con autorizaciones expresas, puede otorgar concesiones, y generalmente, dar autorizaciones sobre ampliación o modificación de servicios públicos. Y luego agrega que «el principio de la autorización legislativa para dar concesiones en monopolio y para eximir de impuestos, se justifica por motivos diversos».

Pero es que no solamente Bielsa lo ha dicho, como si esto fuera por sí poco. La misma Cuarta Conferencia Nacional de Abogados realizada en Tucumán lo estableció expresamente en los capítulos 3º y 4º, diciendo en el párrafo primero: el concedente es siempre el Estado, administración pública en sentido lato, nacional, provincial, comunal, excepcionalmente una entidad autárquica institucional. Obsérvese cómo hasta se admite que una concesión de servicio público puede ser otorgada por una entidad autárquica institucional y cómo aquí, en el país, se ha querido crear una atmósfera desfavorable poniendo en duda la integridad moral del Parlamento alrededor de esta autorización al Poder Ejecutivo para que otorgue concesiones para la producción y distribución de la energía eléctrica.

Las propias entidades autárquicas e institucionales, como las universidades u Obras Sanitarias de la Nación, pueden otorgar concesiones conforme a la IV Conferencia Nacional de Abogados y al pensamiento del doctor Bielsa, por supuesto que precedidas de una debida autorización legal, a cuyos términos nos hemos referido en forma genérica, que está configurada en esta ley que taxativamente dice en qué forma el Poder Ejecutivo va a otorgar la concesión. No se deja ningún ámbito que implique que el Poder Ejecutivo se sustituye al Congreso para convertirse en legislador, desplazando a éste en su función constitucional irrenunciable e indelegable que le compete.

Quedan, en consecuencia, dos aspectos a considerar: la interpretación del inciso 16 del artículo 67 de la Constitución Nacional y la delegación de facultades legislativas en nuestro derecho positivo. No deseo extenderme mucho, señor presidente, pero sí quiero decir que este inciso 16 es original de nuestra Carta Fundamental. Propiciado por Alberdi, como lo dice González Calderón, hace una enunciación de medios y de procedimientos que no traen otras

constituciones, a los cuales se adhieren tanto Alberdi como Joaquín V. González. El propio doctor González Calderón, en su conocido *Tratado de Derecho Constitucional* (t. III), nos dice cómo la propia naturaleza de la Constitución exige que sólo designe sus objetivos fundamentales, como por ejemplo «promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad». La aplicación de los medios y procedimientos para la consecución de los fines tenidos en mira, queda librada a la valoración del Congreso, que es quien debe juzgar con apreciación de las circunstancias y de las conveniencias nacionales, dentro de las reglas establecidas por la misma Constitución, la manera más eficiente de realizar los enunciados de la Carta Fundamental. (González Calderón, III p. 42/43; 182/183.)

«Admitimos, como todos debén admitirlo —dice más adelante González Calderón—, que los poderes del gobierno son limitados y que estos límites no pueden ser ultrapasados. Pero pensamos que una sana construcción de la Constitución debe reconocer a la legislatura nacional aquella discreción respecto de los medios por los cuales los poderes que le son delegados han de ser puestos en ejercicio, que le habilite para desempeñar sus grandes deberes, del modo que sea más provechoso al pueblo.»

Por eso, coincidente con la unidad de su pensamiento este jurista se pronuncia, en la página 186 del tomo III, en contra de una «defensa a ultranza de las autonomías provinciales», por considerar que si se aceptara esta tesis, varias provincias no podrían gozar de los beneficios resultantes de una acción conjunta de indudable beneficio general.

Yo, señor presidente, no quiero erigirme en juzgador de uno de nuestros maestros del derecho constitucional. Simplemente quiero poner en evidencia ante la opinión pública de mi país la tremenda contradicción que surge entre estas concepciones doctrinarias que el doctor González Calderón desarrolla en su *Tratado de derecho constitucional* y la tan mentada carta que ha dirigido al ingeniero Justiniano Allende Posse y que ha tenido profusa difusión, en donde habla del federalismo histórico, del avasallamiento de las autonomías y del despojo de los Estados federales. Yo no quiero decir nada más que esto, señor presidente. Poner en evidencia y que se vea cómo, en esta hora de grandes transformaciones económico-sociales, muchos hombres que estuvieron al servicio de la elaboración del pensamiento jurídico nacional se han dejado ganar por la ofuscación y por la pasión política irracional, o sea por las pasiones de la calle, que convengo que pueden agitar y conmover a las multitudes para hacerles perder el freno y el equilibrio en sus razones, pero que jamás deberían conmover y perder a un catedrático del derecho constitucional argentino. (¡Muy bien! Aplausos.)

No quiero dejar de citar a Joaquín V. González, eminente constitucionalista, provinciano

insigne, que honró al Parlamento argentino, a la cátedra y al pensamiento nacional. También Joaquín V. González, refiriéndose a este tema decía: «muy lejos de creer yo un peligro para las autonomías provinciales que el Congreso invierta y derrame los beneficios de su magnificencia dentro de su territorio (se refiere a las provincias); creo, al contrario, que es el principio de la prosperidad que nuestros constituyentes establecieron en todas sus disposiciones. Ese es el objeto expreso y general de la Constitución...» (Obra completa V página 80).

Antes de pasar a la parte final de mi exposición quiero referirme, señor presidente, al despacho de la Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, informado nada menos que por Benjamín Villegas Basavilbaso, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, despacho que también lleva la firma de Rafael Bielsa, Rodolfo Corominas Segura, Víctor Daniel Gaitía y Julio Oscar Ojea. Cuando empezó su brillante exposición, el doctor Villegas Basavilbaso dijo que ese dictamen resumía lo mejor del pensamiento francés en la materia, y las grandes decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

No me resisto a citar algunos nombres que estuvieron allí presentes, no con ánimo discriminatorio, señor presidente, y si omito alguno es porque es muy extensa la nómina; tampoco lo hago porque deje de advertirlos. Voy a nombrar a aquellas personalidades del mundo de la política y del pensamiento que más relieve han tenido en los últimos tiempos en la dilucidación pública de estos problemas. Allí estuvieron Hugo Alsina, Mario Antelo, Armando G. Antille, Rafael Bielsa, Eduardo Busso, Bernardo Canal Feijoo, Guillermo Cano (h), Juan B. Depetris, Juan Carlos Díaz Cisneros, Bartolomé A. Fiorini, Enrique V. Galli, Guillermo Barbarini Islas, Eduardo Augusto García, José Landman, Faustino A. Legón, Roberto Lobos, Mario Moset Iturraspe, Juan Agustín Moyano, Julio Oscar Ojea, Alfredo Orgaz, Luis A. Premoli, Eodoro Ruiz Moreno, Honorio J. Silgueira, Alberto G. Spota, Carlos Suárez Anzorena, Mariano R. Tissembaum, Mauricio Yadarola, Walter Villegas y Benjamín Villegas Basavilbaso.

Repto que este despacho mereció la unanimidad de los presentes en esa sesión de la Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, y que resulta trágico que en este momento en que nosotros necesitamos poner al servicio de la causa del progreso del país los instrumentos adecuados para hacer posible esa vieja aspiración nacional, muchos de estos hombres que contribuyeron a enriquecer nuestro pensamiento jurídico estén en la negación, en la obstrucción obcecada y no al servicio de la causa que hace al interés nacional.

Señor presidente: en el aspecto de las delegaciones legislativas, que trajo tanta conmoción

pública, voy a seguir a Tosato y Franchini, dos novísimos tratadistas italianos que inspiraron también a la señorita Beatriz F. Dalurzo, secretaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la elaboración de su ponencia sobre «Delegación de facultades legislativas» presentada al II Congreso de Ciencias Políticas realizado en Buenos Aires hace muy poco, cuyas líneas generales comparto totalmente, porque hemos analizado este problema que hubiéramos querido verlo concretar en el Congreso de Ciencias Políticas, y en que, lamentablemente, prevaleció en este tema una interpretación más política que jurídica.

Muy respetuoso del pensamiento ajeno, mucho me temo, sin embargo, que la pasión política pueda haber llegado también al ámbito de los congresos científicos, en desmedro de la reflexión y el sano criterio jurídico.

Tosato, señor presidente, en *Le leggi di delegazione* (pág. 90), dice que «la delegación legislativa consiste en conferir una potestad propia del Poder Legislativo —delegante—, el cual conserva su titularidad transfiriendo al otro sólo su ejercicio». Vemos cómo coincide con lo que sostuvimos hace unos instantes en esta materia.

Dice Dalurzo en el citado trabajo algo que quiero dejar debidamente sentado. «De ahí que si en determinada circunstancia el propio órgano legislador considera que otro órgano puede en esa oportunidad o en ese caso, actuar con mayor idoneidad que él mismo a los efectos de una más eficaz realización de los fines del Estado, es perfectamente lógico y jurídico que le encomiende el cumplimiento de la actividad pertinente, transfiriéndole al efecto el ejercicio de una función propia, e invistiéndole para ello del correspondiente poder. Este poder jurídico específico determinado es conferido a un sujeto u órgano para ser ejercitado no en base a un interés particular (propio o ajeno), sino atendiendo a un interés objetivo. Se opera, entonces, una delegación de facultades legislativas.»

El fundamento de la delegación de atribuciones legislativas es, pues, asegurar la mayor eficacia de la función. Por eso no es necesario llegar a un verdadero estado de necesidad para que ella tenga lugar, sino que es suficiente que razones de conveniencia u oportunidad lo aconsejen. Es menester diferenciar la delegación de la sustitución o suplencia, «en que en ésta hay un órgano obligado a actuar en la esfera de otro, por ausencia del titular o por imposibilidad del mismo para cumplir su función. En la delegación basta una razón de eficacia u oportunidad. El sustituto ocupa el lugar del sustituido, en tanto que delegado y delegante coexisten». (Franchini citado por Dalurzo, obra citada.)

Esto es de una importancia decisiva, y ya lo recalqué hoy cuando analicé el pensamiento del doctor Rafael Bielsa y el criterio jurídico del despacho de la IV Conferencia Nacional

de Abogados. Es decir, que jamás hay traspaso de la función; es el traspaso del ejercicio de una actividad para cumplir la función, pero el delegante, el poder concedente, mantiene la potestad.

De ahí la potestad que conserva el Estado a los efectos de la revocación, la caducidad, la ejecución directa, el control de las tarifas, la reglamentación del servicio, el dictado de normas tendientes a modificar el servicio cuando el interés público lo exige. Esto es lo que se llama la parte legal, reglamentaria del contrato de concesión de servicios públicos, que en nada afecta al aspecto patrimonial o privado, ya que si el poder público al modificar unilateralmente el contrato dañara al concesionario tendrá que indemnizarlo. Lo legal comprende el aspecto del servicio público que el concesionario debe prestar tal como si la propia administración lo hubiera prestado por sí misma.

La titularidad del poder —continúa Tosato— queda en el delegante; sólo transfiere al delegado el ejercicio de la propia competencia. La titularidad en el derecho público constituye un medio idóneo para cumplir un fin, es decir, que exista para la realización de una función. La titularidad de la función no admite la disposición de ella, al menos en forma amplia, porque constituye un verdadero deber-poder no transmisible en sí como poder; lo único transmisible es su ejercicio. Es decir, la actividad material tendiente al cumplimiento de una función, a llenar una función. Este poder como tal subsiste en el delegante; en el delegado hay un nuevo poder, pero no un traspaso del poder originario; hay creación y no transferencia de poder.

El doctor González Calderón coincide en su tratado ya mencionado con esta interpretación cuando dice que «son conceptos amplios —refiriéndose al inciso 16 del artículo 67— cuya aplicación práctica es establecida por el solo criterio del Poder Legislativo nacional, conforme lo requieran las circunstancias». El problema de la delegación de atribuciones legislativas, puede decirse que es una consecuencia del progreso técnico y de la necesaria agilitación de la tarea gubernativa.

Lamento, señor presidente, no poder incursionar en el campo de la legislación comparada, para decir como Chile en su Constitución tiene hace muchos años ya establecido este principio de la delegación de facultades legislativas, por supuesto debidamente reglado y enmarcado en normas que garanticen el sagrado principio de la división de poderes, que es lo que se quiere salvaguardar para mantener incólumes las libertades públicas, los derechos humanos y el sistema democrático de gobierno. Ello explica «que aún dentro del sistema dominante de representación política o parlamentaria, el mismo Poder Legislativo, consciente de la conveniencia de que ciertas normas (que originariamente

constituyen legislación en sentido formal) sean formuladas o dictadas por otros poderes o por órganos de otros poderes, recurra a veces a la práctica de la delegación de atribuciones, a fin de que ese poder u órgano realice la función legislativa más eficazmente o satisfaga de una manera más propia (y aún se diría más auténtica) la función normativa». Estas, señor presidente, son palabras textuales del doctor Rafael Bielsa en su libro *El orden político y las garantías jurisdiccionales*, página 44. El doctor Bielsa, después de dejar sentado esto, agrega: «El Congreso Nacional ha hecho más de una delegación en el Poder Ejecutivo y hasta en entes autárquicos», como voy a comprobar en un ligero repaso que voy a hacer luego para refrescar nociones que parecen haber sido olvidadas por los mismos que contribuyeron a formarlas en la mente de los estudiantes de derecho constitucional. Y agrega: «La Corte Suprema ha declarado que esa delegación no es inconstitucional cuando se limita a conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo» y recuerda la ley 1.597, o sea la ley Avellaneda, que delegó en las universidades la sanción de los planes de estudio y de instrucción, que por la Constitución Nacional corresponde originariamente al Congreso.

También recuerda la ley 12.591, de fijación de precios máximos, sancionada en el mes de septiembre de 1939, y que nunca fue declarada inconstitucional, cuyo artículo 2º faculta al Poder Ejecutivo para determinar los productos que deberán quedar comprendidos en la ley, sin perjuicio de ampliar su enumeración a los que afecten la vida y el trabajo nacional; y cuyo artículo 3º lo autoriza a fijar los precios máximos.

Cita luego la ley 12.665, de creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. El artículo 3º dice: «El Poder Ejecutivo, a propuesta de la comisión nacional, declarará de utilidad pública —óigase bien: la tan delicada materia de la expropiación, que requiere cada vez la calificación de utilidad pública por el Congreso Nacional, conforme a la garantía de la propiedad, y que consagra nuestra Carta Magna— los lugares, monumentos, inmuebles y documentos de propiedad de particulares que se consideren de interés histórico o histórico-artístico a los efectos de la expropiación.» Esta ley es del mes de septiembre de 1940.

Y la propia ley de expropiación, 13.264, sancionada en el año 1948, y que aún sigue en vigencia, en el artículo 2º cuando se refiere a la calificación hecha en carácter general de la utilidad pública de los bienes a expropiar, autoriza al Poder Ejecutivo a individualizar los bienes que van a ser comprendidos en esa expropiación; y el 3º dice que los concesionarios de obras de los servicios para cuya realización

se hubiera sancionado la expropiación sustituyen al expropiante.

Quiero citar una nota del doctor Bielsa, en este tema que estamos examinando, referida a lo que pasa en Inglaterra. «En muchos casos —dice la nota— el Parlamento ha legislado en el sentido de conferir a funcionarios o cuerpos públicos la atribución de redactar leyes accesorias, reglas o normas para fines determinados y dentro de límites prescritos, produciendo el ejercicio de este poder normas legales con equivalente vigor a las normas parlamentarias. Así, una comisión de jueces y abogados tiene el poder de redactar normas para ser aplicadas en el procedimiento del Tribunal Supremo. El ejercicio de este poder implica legislación genuina —esto lo subraya el doctor Bielsa: legislación genuina—. Sin vinculación a precedente alguno, dictan simplemente las normas que consideran adecuadas. Entre otros cuerpos con poderes similares, podemos citar la Comisión de Agricultura, las corporaciones municipales y hasta compañías ferroviarias.» (*El orden político...*, citado, nota 20, página 45.)

En su obra *Derecho constitucional* —edición de 1959, páginas 478 a 481—, el doctor Bielsa, siempre refiriéndose al tema de las delegaciones legislativas —este asunto tabú, que ha dado lugar a tan grande alharaca alrededor de la ley de energía—, nos trae la ejemplificación de algunos antecedentes de este tipo de delegaciones.

La ley 9.688 de accidentes de trabajo, del 11 de octubre de 1915, delegó en el Poder Ejecutivo la determinación de las lesiones que deban conceptuarse como incapacidades absolutas y como incapacidades parciales, y la determinación taxativa de las enfermedades profesionales. «El Congreso debió hacerlo —agrega Bielsa—, pues eso es materia de derecho común, y sin embargo, delegó esa determinación.» Las leyes 12.665, de monumentos y lugares históricos; 12.591, 1.597 o ley Avellaneda, que ya mencionamos, y el artículo 18 de la ley 48, delegaron en la Corte Suprema la atribución de establecer reglamentos para la ordenada tramitación de los pleitos, es decir normas procesales, con tal de que no fueran repugnantes a las prescripciones de la ley de procedimientos.

Agrega Bielsa: «Todas estas delegaciones son válidas, pues no repugnan a la Constitución ni al principio de separación de los poderes, porque no afectan la libertad personal, no establecen ilimitadamente penas, no atribuyen poder impositivo, ni restringen la propiedad privada ni garantía alguna, es decir, no hay delegación ni remisión de poderes, sino de facultades para determinar, dentro de límites fijados por la ley, casos, materias, sanciones represivas, normas de funcionamiento administrativo.



«Por el contrario —agrega luego—, algunas leyes votadas en 1946 son inconstitucionales, porque delegan atribuciones de fijar tasas de tal naturaleza que deben reputarse como impuestos, ya que se trata de retribución de servicios necesarios, como las tasas postales; tal es la ley 13.476. Es también anticonstitucional —prosigue— toda ley que atribuya al Poder Ejecutivo funciones judiciales en materia de derecho civil; por ejemplo, la ley de arrendamientos y aparcerías rurales, “aunque haya recurso judicial contra las decisiones del Poder Ejecutivo”.

«La doctrina que estimamos acertada —concluye—, en la órbita jurisprudencial, es la de un fallo registrado en el tomo 148, página 435, de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde dice que “existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla”.

Y luego agrega el doctor Bielsa —que no quiero omitir, dada la indiscutida autoridad de este tratadista y su insospechada posición espiritual con respecto a este gobierno nacional— lo siguiente: «El Poder Legislativo puede delegar facultades de su competencia en el Poder Ejecutivo, y también en entidades autárquicas siempre —hace la salvedad— que no se afecte la unidad administrativa y orden jerárquico en materia de administración», que establece el artículo 86, inciso 1º, de la Constitución Nacional, y «siempre que no importe remisión del poder impositivo, ni represivo penal, ni de imposición fiscal, ni de cargas personales, ni actos que restrinjan el derecho de propiedad, la libertad personal de locomoción, industria, trabajo, enseñar y aprender, ni la inviolabilidad del domicilio.

«En toda delegación debe limitarse la extensión de la misma, expresa o virtualmente.»

Y concluye: «En la delegación, el que delega da al delegado un encargo para hacer algo, y, en consecuencia, mantiene esa atribución de revocar la delegación en cualquier momento» (páginas 480/81).

Repito una vez más, señor presidente, cómo es posible que se hable de la suma del poder público, como se ha hecho, impresionando las mentes sencillas de la población común. Lo que esta ley de energía eléctrica estatuye, está perfectamente encuadrado en el pensamiento de nuestros más destacados juristas, porque es simplemente un encargo, manteniendo el Estado, que es el concedente, el poder original que lo habilita para revocar, anular, declarar caduca, substituir jurisdicción y realizar todos los actos de verificación y de modificación de la concesión impuestos por las exigencias del buen servicio.

«La disposición del Poder Ejecutivo dictada en virtud de la delegación, puesto que integra a la ley —agrega Bielsa—, puede ser impugnada de inconstitucional, lo mismo que si emanara del propio legislador, pero por su contenido, no por el hecho de la delegación misma, si la ley tiene los caracteres que indicamos en la primera de estas reglas.»

Aquí, señor presidente, cabe decir otra cosa. Yo admito, por vía de hipótesis, que nosotros podamos incurrir en un error. Pero estoy seguro de que en esta ley no lo hemos cometido. No obstante, suponiendo que nos hubiéramos excedido, en la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, del marco que la Constitución y los sanos principios republicanos indican, ¿a qué tanto estruendo en el ámbito del país como si se hubiera desplomado nuestra estructura constitucional? ¿Y a qué invocar los manes de las fuerzas armadas y apelar a la vía de la fuerza para restablecer la normalidad constitucional, si para eso está el Poder Judicial, señor presidente? Para eso está la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actúa por imperio del inciso 3º del artículo 14 de la ley 48, y en base a la competencia que le da el artículo 100 de la Constitución, cualquier ciudadano argentino, cualquier usuario del servicio eléctrico o cualquier provincia que se considere afectado por esta delegación inconstitucional puede recurrir al más alto tribunal de la República e impetrar la declaración de la inconstitucionalidad, y la Corte, por imperio del artículo 31 de la Constitución, que asegura la supremacía de la Constitución, dirá su palabra definitiva, y si hubiera habido una alteración del equilibrio de los poderes por un exceso en la sanción legislativa sería inmediatamente restablecida esa situación por la Corte Suprema de Justicia.

Entonces, señor presidente, ¿por qué se quiere impedir que legislemos? ¿Por qué se nos quiere privar de la instancia legítima que tenemos para concretar nuestro pensamiento en leyes? ¿Por qué se quiere obstruir al Parlamento apelando a cualquier recurso, en una combinación indecorosa como la que puso en evidencia mi colega hace unos instantes, una combinación estilo «Unidad Democrática» de todas las fuerzas que son la negación de lo nacional y lo popular, si para eso existe la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿O es que acaso también reniegan de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿O es que también reniegan de la integridad del Poder Judicial de la República? ¡Si es así, qué tengan el valor de decirlo, y entonces el pueblo los juzgará! Que se muestren entonces tales como son, y veremos que se trata de los enemigos de la democracia que quieren instaurar un régimen despótico, y el pueblo sabrá quiénes son y lo que piensan. (Aplausos.)

Deseo terminar esta exposición, que ya ha avanzado más de lo que yo había pensado, di-



ciendo que en nuestro país la delegación de atribuciones legislativas es perfectamente constitucional, en tanto no atente contra el espíritu de la Constitución Nacional. Y en este sentido son coincidentes la doctrina y la jurisprudencia más caracterizadas.

Joaquín V. González, tantas veces invocado, dice: «La Constitución no puede oponerse a nada que signifique un verdadero progreso moral o material en el país, y por lo tanto la Constitución es un instrumento de gobierno calculado para hacer la felicidad del pueblo, y si tuviese un sentido estricto, inmutable, no podría hacer la felicidad de ningún pueblo de la tierra, porque no se la concibe sin el progreso.» Y termina diciendo: «Siendo esta una ley progresiva, tendremos que interpretarla siempre en el sentido de favorecer el desarrollo de la civilización, de la cultura intensa, individual, colectiva, tanto para la Nación considerada como una unidad, como para cada uno de los estados que la componen.» (Obr. compl. V, págs. 32/33.)

Antes de hacer una breve referencia a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, quiero decir que en los Estados Unidos se practica en gran escala la delegación de las facultades legislativas desde 1789, sistema que adquirió una marcada amplitud después de la última guerra. En una primera etapa, la delegación de facultades era conferida solamente al presidente de la República; más adelante, también a otros funcionarios; posteriormente, a comisiones administrativas. En el *New Deal*, de Roosevelt, se acrecienta este poder delegado que desde 1933 se ampliándose considerablemente.

También la jurisprudencia norteamericana fue reconociéndolo paulatinamente. Douglas O. Weeks, en su conocido trabajo *Legislative power versus delegated legislative power*, es decir, *El Poder Legislativo versus los poderes legislativos delegados* (*Selected Essays on Constitutional Law*, págs. 228/249), dice que progresivamente se ha ido aceptando por la jurisprudencia esta novísima institución que en los comienzos, por supuesto, provocó una reacción parecida a la que ha causado entre nosotros, cuando Roosevelt con el *New Deal* quiso impulsar el desarrollo económico de los Estados Unidos adelantándose a su tiempo.

Nuestra Corte Suprema de Justicia siempre distingue entre delegación de facultades legislativas y el conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo que a veces confunde la jurisprudencia norteamericana, porque allí el problema es de distinta contextura, porque la Constitución no le confiere explícitamente al presidente de la República, la potestad que la nuestra le da en el inciso segundo del artículo 86 de dictar los reglamentos necesarios para poner en ejecución las leyes, con tal de que no se altere su espíritu con excepciones reglamentarias.

Tanto la jurisprudencia como la doctrina nacional, consideran perfectamente válida la delegación de facultades legislativas en nuestro ordenamiento jurídico. La delegación es constitucionalmente válida, no tratándose de atribuciones rigurosamente legislativas, como las de dictar los códigos de fondo, imponer contribuciones, conceder privilegios, establecer cargas públicas, hacer declaraciones de utilidad pública respecto de las expropiaciones.

Siempre es indispensable, sin embargo, la existencia de una norma expresa. Aquí la tenemos y está debidamente especificada. Yo hubiera querido, señor presidente, que los profetas agoreros de nuestra frustración hubieran concurrido a cumplir con su deber constitucional y a señalar las fallas de esta ley que, repito, es perfectible. Y nosotros quizá hubiéramos podido elaborar, como Parlamento de la República, que involucra en su seno todos los sectores del pensamiento nacional, una ley mejor que, por imperio de factores que son por todos conocidos, vamos a dictar en el día de la fecha, sin perjuicio de que cuando las circunstancias lo permitan y las exigencias nacionales nacionales lo requieran, hagamos tantas modificaciones cuantas sean necesarias, porque estamos trabajando al servicio del país y no de caprichos personales.

«En cuanto a los límites, la delegación de facultades tiene el inmediato o directo, que es la Constitución, y el mediato, que es la ley que delega. Esto es así, porque la ley en cuestión nada puede contener que desvirtúe principios esenciales de la Constitución Nacional. Si la ley es constitucional, la delegación es posible.» (Dalurzo, op. cit.)

Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una cantidad de fallos de los cuales, dado lo avanzado de la hora, voy a citar tan sólo uno, que está en el tomo 148, en el cual, en la parte pertinente, la Corte dice: «No existe propiamente delegación sino cuando una autoridad investida de un poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o persona, descargándola sobre ella» (pág. 434).

Y agrega algo que es notable porque viene de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un fallo tantas veces recordado y no menos invocado para justificar muchas medidas de gobierno. Dicha Corte, «interpretando preceptos mucho más restringidos que los nuestros, pues aquella constitución no atribuye expresamente al Poder Ejecutivo facultades reglamentarias, ha podido decir con todo acierto: Negar al Congreso el derecho de delegar el poder para determinar algún hecho o estado de cosas de las cuales depende la fuerza de sus sanciones, sería para la máquina del gobierno y producir confusión si no parálisis en el campo de las necesidades públicas» (pág. 437).

Obsérvese, señor presidente, cómo aquel alto cuerpo de prestigio internacional indiscutido, abona la procedencia de las delegaciones en la necesidad de no detener la máquina del gobierno, produciendo confusión y parálisis en el campo de las necesidades públicas.

Por último, señor presidente, no me resisto, aún a riesgo de sobreabundar, a decir algunas palabras sobre el tan mentado artículo 29 de nuestra Constitución, que se ha exhibido con objeto intimidatorio, tratando de hacer mella en el espíritu de los legisladores para que no cumplan con su deber de contribuir a la sanción de una ley de progreso para el país.

Ese artículo, después de decir que «el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna», agrega: «Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria.»

Es bien sabido que este artículo fue colocado en la Constitución de 1851 como una reacción muy legítima y muy fundada en contra del otorgamiento de la suma del poder público que la legislatura de Buenos Aires había concedido en varias oportunidades a Juan Manuel de Rosas, y como una advertencia para los que se atrevieran a hacerle en el futuro.

Pero esto, señor presidente, a lo que yo me adhiero con todas las fuerzas de mi espíritu, es una cosa muy distinta —por su magnitud jurídico-constitucional y por su dimensión— a la delegación de facultades legislativas que he estudiado como una institución jurídica en esta parte de mi exposición y que está perfectamente constitucionizada dentro de la estructuración que se le ha dado dentro del régimen del proque se le ha dado en el régimen del proyecto que estamos analizando. Lo que fulmina la Constitución es la suma del poder público, el otorgamiento de facultades extraordinarias.

¿Qué significan estos conceptos jurídico-constitucionales? Lisa y llanamente, señor presidente, la abolición del principio de la separación de los poderes. Cuando el Poder Legislativo abdica de sus funciones y las entrega al Ejecutivo para que éste las ejerza *ad libitum*, entonces ocurre lo que Montesquieu advirtió cuando quiso —a través de su famosa obra *L'Esprit des Lois*, luego de haber estudiado el funcionamiento de la democracia de la vieja Inglaterra— establecer un régimen de frenos y contrapesos para impedir el despotismo. En este caso, se produciría lo que Montesquieu quiso evitar cuando expuso su pensamiento sobre el equilibrio recíproco y los controles mutuos entre los distintos órganos del poder, o sea la absorción de un órgano de poder por otro que lo somete y lo anula totalmente en el ejercicio de sus funciones.

No me voy a referir a la doctrina de la separación de los poderes, que requeriría una larga disquisición. Pero fundamentalmente y tal como está concebida en la moderna orientación constitucional, ella implica división de funciones, para que el que haga la ley no sea el mismo que el que la aplique o haga cumplir, porque entonces habría forma tiránica de gobernar, que Montesquieu quiso evitar, para que no caigan los países en las garras del despotismo, creando entonces el sistema de frenos y contrapesos que tan admirablemente estructuró la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si nosotros a través de esta ley le diéramos al Poder Ejecutivo toda la competencia que la Constitución Nacional le concede al Congreso y renunciáramos nosotros mismos al ejercicio de esas funciones, estaríamos comprendidos en el artículo 29 de la Constitución Nacional y mereceríamos el castigo del pueblo de la República. Es decir, si hubiéramos hecho el traspaso del Poder Legislativo a manos del Poder Ejecutivo entonces sí habríamos abdicado de nuestras funciones, habríamos renunciado a su ejercicio, dando lugar a que un solo poder tenga en sus manos dos funciones que la Constitución ha conferido a dos órganos de poder distintos e independientes.

Ese es el sentido del artículo 29. Señor presidente; no me tiembla el pulso ni hay la menor vacilación en mi espíritu para votar esta delegación de facultad legislativa al Poder Ejecutivo para que pueda realizar una obra de interés nacional, para que la Argentina salga del atraso y del estancamiento. No le temo, señor presidente, al enjuiciamiento. Ojalá nos enjuicie el pueblo de la República. Ojalá vayamos al banquillo de los acusados, porque allí veremos quiénes están al servicio del país y quiénes están en la negación, en la obstrucción, en la destrucción de las instituciones republicanas y democráticas. Nosotros estamos al servicio de la emancipación nacional, estamos al servicio del progreso, del hombre argentino, que soñaron Alem, Yrigoyen, Lebensohn, Dellepiane y tantos otros que hemos ido dejando en el camino.

Votemos esta ley, señores senadores, con la frente bien alta y con el ánimo bien templado, que estamos sirviendo a la República. Nada más. ¡Muy bien! Aplausos prolongados.)

**Sr. García.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).** — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

**Sr. García.** — Señor presidente: como representante de un Estado federal del interior, de una provincia del Norte, que tiene deficiencia de electricidad y mucha necesidad de ella, y como ciudadano con responsabilidad política, expreso mi satisfacción al poder emitir esta noche un voto favorable, con absoluto convencimiento, a este proyecto de ley de la energía nacional.

Ya a través de las distintas expresiones de los organismos del partido político al que pertenezco se ha fijado su posición claramente favorable al proyecto. Hemos dicho en un momento determinado, y posteriormente ratificado en asambleas de plena responsabilidad, que esta ley en su espíritu y en su propia redacción no vulnera los principios básicos de la Unión Cívica Radical Intransigente.

Nosotros aspiramos al desarrollo del país en democracia, en libertad, en su forma republicana y en su forma federal. Queremos la división de los poderes y la vigilancia de los órganos jurisdiccionales del Estado entre sí; queremos que la voluntad popular sea el supremo juez de las actitudes y decisiones de sus gobernantes, pero por sobre todas las cosas, señor presidente, y sin apartarnos de esa línea, de esa orientación de conducta, queremos el bienestar del pueblo y la expansión del país; queremos su grandeza para tranquilidad, bienestar y felicidad de sus habitantes.

Nosotros hemos sido blanco de muchas críticas desde el comienzo mismo de nuestra gestión gubernamental, y ya desde mucho antes. Fuimos criticados por nuestro programa precisamente por quienes hoy también lo hacen porque no se cumple literalmente ese mismo programa. Desde el primer día de la gestión del gobierno, el afán de crítica ha cegado a muchas mentes esclarecidas del país. El afán de oposición ha superado al patriotismo que no niega en ellas. Ha habido también, sí, otros motivos; ha habido intereses, sentimientos oscuros de venganza, de persecución; pero sobre todo la influencia de intereses, nacionales y extranacionales, que han inspirado muchas actitudes cuyas consecuencias, en definitiva caen sobre el pueblo argentino, que las está pagando con la prolongación de su sacrificio.

Sostenemos los radicales intransigentes que sin subsanar el déficit de energía el país no podrá seguir seriamente adelante, ni se podrá hablar con responsabilidad de planes de desarrollo, de expansión o de grandeza futura o de previsión para las nuevas generaciones. Necesitamos cubrir ineludiblemente esa deficiencia de nuestra estructura económica, y tenemos a los exegetas nacionalistas que se ciñen escrupulosamente a posiciones doctrinarias más teóricas que adecuadas a la realidad.

Se nos dice que con el esfuerzo nacional deben cumplirse estas altas finalidades. Y nosotros les decimos que esa es también nuestra esperanza, que ése es nuestro anhelo, que ése fue nuestro primigenio impulso a la vida política y a la vida pública, como expresiones orgánicas de un partido. Es cierto que debe haber el esfuerzo nacional por sobre todo para que nuestras obras y nuestro ser nacional sean el fruto de nuestro propio esfuerzo, pero somos responsables y conscientes, y sabemos que el solo esfuerzo nacional es insuficiente, no sólo para

cumplir en término no más o menos breve y razonable con esta aspiración, sino que es definitivamente insuficiente en el plano comparativo del progreso o el estancamiento de las distintas naciones del mundo.

Tiempo que perdemos, señor presidente, no es solamente una dilación en nuestra vida nacional. Es una postergación, porque mientras nos estancamos, otros progresan. Tenemos ejemplos recientes y cercanos de esas consecuencias de un nacionalismo teórico y carente de sentido de realidad.

Repito que mientras nos estancamos, otros progresan, y entonces nuestras condiciones de penuria, esfuerzo y sacrificio, no sólo se alargan en el tiempo, sino que se hacen casi definitivas o permanentes. Hasta ahora no se ha estado ocioso en nuestro gobierno en la procura de cubrir el déficit energético nacional. Se ha trabajado con ahínco sobre la base del ahorro nacional, disponiendo de rentas generales y del sacrificio de la población, con sobrecargas de tarifas o con rentas nacionales, pero se lo ha estado haciendo con un sentido federativo y de desarrollo nacional. Al respecto, y para abreviar, mencionaré palabras del subsecretario de Energía, ingeniero San Martín, contestando a objeciones del ingeniero Allende Posse.

Le dice en una carta fechada en agosto de este año: «Así se aprobaron en el directorio de la Dirección Nacional de la Energía, en el año 1957, las siguientes medidas: 1) Utilización del fondo de reserva de energía eléctrica para préstamos a usinas del interior del país. Este fondo se nutre de excedentes de tarifas de la Capital Federal. Desde entonces a la fecha hemos prestado las siguientes sumas a provincias, 1.150 millones de pesos; a cooperativas, 80 millones de pesos, y a particulares, 650 millones de pesos.

»2) Creación del Fondo de Electrificación Rural. Este fondo se creó con un aporte del Fondo de Restablecimiento Económico. Hasta la fecha hemos prestado a provincias 450 millones de pesos y a cooperativas 1.70.000 pesos.»

Le reseña la obra realizada. «La Capital Federal ha volcado ingentes recursos para los planes y el servicio eléctrico del interior. Compare esas cifras con los magros 500 millones de pesos entregados a Agua y Energía Eléctrica para la usina de Dock Sud. Tendrá usted que aceptarme que ha habido preocupación principalísima por la situación de los servicios eléctricos del interior y que no ha sido por falta de auxilios del poder central que éstos se encuentren en el estado en que se encuentran. Examine usted, por otra parte, los planes de Agua y Energía Eléctrica, y verá que sobre 220 obras de todas clases solamente una corresponde a la Capital Federal.» Estas cifras y estos párrafos, Honorable Senado, son elocuentes: de 220 obras, solamente una corresponde a la Capital Federal. Y han sido 3.120 millones de pesos los que del ahorro y del esfuerzo nacional se

han volcado a subvenir la necesidad energética del país.

Sin embargo, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿En qué ha variado el panorama nacional en este aspecto? Seguimos hoy pudiendo afirmar como ayer que el déficit continúa en los mismos términos e impide la concreción de los anhelos de nuestros hombres del interior y de todo el país de expandirse, para bien de la Nación. Hoy seguimos con el mismo déficit y aun agravado por el crecimiento vegetativo de la población.

Con esto se está demostrando que, a pesar de este ingente esfuerzo, es absolutamente imposible, en términos razonables, poder con el esfuerzo y el sacrificio exclusivamente nacionales superar el déficit de energía eléctrica en el país. En consecuencia, debemos recurrir al capital extranjero. Pero el capital extranjero necesita garantías, seguridad, planificación y condiciones preestablecidas con carácter general para saber que no será objeto de discriminaciones arbitrarias. Ese capital, que es angustiosamente reclamado en todos los países del mundo en etapas de desarrollo, impone sus condiciones, y nosotros debemos aceptar las que sean legítimas y razonables si realmente queremos impulsar al país hacia su futuro.

En septiembre de 1959 el gobierno de la Nación, en un convenio con el fondo especial de las Naciones Unidas y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, contrató los servicios de técnicos responsables y acreditados internacionalmente —norteamericanos e ingleses—, quienes produjeron su informe, en el que a título de síntesis, expresan que la necesidad de desarrollo en el campo energético, solamente en el período de 1960 a 1969, debe aumentar de 1.700 a 3.400 m.w., es decir que hay que doblar nuestra capacidad de energía, lo que costará alrededor de 735 millones de dólares estadounidenses, o sea aproximadamente 60.000 millones de pesos argentinos.

Señor presidente: el informe de esos técnicos es más bien conservador, atendiendo solamente al crecimiento vegetativo y desechando para esos cálculos las obras, a las que nosotros aspiramos y no renunciamos, de Salto Grande y de El Chocón.

Adviertan los señores senadores la enorme, la sideral magnitud de las cifras: 60.000 millones, apenas para cumplir nuestras necesidades indispensables en un período de diez años.

¿Estaremos razonablemente en condiciones de poder soportar ese esfuerzo? La conclusión es obvia, señores senadores.

Y bien. El Poder Ejecutivo ha proyectado esta ley; ha creído que estableciendo un estatuto o reglamento general podría manejarse al respecto con mejores posibilidades; tal vez podríamos conseguir créditos a largo plazo del Banco Mundial que hasta hoy no hemos obtenido; podríamos conseguir que viniera el capital

progresista. Pero en lugar de discutirse este proyecto con tranquilidad y desapasionadamente, con sentido constructivo, muchos de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo se han lanzado sobre el proyecto como sobre una presa, un argumento precioso para impulsar su campaña de desprestigio y de oposición sistemática. Sin embargo, hay que señalar cómo en las primeras etapas del proyecto que desde hace un año está en la discusión parlamentaria en el seno de sus comisiones, cuando todavía no se había desencadenado esta campaña de desprestigio, a través de la discusión serena se fue mejorando y perfeccionando. La sanción de la Cámara de Diputados que hoy consideramos difiere bastante del original, que estaba inspirado —por cierto— en los mismos altos propósitos. Las comisiones de la Cámara de Diputados, después de arduas jornadas de labor, han venido perfeccionándolo, hasta tal punto que ha merecido su sanción y hoy está a la consideración del Honorable Senado. Hay mucha distancia entre esta media sanción legislativa y el proyecto original. Por ejemplo, se ha abolido la casi exclusividad de la jurisdicción nacional para la explotación de las fuentes hidroeléctricas de energía. Ahora, en este proyecto de ley está asegurada la concurrencia entre la Nación y las provincias.

Por otra parte nuestros diputados, interpretando una posición de nuestro partido, han incorporado un instituto que es fundamental: el Consejo Federal de Energía —no creado por cierto, porque ya venía proyectado—, pero sí asignándole una nueva y valiosísima función.

El Consejo Federal de Energía, por la sanción de la Cámara de Diputados, debe dar su opinión previamente a la firma de cualquier convenio o contrato por el Poder Ejecutivo, y eso tiene un extraordinario valor, señores senadores. En primer lugar, termina de raíz con la observación de que la ley invade jurisdicciones federales. Y en segundo lugar, sale al encuentro a toda posibilidad de discrecionalismo del Poder Ejecutivo.

Ese Consejo Federal de Energía, constituido por tres funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y por veintitrés representantes de las provincias argentinas, tendrá una función de intervención permanente en los planes de racionalización y de interconexión, además de la de asesor y consultor del Poder Ejecutivo para la reglamentación de la ley, las contrataciones, concesiones o autorizaciones. Ese Consejo Federal denunciará públicamente cualquier error, desviación o discrecionalidad que fuera adoptada por el Poder Ejecutivo de la Nación.

Estamos a cubierto los que tenemos sentimientos federales y los que profesamos una fe democrática y republicana, que no queremos —de ninguna manera— el discrecionalismo que en cualquier forma pudiera producirse. Allí es-

tarán los primeros interesados, los representantes de las provincias, que darán el grito de alerta ante la opinión pública, ya que su intervención será permanente y obligatoria, antes de la firma de cualquier contratación.

Estas dos instituciones, la concurrencia de las provincias con la Nación y la intervención del Consejo Federal de la Energía, serían suficiente argumento para destruir las impugnaciones violentas con que han tratado de impedir la sanción de la ley algunos o la mayor parte de los representantes de la oposición. Serían suficientes si no hubiera, además, las razones que en clase magistral nos ha hecho escuchar el profesor Weidmann, representante por Santa Fe, que legal y constitucionalmente abonan la legitimidad de esta tesis.

Señor presidente: no vamos a abundar sobre lo que han destacado, con absoluta claridad y objetividad, los señores senadores por Mendoza y por Entre Ríos, en cuanto a las condiciones de la ley, ni mucho menos pretendemos hacerlo en el aspecto constitucional, que el senador Weidmann ha agotado en su magistral conferencia.

Sin embargo, señalamos la actitud negativa de algunos partidos de oposición, de todos los que tienen representación en la Cámara de Diputados; se los ha visto reunirse no para acordar un plan de acción, para convenir planes de construcción del país, para lograr su mejoramiento con la legislación positiva; se los ha visto reunirse para concordar las formas de la negación, reiterando aquella actitud que con su característica justeza condenó Hipólito Yrigoyen: han vuelto a mostrar al país el «contubernio», en una actitud negativa, dentro de un local partidario.

Hace pocos días tuve la gran satisfacción de recibir la visita de un representante de uno de los partidos nacionales de oposición. Pero fue por otros motivos: para invitarnos a los miembros de este partido —como lo está haciendo con los demás— a mancomunar la acción, a conjugar esfuerzos para lograr una coincidencia nacional sobre aspectos básicos, tendiendo a la pacificación de los espíritus. No sé si podremos coincidir, si aceptaremos o no podremos admitir sus puntos de vista; pero lo cierto es que creemos que la suya es una actitud positiva. ¡Cuán diferente de la de los otros, que además de la responsabilidad de ser conductores de parte de la ciudadanía, tienen la de ser representantes en funciones, por un sector del pueblo de la República que los eligió y les dio mandato para defender sus intereses en su propia esfera, que es el recinto legislativo!

Esta ley, como señaló el senador Weidmann, para nosotros es buena, pero pudo haberse perfeccionado. Así como en el curso de aquellas primeras conversaciones de la comisión, en las que intervinieron miembros de la oposición y de nuestro sector, se fueron consiguiendo mejoras en el texto, ¡cuánto mejor hubiera sido que en

el recinto legislativo se hubieran analizado nuevamente sus aspectos generales y particulares! Sin embargo, se ha visto precisada la bancada mayoritaria de mi partido a actuar con precipitación, con el sacrificio de algunos de sus miembros que en grave estado de salud debieron concurrir, en un gesto patriótico que los honra, a hacer posible la obtención del quórum legal para la sanción.

El país ha perdido, señor presidente, con la ausencia de los representantes opositores y ha perdido la democracia argentina una oportunidad maravillosa para mostrar su capacidad creadora, capacidad como instrumento de acción, para mejorar la democracia argentina y la democracia como institución universal.

Por nuestra parte, damos nuestro voto con absoluta tranquilidad de conciencia y con plena responsabilidad. Somos sostenedores del programa de un partido, de un programa que tiene principios básicos que he expresado, pero que no se ata a ninguna formulación concreta, que es cambiante con el tiempo y con la realidad a la cual tiene que servir. Nuestro programa no ha sido antojadizo ni es el fruto, el arbitrio, de ninguna mente teorizante. En 1945, cuando tuvo formulación escrita, estaba traduciendo una inquietud espiritual de este sector de argentinos que compone la Unión Cívica Radical, hoy Intransigente. No era arbitraria, señor presidente. Entonces en el mundo imperaba un criterio estatzante, intervencionista. Todavía estaban en vigencia, aunque ya derrumbándose, las instituciones del corporativismo fascista y del nazismo alemán; acababa de triunfar el laborismo inglés; estaba en plena vigencia la aplicación del *New Deal* en Norteamérica. Es decir, nosotros estábamos entonces siguiendo el curso del mundo occidental, al que indudablemente pertenecemos. Pero he ahí que quince años después se produce el *reflujo* hacia otras formas, que los respectivos países estiman superiores o más adecuadas para el momento que les toca vivir en la historia contemporánea, y se repliega el laborismo inglés, y el *New Deal* deja de aplicarse en los Estados Unidos, y terminaron las constituciones y los Estados socializantes. Nosotros, señor presidente, estamos en una posición de lealtad a nuestro origen y esencia nacionalista, de defensa incommovible de los intereses nacionales, y con una firme vocación popular. Queremos llevar adelante al país con nuestro propio esfuerzo, pero tenemos la responsabilidad de saber hasta dónde da ese propio esfuerzo. Sabemos que no podemos abusar del pueblo argentino en aras de una concepción ideológica. El pueblo argentino no pertenece a la Unión Cívica Radical Intransigente, ni todos sus hombres y mujeres tendrán que allanarse a un programa partidario.

En estos días, en este período de gobierno que venimos desarrollando con gran responsabilidad, hemos impuesto y hemos llevado a cabo muchos

sacrificios. Hace poco terminamos de votar una ley que importa, desde otro punto de vista, un nuevo sacrificio: 2,50 el kilo de azúcar. Terminaron las subvenciones a los productos de primera necesidad; terminaron los precios máximos; las subvenciones a los servicios públicos; tratamos de absorber el déficit de las empresas de servicios estatales. Todo eso es sacrificio, y es, a su vez, ahorro nacional. Esa estabilización de nuestra moneda es también sacrificio; es el logro de un esfuerzo permanente y diario del trabajador y de la familia argentina que lo siente en mayor medida que los otros sectores. Pero no se puede, señor presidente, exceder de lo posible. Nosotros exigiremos y nos exigimos los sacrificios que sean necesarios, pero responsable y consecuentemente. Y no nos sacrificaremos inutilmente por un rigor programático que, por otra parte como señalé, está en revisión en mi propio partido, que se ubica plenamente en la corriente internacional del mundo occidental, al que por razones históricas, étnicas, culturales y espirituales, sin ninguna duda, pertenecemos. Y a estos hombres que manejan el capital en el mundo internacional del sector occidental, les pedimos que vengan a ayudarnos. ¿A ellos que tratan de evitar el abuso del intervencionismo de Estado en sus países les pediremos que vengan a fomentarlo en el nuestro? Indudablemente, tendremos que amoldarnos a las posibilidades que ese mundo exterior, del que dependemos en gran parte, nos ofrece. Esto es lo razonable, lo consciente y responsable. Así seguiremos actuando, señor presidente.

Hace muy pocos días una nueva nación ha cobrado figura y personalidad en el mundo, allá en el lejano continente africano. Ahí vemos como el ansia de superación y de progreso de un pueblo, ha conseguido romper las cadenas de larga data que lo mantenía estancado. Pero también vemos con dolor en las páginas de los diarios de hoy, cómo la pasión desatada, cómo la inexperiencia política y la falta de vivencia democrática, está llevando a los dirigentes de ese pueblo congoleño a la destrucción de esa magnífica posibilidad que se les abre en el mundo.

Nosotros, señor presidente, estamos actuando, hoy como ayer, al servicio de nuestra democracia, con responsabilidad de ciudadanos de un país que tiene 150 años de vida propia como Nación independiente y soberana con 100 años de Constitución, y no actuaremos como improvisados; dejaremos para quienes quieran tomarlo el papel de incipientes, de escolares defensores de una democracia de texto. Nosotros actuaremos con responsabilidad; servimos al país a través de un partido político que tiene profesión de fe de no servirse a sí mismo, sino que funda su razón de existir para el país, y servimos también a la democracia argentina, en estos días en que está en decadencia el pres-

tigio de todos los partidos políticos argentinos, en los que han aparecido nuevas formas de conducción multitudinaria, que a veces se las denomina factores de presión; donde los partidos políticos han perdido en gran parte su función de conducción para dar paso a las expresiones particulares de intereses materiales, representados por las fuerzas del trabajo o las fuerzas empresarias, o intereses espirituales, como los representados por las congregaciones confesionales, pero siempre parciales, de sector.

Los partidos políticos deben ser el sostén de la estructura de la democracia argentina por su composición universalista, ya que recogen en sus filas, no el interés o la inquietud de un sector determinado de la población argentina, sino la universalidad, el conjunto de los intereses que lo conforman y lo conmueven, si bien con ciertos matices diferenciales de grandes sectores. Y esto, señor presidente, se está produciendo en la República Argentina. Nosotros, por nuestra parte, hemos de realizar todos los esfuerzos posibles para que nuestro partido siga cumpliendo esa función. Y si nuestro programa de acción debe ser renovado, así lo haremos, interpretando la inquietud actual y la permanente del pueblo argentino. Pero también exhortamos a los demás partidos políticos, porque vemos con profunda inquietud que no asumen el papel que les corresponde y que, salvo raras excepciones, se precipitan a su destrucción, y con ello están poniendo en verdadero riesgo la existencia de la democracia argentina.

Haremos, por nuestra parte, los esfuerzos que sean necesarios para afianzar el prestigio de nuestra tradicional fuerza política; pero es necesario también que los demás partidos hagan su esfuerzo y que adopten la posición que les corresponde en la estructura de la democracia nacional.

Reiteramos nuestra decisión de poner por sobre todo interés partidario los intereses superiores de la Nación, así como que no habrá agravios ni calumnias que nos hagan vacilar, ni temores personales, ni debilidad en nuestro modo de actuar, que nos desvíen de ese objetivo fundamental por el cual hemos advenido a la vida pública y por el cual hemos aceptado la responsabilidad de gobernar a un país de formas democráticas pero con su esencia democrática debilitada y perturbado en lo profundo.

Esa responsabilidad la hemos asumido conscientemente, señores senadores, y en ejercicio de la misma y con clara conciencia del deber que tenemos, estamos actuando en estos momentos.

No recogeremos la crítica maldiciente ni los agravios, muchos de los cuales no merecen ser contestados por lo groseros y por lo infundados. Ya antes de la esclarecedora conferencia del profesor Weidmann, todos sabíamos que esta-

ban mistificando y que nosotros estamos en la auténtica corriente de la historia del progreso argentino.

Nuestra organización republicana y nuestra Corte Suprema de Justicia, que tiene suficientes y fundadas acordadas y pronunciamientos al respecto abonan nuestra tesis. Sin embargo, señor presidente, hubieron calumnias y agravios. Los sentimos, porque tenemos sensibilidad democrática, porque somos hombres de pueblo y no somos indiferentes. Una cosa es la insensibilidad y otra la fortaleza de carácter, la firmeza de decisiones que tenemos que adoptar para servir a la República por encima del amor propio, por encima de las debilidades y por sobre los agravios e insultos.

Nosotros contestaremos con razones, con fundamentos, con hechos, con acción de gobierno y con el ejercicio pleno de nuestra responsabilidad, ya sea en el puesto de la dirección partidaria, en la calle o en el puesto relevante de representantes del pueblo en las bancas del Congreso.

Con toda responsabilidad, señor presidente, votaremos con satisfacción el presente proyecto de ley. (*¡Muy bien! Aplausos prolongados.*)

**Sr. Bértora.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Bértora.** — Señor presidente: entro a este debate a una altura en que prácticamente ha sido agotado el tema en los diversos aspectos que comprende esta ley, tanto en lo referente a sus fundamentaciones jurídicas, como a las técnicas o a las económicas. Cuanto han dicho los señores senadores preopinantes y cuanto se dijo en el ámbito de este propio Senado hace pocos días en la oportunidad de la fundamentación del proyecto de resolución, creando una comisión especial para abocarse al estudio y formulación del proyecto de ley sobre régimen legal de los ríos interprovinciales, sería bastante, a nuestro juicio, para que ya entráramos a la votación directa del proyecto de ley que viene en revisión de la Cámara de Diputados. Pero no he querido dejar pasar, señor presidente, la oportunidad de decir algunas cosas, de traer algunas citas y de señalar también algunas conductas que hoy aparecen contradichas con posiciones de un ayer no lejano.

Trataré, en lo posible, a fin de no fatigar innecesariamente la atención de los señores senadores, de pasar por alto, cosas que ya se dijeron en este recinto en forma tan elocuente, por los señores senadores Weidmann, Cañeque y García.

Frente a este proyecto de ley se han sintetizado diversas objeciones que yo voy a enunciar, no para contestarlas a todas, que ya ha sido hecho por los señores senadores en gran parte, sino para decir lo que a mi juicio resta aún por pronunciar, en el ámbito del Senado. Se dice que el proyecto adolece de la carencia de un plan racional e integral de soluciones; que responde a bases de estudio e inspiración extrana-

cionales; que establece una indebida delegación de facultades y atribuciones propias del Congreso en favor del señor presidente de la República; que importa la violación del principio de las autonomías provinciales; que establece la creación de un centralismo de ejecución con repercusión desfavorable en lo político y en lo económico para las provincias; que autorizara el sistema de las concesiones; que establece la prescindencia como norma obligatoria de la licitación pública en las concesiones; que otorga al presidente de la República la facultad de conceder y, finalmente, que lesiona la soberanía nacional.

Para el radicalismo intransigente, es una trascendente responsabilidad pero al par un honor el asumir hoy esta actitud histórica, complementando la media sanción de diputados y convirtiendo en ley el proyecto del Poder Ejecutivo.

Frente a las expresiones adversas de hombres y de partidos que se dicen representativos de vastos sectores de la voluntad popular, pero que en su obcecación o en su ceguera viven de espaldas a la economía argentina, nosotros tomamos por el atajo más corto, por donde se abrevia el camino, por la ruta practicable para la puesta en marcha de las grandes posibilidades nacionales.

Nosotros no tenemos más ataduras que las de nuestra propia conciencia, y ésta nos dice que debemos estar insobornablemente al servicio del pueblo. Y al país se lo sirve promoviendo su progreso en todos los órdenes, no con frases huecas, desprovistas de trascendencia y que no importan otra cosa que proclamar el atraso como programa de gobierno. Son los eternos agoreros que frente a nuestros planes aseguran que optarían por comer raíces, transitar descalzos y alumbrarse con un candil pero con «luz en el alma».

Es pobre el argumento, señor presidente; ni el progreso está reñido con la diaphanidad del alma, ni es sensato retrogradar a las soluciones en esta era de los «sputniks» y de los viajes espaciales. Por este aferrarse al mantenimiento de estructuras caducas, llegaríamos a proclamar como solución el estado de naturaleza.

Por otra parte, yo me pregunto, ¿cuántos son y dónde están los que quieren voluntariamente seguir en el atraso e imponerse un sacrificio actual sin perspectivas ciertas de un futuro mejor? ¿No es acaso un sacrificio estéril, que al dilatar la solución en el tiempo tornaría agravado el problema? Pero hay fuerzas que están en el juego chico de la politiquería intrascendente, tratando de hacer revivir formas caducas de un federalismo inoperante. No es la defensa sincera y honrada de los estados provinciales, a los que hundirían con sus declamaciones suicidas, sino el planteo menudo de sacar partido y dividiendo de todas las situaciones, aun a costa de hacer naufragar el más caro sueño de todos los argentinos.



¿Federalismo de qué clase es éste, que niega todas las soluciones para sacar a las provincias del estancamiento económico? ¿Es que araso el límite provincial es una muralla que debe impedir el progreso? ¿Federalismo para el avance o federalismo para el atraso? He ahí el dilema a que estamos abocados en este proyecto.

Es verdad que por imperio de nuestra Constitución hemos adoptado el régimen federal de gobierno, pero cada provincia no es una república sino porción de un todo indivisible, inseparable e indestructible que es la Nación Argentina, conjugando armónicamente dentro de la patria toda. La autonomía no puede ser suicida sino que Nación y provincias deben asistirse recíprocamente para el progreso común. No hay nada, señor presidente, en esta ley que pueda interpretarse como un deterioro a la economía de las provincias o como una lesión a su individualidad jurídica. Una experiencia mundial aconseja que el sistema eléctrico debe integrarse por grandes centrales hidroeléctricas y térmicas interconectadas entre sí. Se obtiene con ello el mayor aprovechamiento de las fuentes energéticas y, como resultancia, la máxima economía de los costos. Esa interconexión al sobrepasar los límites políticos de los Estados provinciales deviene en una natural jurisdicción nacional por imperio de la propia Constitución.

Sería por otra parte una aberración, desde el punto de vista técnico, que cada provincia levantara una cortina en sus límites estatales, impidiendo el tendido en su órbita local de las grandes redes interconectadas. Sería suicida para su economía y lesivo para el interés general.

Nosotros, señor presidente, frente a los que buscan soluciones ideales, sin concreción, carentes de coraje realizador, asumimos esta responsabilidad histórica. Frente al «párelos», que es quietud y es inercia, nosotros, con responsabilidad de gobernantes, seguimos nuestra marcha seguros del derrotero, con firmeza en nuestros planteos, dando por los medios posibles, sin quimeras ni utopías, las soluciones que el país necesita.

Nada haríamos con extraer más petróleo o producir las materias primarias si careceramos de energía para industrializarlas. Y eso lo sabe la oposición, y se opone a la ley, no para hacerla mejor ni porque tenga urgencia de una legislación más adecuada, ni en defensa de la soberanía nacional o las autonomías provinciales, sino simplemente para que no haya energía y para que prosigamos sumidos en el atraso. Quiere el fracaso del gobierno aun a costa de los permanentes intereses de la nacionalidad.

El radicalismo intransigente no puede entrar en ese juego, y no podemos ser tan torpes y tan ingenuos para hacernos eco de toda su artillería verbal, cualesquiera sean los calificativos que se nos adjudiquen.

De pocos proyectos me he ocupado con más inquietud, dedicación y contracción que de éste, dadas las críticas de que ha sido objeto, y confieso honradamente que en su texto actual, aunque podría ser perfectible, nada hay que repugne a mi conciencia federalista. Sólo el punto que se refiere al artículo 11 ha traído y concitado criterios que yo creo que hasta por nuestro propio respeto no debemos nosotros, desde ningún punto de vista, contestar aquí. Yo en cambio, como representante natural de un Estado federal, no pongo reparo alguno a las cláusulas sobre la jurisdicción nacional que estimo ajustadas a las disposiciones de la Carta Fundamental: y es que a nadie cedo el privilegio de ser más auténtico defensor del federalismo que yo.

Es sugestiva, señor presidente, la dualidad de algunos profesores ya nombrados en este debate y de algunos tratadistas que han vertido opiniones anteriormente como tales y que ahora, como periodistas o políticos, sostienen la tesis opuesta. Para clarificar el concepto, es necesario delimitar con precisión el alcance jurídico de este acto legislativo. Como se ha dicho ya, en rigor de verdad, el Parlamento sólo dicta una ley normativa de las facultades que por disposiciones constitucionales ya les son propias al Poder Ejecutivo. Se le otorga un mandato. ¿Para qué? Sobrentendido está que es para que lo cumpla bien, pues de lo contrario sería un mandatario infiel y pasible de la responsabilidad que contemplan la ley y la Constitución Nacional. Y lo que el Congreso en ningún caso ha renunciado ni renunciará, ni delegará, es la facultad de fiscalización permanente sobre los poderes constitucionales e incluso del Poder Ejecutivo.

No es el Congreso, señor presidente, conforme a la ley, quien promoverá las grandes captaciones de energía eléctrica, sino que es el Poder Ejecutivo el que promoverá lo conducente, pero como dice el artículo 7º, dentro de las facultades que le otorga la ley. También es el Poder Ejecutivo el que otorgará las autorizaciones y concesiones, conforme al artículo 11, y si las otorga mal —porque el propósito del Congreso es que las conceda bien— responderá de su incuria, negligencia o mala fe.

Entiendo que el artículo 11 no vulnera ninguna cláusula constitucional sino simplemente que reconoce o señala el órgano natural competente, el órgano administrador, con la facultad administrativa de ajustar convenios que hacen a su propia órbita constitucional. El Parlamento, órgano legislativo, establece, en cambio, las normas generales y especiales dentro de las cuales deberá moverse y ajustarse el órgano administrador. ¿Para qué? Para ajustar las bases y disposiciones de los contratos. Cada uno, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, obra dentro de la órbita de sus propias facultades: ello no quiere decir —por aquello de que todo



lo que no está prohibido esté permitido— que el Poder Ejecutivo no pueda operar de distinta manera, y que incluso —no obstante sus atribuciones propias conforme a la Constitución y a esta ley y dentro de la separación de los poderes— pueda, lo diga o no la ley normativa, concertar convenios ad referendum del Congreso si así las partes lo consideran conveniente.

Tenemos la seguridad de que entre los que se oponen a la sanción de esta ley, los hay quienes lo hacen por distintos motivos: unos, por sincera convicción doctrinaria, apegados a programas que todos juzgamos convenientes dentro del plano de lo ideal, y que ahora, por falta de ductilidad de adecuación, no advierten que estamos lanzados en un programa de realización vital para el país, respecto del cual, como hombres de gobierno, debemos optar por lo mejor dentro de lo posible, y no por lo ideal dentro de la utopía.

Afirmar que esta disposición hace caer a los que la dicten en el anatema del artículo 29 de la Constitución Nacional es un verdadero dislate, como bien lo señaló el señor senador por Santa Fe, que sólo de mala fe o por ignorancia puede denunciarse. Podría, sí, afirmarse, con alguna base de seriedad, de que el ulterior tamiz legislativo sería —por acción de la representación popular en la Cámara de Diputados y de los representantes de los Estados federales en el Senado— una garantía más de perfectibilidad, pero no otra cosa, no porque vulnere las claras cláusulas de la Constitución Nacional.

En cambio, quienes también con poderosas razones sostienen la tesis contraria, la que ha guiado a las comisiones internas del Senado en el proyecto que tienen en consideración, entienden que lo que se necesita es un instrumento ágil, capaz de concretar en la oportunidad propicia y debida, la incorporación de capitales mundiales, que no abundan para estas inversiones.

El trámite legislativo es lento y lo pone en evidencia este Parlamento argentino. No vaya a resultar entonces que con una solución ideal no se consigan los capitales indispensables de que carecemos, o que cuando nos hayamos puesto de acuerdo sobre la ratificación ya hayan transcurrido los plazos de acción y esfumándose los inversionistas.

Se objeta que esta ley es lesiva para la soberanía del país. Pero ¿qué es la soberanía, señor presidente? ¿Puede ser una abstracción divorciada de la realidad concreta? ¿O es que en cambio seremos soberanos sólo en la medida en que podamos vencer el atraso y el estancamiento, electrificando para industrializar? Es curioso. Los mismos que objetan la presunta hipotética inspiración extranacional de esta ley no oponen, en cambio, reparos a que las provincias, en esas mismas fuentes extranacionales, puedan, sí, ne-

gociar su energía en cualquier forma, por concesiones o por leoninos empréstitos.

Se habla también de que esta ley importa una entrega al imperialismo extranjero. Nosotros sabíamos que el camino de la recuperación era difícil y estaba sembrado de espinas. Sabíamos más: que íbamos a tener que soportar la incomprensión y hasta el repudio transitorio de los beneficiarios de nuestras inquietudes, pero eso nunca nos desalentó ni deprimió, sino que obró de acicate para adoptar las únicas medidas que podían positivamente encarrilar el país hacia la recuperación definitiva. En muchos labios —hasta en labios hermanos— hemos oído balbucear la palabra «entrega», y la injuriante imputación de un acomodamiento al imperialismo foráneo, sin advertir que una y otra cosa se hubieran conjurado para nuestra desgracia si por falta de decisión y de coraje nos hubiéramos atado a planes doctrinarios ya perimidos para este instante histórico.

La incomprensión en unos, y la obcecación en otros, y la falta de perspectiva en los más, sin dejar de computar también el odio y el resentimiento, les hace olvidar que no existen verdades inmutables en el devenir económico. Tenemos ya suficientes años como para poder haber sido espectadores de los grandes como acelerados cambios operados en la humanidad.

Los hombres, como las naciones, deben a cada paso replantear sus conductas. Hasta ayer no más nosotros éramos, y nos enorgullecíamos de serlo, el gran granero del mundo, eternos proveedores de productos primarios, y paralelamente otras naciones ponían todos sus esfuerzos para mantenernos en esa sumisión aberrante. Hoy, en cambio, se advierte que ese atraso industrial no beneficia a nadie y que el colonialismo de ayer se transforma en asistencia técnica y en cooperación económica.

Y es que el mundo quiere paz. Paz duradera y definitiva, y no la habrá si no se destierra aceleradamente la ignorancia y la pobreza. El subdesarrollo no favorece las posibilidades de la expansión de los mercados que sólo se obtiene con el progreso material y con el florecimiento de la cultura.

¿Como puede hablarse entonces de entrega si todos nuestros pasos están dados y tiene un solo norte, el de la liberación del hombre argentino? Y no lo hemos de liberar atados a prejuicios ni amedrentados por imputaciones tan infamantes como pueriles de quienes pretenden encasillar nuestra conducta dentro del anatema del artículo 29. Deben advertir esos compatriotas desaprensivos, que no es posible seguir jugando al odio y a la desunión de los argentinos. El odio, como el bumerang, se vuelve contra quien lo arroja. Nos explicamos su odio, pero a él oponemos nuestra comprensión, nuestra tolerancia y nuestro amor.

Sin duda que esto, aparentemente, puede afectar nuestro honor. Shakespeare ya decía que para el hombre como para la mujer, el primer tesoro del alma es la fama. «Quien me hurta la bolsa, me hurta un vil metal. El oro es cualquier cosa; es nada; fue mío, fue vuestro, esclavo de mí; en tanto que quien me roba la fama, me arrebató un bien que sin enriquecerlo me convierte a mí en un mendigo.»

¿Cómo hemos de dejar pasar con desaprensión tanta infamia, si ese tesoro, nuestra fama de hombres honrados más que de hombres sabientes, fue lo que nos promovió a esta instancia parlamentaria y a esta función política de gobierno? Pero al odio y a la intemperancia que hacen decir cosas tremendas, nosotros oponemos nuestra tolerancia que no es debilidad sino signo de fortaleza. A sembrar la semilla de la tolerancia, del amor y de la convivencia hemos venido al gobierno, luego de tantas luchas y luego de tanto odio.

Yo, frente a quienes esgrimen y levantan la bandera de un federalismo retrógrado y regresivo, voy a hacer algunas citas de grandes hombres, de hombres nuestros, que dijeron, como Avellaneda, que «nada hay dentro de la Nación superior a la Nación misma», y de Urquiza, que «todos somos amigos e hijos de la gran familia argentina», y de Alberdi, que «sin la unión de los intereses argentinos, sólo habrá provincias argentinas pero no República Argentina, ni pueblo argentino».

Alberdi, que fue el padre de nuestra Constitución, ya en el Preámbulo, inspirado también por él, dice cosas que con toda brillantez y galanura ha expuesto ante este cuerpo el señor senador por Santa Fe, y sobre las que no quiero volver para no fatigar innecesariamente a mis colegas, pero los preámbulos son expresiones colocadas en la tapa de las constituciones para que se vean primero y para que sirvan de interpretación de lo que es el verdadero cuerpo legal de las mismas. Alberdi, con referencia al Preámbulo, decía que ellos constituyen un medio para resolver las dudas ocurridas en la aplicación de la Constitución, y Bielsa expresa que los preceptos constitucionales tienen, si no todos, en su mayor parte, una base valorativa en el preámbulo. En ese sentido nuestro Preámbulo, señor presidente, asegura la paz interior, promueve el bienestar general y afianza la justicia. Story decía que el preámbulo es la llave para abrir la mente de sus hacedores.

Aun a riesgo de fatigar, pero, como he dicho en un comienzo, en el deseo de traer a esta Cámara la opinión no desfigurada de hombres que en un ayer no lejano emitieron opiniones coincidentes con la que hoy anima a estos legisladores, voy a dar lectura de algunos de esos pensamientos, algunos de ellos vertidos en oportunidad de las reuniones promovidas por la Co-

misión Asesora de Planificación Hidroeléctrica conforme al decreto 1.728 del año 1957, en la época de la Revolución Libertadora.

Algunos conceptos, si bien no coinciden en cuanto a las resultancias finales y en cuanto al proyecto en sí, que difirió del que ahora estamos tratando, sirven en cambio como interpretación del pensamiento íntimo en lo que atañe al federalismo y a lo que se ha llamado nuestra entrega de la soberanía.

El doctor Martínez Paz, para advertir la dificultad de este problema dentro de los cauces constitucionales, recordaba que en la ley fundamental no se contempla el problema de generar electricidad porque en la época en que fue redactada estas posibilidades no existían y preocupaban únicamente la navegación, el riego y la pesca. Luego me referiré a la forma de interpretar las constituciones a través del tiempo.

El ingeniero Masa agregó: «Será necesaria una amplia coordinación y entendimiento entre todos esos gobiernos para crear la industria energética sobre las bases de hechos prácticos y por lo tanto se impondrá superponer a la geografía política existente una geografía económica, pues para satisfacer las necesidades de energía de un país se debe recurrir a todas sus diversas formas a medida que ello convenga, y que en sí formen una unidad concurriendo por distintos caminos a satisfacerlas.»

Y el doctor Spota, cuyo tratado fue también citado en varias oportunidades por el señor senador por Santa Fe, en carta que le envió al ingeniero Luis M. Gotelli y que éste en la expresada reunión plenaria dio íntegra lectura, dice, entre otros conceptos, refiriéndose al proyecto de ley de política hidráulica: «El proyecto de ley sobre política hidráulica que gentilmente me ha hecho llegar lo considero, en sus líneas generales, contrario a nuestra ley suprema nacional, por importar abdicaciones del gobierno de la Nación en materia que le atañe exclusivamente y con prescindencia de gobiernos locales. Este proyecto olvida que todo lo atinente al comercio interprovincial es de exclusivo resorte de la Nación por imperio de lo que establece el artículo 67, inciso 12. El Congreso de la Nación no puede ni debe permitir una coparticipación con poderes locales de esa atribución exclusiva. Mucho menos puede quedar sometido el Congreso a lo que decidan las provincias en esta materia, y ello aun cuando, tratándose de ríos interprovinciales, se proponga someter los diferentes a la Corte Suprema de Justicia. Insisto en que las leyes federales norteamericanas de 1920 y 1935 —que ya fueron también citadas en este debate—, son ejemplos que nuestro país debe seguir. En ellas se respeta el principio federalista y se impide que un mal entendido localismo provoque no sólo lamentable retardo en la consecución del mayor apro-

vechamiento hidráulico e hidroeléctrico sino que conduzca a trabar la justa acción del gobierno central para satisfacer los intereses de toda la Nación.»

Y, como ocurre siempre en estas cosas, frente a una tesis que apoyaba un federalismo cerrado, y otra que establece la jurisdicción nacional —que es la nuestra— aparece también la tercera posición. Fue la del profesor Sánchez Viamonte, que, adhiriendo a la tesis de que es facultad de las provincias reglar entre ellas el uso de los ríos interprovinciales y también reconoce la competencia de la Corte pero dice que ésta tiene que aplicar algunas normas sustantivas y que esas normas con carácter general, no para cada río, deben ser dictadas por el Congreso Nacional.

El doctor Greco indica también que a su criterio son de jurisdicción nacional los ríos interprovinciales a los fines de regular su equitativo aprovechamiento, y se refiere a una obra de Gonella en que establece que si las economías se aíslan por fronteras imaginarias y traban el desenvolvimiento del bien común ello redundaría en perjuicio del conjunto, criterio que se puede aplicar con mayor razón aun a los planteos provinciales. Como conclusión estableció que el agua pública y su aprovechamiento es un bien del pueblo de toda la República.

Y Allende Posse, cuya posición ya conocemos, refiriéndose a una parte de la ley, la de las redes de interconexión y comunicación por todo el territorio nacional, reconoce que el problema es diferente y que ellas escapan del ámbito de la provincia y penetran en el territorio de otras, por lo que admite y auspicia la solución de la administración nacional.

El doctor Teodoro Ackermann, que también intervino en la mencionada Comisión Económica de Planificación Eléctrica, presentó el 9 de octubre de 1957 un trabajo a la Novena Reunión. Voy a leer solamente algunos párrafos, aunque es todo interesantísimo, para dar una idea de la adecuación de ese pensamiento con lo que aquí sostenemos.

Se refiere al sistema nacional de energía eléctrica y dice: «El sistema eléctrico nacional lo forman las grandes centrales hidroeléctricas, las grandes centrales térmicas y las líneas de transmisión y de interconexión de todas esas centrales, incluyendo línea de transmisión desde 132 kilovatios y mayores y sus estaciones transformadoras con prescindencia de límites jurisdiccionales y considerando al país como una unidad político-económica. Las grandes centrales termoelectricas estarán ubicadas, dado el gran caudal de agua que necesitan para la condensación, en las costas del litoral fluvial o marítimo mientras que las grandes centrales hidroeléctricas en la Mesopotamia (Salto Grande, Apipé y Río Paraná Medio) o sobre el sistema andino (Río Limay, Río Grande, Río Diamante,

Atuel, Tunuyán, Río Mendoza). Para la realización de esas grandes obras hidroeléctricas y centrales térmicas con sus líneas de transmisión, de interconexión, se necesita la capacidad técnica, económica y financiera de la Nación.»

Y agrega más adelante: «La Constitución Nacional, que fue sancionada en 1860 no contiene disposiciones sobre la energía eléctrica en su artículo 67 (atribuciones del Congreso)» y ello es explicable: la primera distribución de energía eléctrica efectuada en el mundo como servicio público se realizó en Londres en el año 1882; en ese mismo año se realizó también en Alemania la primera transmisión de energía eléctrica a una distancia de 57 kilómetros. La implantación y explotación por el Estado nacional de centrales eléctricas, térmicas o hidráulicas y las líneas de transmisión de energía eléctrica es proveer «lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias» pues abastecerá a ellas de energía eléctrica barata y abundante, tanto más si «promoviendo la industria y la exploración de los ríos interiores» llega a realizar todos los aprovechamientos hidroeléctricos posibles en toda la República. Esto no podía preverlo la Constitución Argentina con claridad, porque en la época de su sanción todavía no se había inventado la máquina eléctrica por Gramme (1869), basada en la inducción electromagnética descubierta por Faraday en 1831.

Por otra parte, el comercio interprovincial y exterior de combustibles debe ser reglado por el gobierno federal (artículo 67, inciso 12). «Llegamos —dice el ingeniero Ackermann— a la conclusión de que la Nación puede establecer y explotar centrales eléctricas y líneas de transmisión de energía eléctrica en cualquier punto de la República; y además debe tener jurisdicción sobre la producción y transmisión de energía eléctrica, para llegar al control y la regulación de toda la energía eléctrica del país, sea cualquiera su destino.»

Spota también presentó una exposición a dicha reunión. Pero el doctor Weidmann ya ha expuesto aquí su pensamiento en forma exhaustiva, de tal manera que sólo voy a emitir algunos pocos conceptos sintetizados en ese trabajo que me parece de gran claridad a los fines de dilucidar el pensamiento que inspira la ley.

Dijo que estaba de acuerdo con el planteamiento general del problema. Estimaba muy bien discutido el concepto de que las fuentes de energía son de propiedad de la Nación, expresando que «las provincias tienen el dominio de esas fuentes» —lo que no se discute, por cierto— «y que las dificultades que existen en nuestro país para llegar a una solución concordante de intereses diversos, es la ley federal y posibles leyes provinciales que armonicen con la primera. Tal ley —expresó— debe abordarse tomando en consideración las características especiales de la industria eléctrica, que por su complejidad ha superado al localismo». Se refirió al concepto sustentado de «respetar al máximo el derecho

de las provincias», opinando que ello sería ideal. Juzga que tal modalidad exige una mano única para todo el país. El derecho público debe tratar de armonizar la existencia de tantos poderes. Expresó que muchos sostienen que las provincias son soberanas y que él en cambio piensa que sólo son autónomas. Que el problema debe abordarse poniendo entonces de relieve las características de la industria eléctrica, su amplio campo de actividad, su régimen financiero, etcétera, que desbordan los límites locales. Que no puede ubicarse el problema en una sola provincia, según ha sido observado por autores norteamericanos, para lograr así un auténtico federalismo, teniendo en cuenta que las concesiones que otorguen las provincias a sociedades formalmente distintas, en el fondo, originan el problema del *holding*, o sea, que esas concesionarias quedan controladas por una sola mano.

Toda vez que haya transmisión de energía fuera de una provincia en razón de que por su desarrollo, importancia y potencia de la fuente no pueda explotarse o consumirse dentro de esa provincia la totalidad de energía generada, ocurrirá la creación de un comercio interprovincial, en cuyo caso inevitablemente debe reglarlo el Estado nacional. Bajo tal aspecto sugiere el doctor Spota se dirija la vista a Norteamérica, donde el federalismo es más acentuado que el nuestro. El derecho de los Estados es más poderoso que en nuestro país. Hace medio siglo que aquel país abordó el problema que preocupaba al poder central y le dio una solución audaz. Estableció desde luego la jurisdicción sobre todas las aguas navegables. Hay caídas de agua donde el único poder es el de la Nación. Agregó que es necesario, de acuerdo con esa ley norteamericana, extender el poder central, no sólo sobre los ríos navegables, sino sobre las fuentes de energía en plena montaña, siempre que la industria eléctrica pueda efectuar en alguna medida el comercio interestatal. Si Mendoza, por ejemplo, propusiera transportar energía fuera de la provincia, ése sería un problema de la Nación.

En Estados Unidos, en caso de guerra o emergencia económica del país, el poder federal exige que una zona bien dotada ayude a otra de pobreza económica y se ordena efectuar la conexión para que la emergencia quede salvada, agregando que si ello se hace en Estados Unidos nada impediría que se legisle en el mismo sentido en nuestro país. El caso sería combinar todas las fuentes en una especie de sistema tipo ley Láinez, en cuya virtud las provincias entienden que les conviene acogerse a la respectiva ley federal, que le aseguraría que todo consumo interno sería manejado por ellas. Es decir, un sistema armónico en el se conjuga el interés del Estado nacional, el derecho del dominio de las provincias y el derecho local del

aprovechamiento energético, en el problema de las concesiones y del orden indicado.

Manuel Castello, funcionario de nuestro gobierno, en su libro *Legislación de agua*, también se ocupa del problema de los ríos navegables con relación al aprovechamiento integral de los mismos, y también admite que, en lo que atañe a su utilización energética, caiga dentro de la jurisdicción nacional.

Yo voy a traer, además, señor presidente, un recuerdo más fresco. Se refiere al de la Convención Nacional Constituyente de 1957. Y lo voy a traer para demostrar que los que estuvieron allí representados y permanecieron en el ámbito de la reunión de aquel cuerpo deliberativo —ya que nosotros, el radicalismo Intransigente, abandonó las bancas desde su comienzo— opinaron en una forma muy distinta a la que sostienen hoy en los periódicos y en la discusión pública. Voy a sintetizar ese pensamiento leyendo los proyectos de modificación a la Constitución de 1853 que el radicalismo del Pueblo presentó a esa Convención Nacional Constituyente. Así, por ejemplo, expresa —palabras que figuran en el tomo II, página 944, primera columna, del Diario de Sesiones de la Convención—: Proyecto de reformas —que firman los convencionales constituyentes Aldo Tessio y Adolfo R. Rouzaut—. «Partiendo de la base que el subsuelo nacional provincial es de propiedad de las provincias, el Estado nacional ejercerá la explotación exclusiva del petróleo y sus derivados, energía atómica, caídas de aguas y demás fuentes de energía con excepción de los vegetales, pero entregará el 50 por ciento de las utilidades liquidadas a las provincias a que corresponde el subsuelo explotado en proporción a sus respectivos índices de producción. En cuanto a la prestación de los servicios públicos, corresponde ésta, originariamente, al Estado nacional o provincial, según los casos, quienes podrán otorgar concesiones a particulares, con sujeción a los principios de esta Constitución. En tal caso, el Estado ejercerá un control estricto respecto al cumplimiento de la concesión.» Y en la página 972, primera columna, como artículo nuevo para incorporarlo al texto de la carta fundamental, consigna: «Lo minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, carbón, gas, elementos nucleares y radiactivos, y demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación o de las provincias según el lugar donde están situados. Su explotación, cateo y extracción podrá ser efectuada por las provincias en sus respectivos territorios cuando la Nación no lo hubiere hecho, sin perjuicio de las facultades de ésta para realizar las mismas operaciones. Los productos obtenidos de las provincias deberán ser vendidos exclusivamente a la Nación al precio que se conviniere. La explotación, industrialización, distribución y comercialización es-

tarán a cargo exclusivo de la Nación, que convendrá con las provincias respectivas el otorgamiento de porcentajes equitativos y razonables sobre los productos que de ella extrajera, sometiendo cualquier diferencia al laudo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ningún caso, ni la Nación, ni las provincias, podrán otorgar concesiones privadas a los fines antes indicados, dejando a salvo los contratos de locación de obra o de servicios.»

Y como artículo nuevo siguiente al anterior agrega: «La explotación de las fuentes de energía hidráulica queda reservada al Estado nacional o provincial, que a tal objeto realizará las expropiaciones o establecerá las servidumbres necesarias.»

Ese despacho lo firman Ricardo Lavalle, Rubén Blanco, Rodolfo Rouzaut y Carlos Becerra. Este es el proyecto presentado por las radicales del Pueblo en aquella Asamblea Constituyente. El miembro informante, convencional Lavalle, en la página 1062, entre otras cosas expresa: «Sostenemos también con fe invencible en nuestras propias fuerzas como nacionalidad que aspira a realizarse en plenitud, sin retaceos para su decoro y sin mengua para su dignidad, que la explotación, industrialización, distribución y comercialización deberán estar a cargo exclusivo de la Nación, que convendrá con las provincias respectivas el otorgamiento de porcentajes equitativos y razonables sobre los productos que ella extrajera, sometiendo cualquier diferencia al laudo de la Corte Suprema de la Nación.»

—Ocupa la Presidencia el señor senador Víctor Hugo Fleitas, presidente de la Comisión de Interior y Justicia.

**Sr. Bértora.** — Es decir que nadie discute la jurisdicción nacional sobre las fuentes de energía hidráulica, sino, simplemente, en cuestiones de detalle; conceden a las provincias el aprovechamiento y la participación, cosa que también en nuestra ley bajo otros aspectos también se contempla.

Pero para ser honrados intelectualmente también vamos a exponer el pensamiento de otros partidos políticos, como por ejemplo el de la Federación de Partidos de Centro. La oposición del doctor Pastor, que figura en la página 1134, primera columna, dice: «En el problema del petróleo se coloca a las provincias en el trance de que si la Nación quiere hacer algo en el territorio de ellas para explotar su riqueza petrolífera, las provincias no podrán hacer nada. Si han iniciado algo y al día siguiente quiere el gobierno de la Nación hacerlo, queda sin efecto todo lo que programaron y prometieron. ¿Y quién va a contratar con esas provincias que están colocadas de modo ineludible frente a un solo comprador de sus productos y sin fuerza suficiente para fijar precios que le convengan,

pues o venderán como quiere la Nación o no venderán nada?». «Entonces —agrega— se ha roto definitivamente la concepción fundamental del federalismo argentino.»

Es decir, señor presidente, que el Partido Conservador, de antes como de ahora, está en la misma línea colonialista de siempre, o sea que coloca a las provincias en compartimientos estancos dentro de un federalismo regresivo e inoperante.

Hubo otras opiniones más. Las del convencional Mathov, por ejemplo, que figuran en la página 1199, columna segunda, y página 1200, y que se refieren a que la crítica que hizo el convencional Molinas, del Partido Demócrata Progresista, en el aspecto mencionado, «no fue acertada porque exageró la nota hipertrofiando perniciosamente el sentido de defensa del federalismo. En el aspecto económico llegó a postular lisa y llanamente la disolución nacional al preconizar una autonomía económica para las provincias que, de llevarse a cabo, traería el caos y la anarquía de la República». Y agrega: «De seguirse al pie de la letra los puntos de vista del señor convencional Molinas, la Argentina, como nación, quedaría herida de muerte, retro trayéndose la situación a la que imperaba antes de concretarse los pactos federales dictados antes de la Constitución del 53.»

Y el doctor Nicolás Repetto, que llevó también la voz cantante del Partido Socialista en esta discusión, en página 1502, siempre de este mismo tomo, segunda columna, propuso en su disidencia, como artículo 9º: «Las fuentes naturales de energía y yacimientos de petróleo, gas natural y carbón, así como las corrientes de agua y las acumulaciones de minerales susceptibles de generar energía, pertenecen exclusivamente a la Nación, son de su propiedad imprescriptible e inalienable y su explotación se hará por el Estado nacional. Están reservadas para satisfacer el interés general y el de cada una de las provincias y divisiones territoriales que integran la República, a fin de promover el bienestar general y proveer a la defensa común. La explotación, industrialización, distribución y comercialización estarán a cargo exclusivamente de la Nación, que convendrá con las provincias respectivas el otorgamiento de participaciones equitativas y razonables sobre los productos que ella extrajera, sometiendo cualquier diferencia al laudo de la Corte Suprema de la Nación. En ningún caso, ni la Nación, ni la provincia, podrán otorgar concesiones privadas a los fines antes indicados, salvo los contratos de locación de obras o de servicios de la Nación. La explotación de las fuentes de energía hidráulica, queda reservada al Estado nacional o provincial, que a tal objeto realizará las expropiaciones o establecerá las servidumbres necesarias.»

Ya el señor senador Weidmann se ha referido al proyecto Palacios del año 1941 en materia de aprovechamiento de ríos interprovinciales; a la

discusión legislativa en aquella oportunidad; a la Conferencia de Abogados de Tucumán; al Congreso Argentino del Agua del año 41 y también al pensamiento desde el punto de vista legal y constitucional en el derecho argentino, sobre todo lo cual voy a pasar por alto, a fin de no cansar innecesariamente a los señores senadores. Pero voy a leer en cambio lo que uno de los señores senadores en aquella discusión, también representante por Entre Ríos, el señor Laurencena, manifestara en un pensamiento coincidente con éste, aunque en un tema tangencial, en la sesión del 25 de septiembre de 1941. Dijo: «Es exacto que las provincias tienen el dominio de los ríos, como parte del dominio territorial a que se ha referido el señor senador por Salta, como sobre todas las cosas materiales que existen dentro de las provincias, pero este dominio no es absoluto, no es ilimitado, y por el contrario, tiene limitaciones impuestas por el interés público y por los posibles conflictos o choques del derecho de esas provincias con el de otras, e inclusive, en ocasiones, con el de los particulares.

»El dominio de las provincias sobre los bienes (dominio territorial) tiene limitaciones sobre las cuales ha legislado el Congreso, permanente e invariablemente, desde que existe el orden constitucional argentino, y que las provincias no han discutido nunca y que no podrían discutir.

»Las provincias son dueñas, por ejemplo, de todas las tierras, de todos los inmuebles que no tienen otro propietario; es un dominio perfecto y absoluto; está reconocido, desde luego, o surge de cláusulas constitucionales indiscutibles del Código Civil, pero ese dominio no lo pueden ejercer las provincias en forma absoluta ni caprichosa, ni de acuerdo con la legislación provincial, sino que está sometido a todas las reglas del dominio establecidas en el Código Civil. Las provincias no pueden dictar un régimen de propiedad distinto al que existe en ese código; ellas tienen que vender de acuerdo con aquellas reglas; ellas pueden afectar con gravámenes de acuerdo con las reglas del Código Civil; pueden aceptar servidumbres, de acuerdo con las reglas del Código Civil. De modo que este dominio que es, recalco, tan absoluto como el de los ríos, está sujeto a las prescripciones y limitaciones que ha impuesto la legislación general del país.

»Pero hay otro caso sobre el cual quiero llamar la atención, señores senadores. Nadie ha discutido, hasta ahora, que las minas sean de propiedad de las provincias, como parte de su dominio territorial; más aún, porque el régimen minero existente en el país cuando se organizó o se dictó la Constitución, establecía ya el dominio absoluto en la división política territorial. Sin embargo, el Código de Minería ha podido llegar hasta el punto de prohibir a las provincias que exploten las minas de su do-

minio, que nadie discute que son de ellas. Yo llamo la atención a los señores senadores sobre estos aspectos de la cuestión.

»Esto quiere decir, señor presidente, que sin negar, sin discutir el dominio que las provincias ejercen sobre los ríos que cruzan sus territorios es admisible una legislación de carácter general dictada por este Congreso que regule la forma de ejercicio de ese dominio. Para mí, pues, —agregaba Laurencena— este aspecto de la cuestión está perfectamente dilucidado.»

Había realizado también algún estudio de legislación comparada, pero la exposición del señor senador por Santa Fe, que con gran erudición hizo referencia a las norteamericana, mexicana, chilena, brasileña, etcétera, me eximirán de tocar ese aspecto de esta cuestión que yo considero fundamental.

Zabalía, en el mencionado Congreso de Abogados, de Tucumán, expresó estos conceptos que también traigo a colación por ser de interés. «No puede creerse que hayan sido enumeradas una por una todas las facultades delegadas», es decir, se está refiriendo al escabroso asunto de la delegación de facultades por el Congreso en el Poder Ejecutivo nacional. Y dice: «Las enumeradas dan una regla general, debiendo considerarse delegadas las facultades que por su naturaleza o por lógica consecuencia de las enumeradas puedan considerarse correspondiente al poder nacional. Entre éstas están las que se refieren al dominio de los ríos, de otro modo, cuando dos Estados provinciales tuviesen una cuestión, no habría medio de solucionarla. No es posible aceptar esta consecuencia de la afirmación de que el poder no delegado inhibe a la Nación de ejercer jurisdicción» —no dominio—, señor presidente. Jamás ha podido estar en la mente de los constituyentes la creación de un problema tan grave, puesto que justamente problema como éste no estaba contemplado al dictarse aquella Constitución. Por eso, señor presidente, voy a dejar de lado opiniones que pensaba también traer aquí, para ocuparme al tratar este problema tan zarandeado, de la interpretación de la Constitución.

Las leyes, las constituciones, no pueden ser creadas ni redactadas para su no aplicación sino justamente para facilitar el curso de las cosas y de los acontecimientos. Por eso, en la interpretación de la Constitución hay que buscar lo que se llama la interpretación favorable de la misma, ha, que interpretarla en forma que favorezca el progreso y permita su aplicación racional a hechos y situaciones no previstos por el legislador, pues de otra manera quedarían aquéllos sin solución y tal, señor presidente, como ha quedado evidenciado a través de las citas que he traído, ocurre con el problema de la hidroelectricidad, que no pudo ser contemplado en la oportunidad de la sanción de la Constitución.

Como ya se ha recalcado con acierto el aprovechamiento de la energía hidráulica para generar electricidad es un hecho nuevo, posterior a la sanción de aquel cuerpo legal tan admirable que pudo durar un siglo, casi sin retoques de ninguna naturaleza. Si no hubiera solución dentro de la misma para los nuevos problemas, soluciones que tienen que ser para progresar y no para retrogradar, la Constitución no hubiera durado casi un siglo sin retoques fundamentales.

—Ocupa la Presidencia el presidente provisional del Honorable Senado, doctor José María Guido.

**Sr. Bértora.** — La interpretación debe ser dúctil, no rígida, pero impregnada de realismo y adecuada a las urgencias de un mundo en constante evolución. Debe buscarse la armonía constitucional que construya y no una disgregante interpretación que trabe y paralice el progreso.

Carlos Alberto Alcorta, en un trabajo meduloso que apareció en la revista «Jurisprudencia Argentina», en el año 1924, tomo 14, páginas 25 a 35, en su capítulo 3º se ocupa justamente de la interpretación científica de la Constitución Nacional, del cual, aunque tengo el texto íntegro, sólo voy a leer dos párrafos para compendiar el pensamiento de este ilustre jurista. Dice así: «El desenvolvimiento del factor económico en la Constitución Nacional presenta, con relación a las características expuestas, un aspecto interesante para la apreciación científica de sus preceptos. Toda su finalidad económica se desenvuelve en el tráfico de la Nación y de una manera universal; y más que todo, en cuanto ello implica el evolucionismo de las instituciones jurídicas. El derecho, ciencia de relación, es la disciplina más predisuelta a seguir paso a paso las fases y progresos del movimiento económico; contiene relaciones de acciones libres e individuales, aisladas y mutuas, frente a las cosas y a la comunidad. El decide apreciando en su justo valor las necesidades y actividades de la vida: el capital y el trabajo, material y espiritual, como objetos del comercio jurídico.»

Y al final, llega a estas conclusiones. Se pregunta «qué conclusiones surgen del precedente bosquejo. Las normas de la Constitución Nacional deben interpretarse, considerándose ante todo que lo que está reflejado en ellas es el producto de los hechos de todo el pueblo, de todos sus individuos, es decir, de la vida humana. Encierra cada axioma de la Constitución Nacional todo un mundo de fenómenos sociales y, por tanto, no pueden examinarse bajo determinaciones preestablecidas que lleven categóricamente a un sí o a un no: deben reconocerse como actuantes los múltiples y diversos factores que influyen en la aplicación diaria de los preceptos. Así es, pues, como debe procederse, distinguiendo las épocas y según las modificaciones de ambiente y de cultura. La Constitución Nacional tiene pues un contenido elástico, que corresponde a los diferentes cambios de las necesidades y es

susceptible de desenvolver una influencia benéfica aun cuando hayan desaparecido todas las circunstancias que concurrieron a su formación».

Y coincide con estos preceptos sobre la hermenéutica constitucional Hegel, quien expresó que toda constitución sale del espíritu de un pueblo y se desenvuelve idénticamente con él; atraviesa con el pueblo los cambios diversos y los diferentes grados de formación determinados por la necesidad de la Nación. En una palabra, la hermenéutica de nuestra Constitución debe operarse en forma de que paulatinamente el país, que ha ido mutando el federalismo de fronteras por el federalismo racionalizado con situaciones económicas nuevas que reemplacen a las causas político-históricas anteriores, no vea impedido su desarrollo por gravitación de una interpretación retrógrada o atrasada.

Si así no fuera, como ya lo dije antes, nuestro cuerpo legal no hubiera podido perdurar a través de un siglo casi sin modificaciones sustanciales.

Señor presidente: frente a una generación pusilánime, incapaz de realizaciones, que prefirió la inercia antes que someterse al riesgo de la crítica y de la incompreensión de sus contemporáneos, hemos sido promovidos nosotros al gobierno que, con clara visión de futuro, y haciéndonos cargo de nuestra responsabilidad, pero también con desdén de fáciles popularidades, estamos dispuestos a llevar a cabo los planes que nos dicta nuestra conciencia de hombres honrados, puestos los ojos únicamente en lo que estimamos la salvación de la nacionalidad.

Estamos dispuestos a afrontar el riesgo de esa incompreensión, que tiene sin duda sus justificativos. Todos hemos tenido un poco de culpa en ese proceso formativo de la psicosis que hoy padece un sector de la población. Por eso no estamos resentidos por lo que nos dicen. Pero en beneficio de ellos mismos, que son los destinatarios de nuestro accionar, tampoco podríamos dar un solo paso atrás en nuestros planes de recuperación.

Lo que ocurre es que ésta es una obra de gigantes que requiere coraje civil e impulso realizador, pues se trata de recuperar años perdidos en indecisiones y titubeos, para retomar el camino del progreso que nos ponga a tono con el siglo en que vivimos.

Somos hombres comunes pero con pasión revolucionaria.

Se ha hablado de que esto importa un entreguismo al imperialismo extranjero, pero yo respondo a esas palabras de que frente al despilfarro del ahorro nacional que dejó esfumar sin provecho un gobierno imprevisor, ávido de intrascendente popularidad, debemos remediarlo nosotros con la medida positiva de atraer capitales que nos ayuden. He dicho ayuda, señor presidente, es decir, el término de colaboración, no de limosna, como lo dijo muy bien el presi-



dente de la República al regreso de su viaje a Europa.

Nuestro titubeo en estos instantes sería fatal para los intereses nacionales, pues día que pasa el problema se agudiza. Frente a ello, cuando ya se advierten los síntomas promisorios de nuestros cumplidos esquemas, ¿cómo puede hablarse de peligro imperialista? El imperialismo fructifica y prolifera en la miseria y en el atraso, y por eso nosotros le hemos salido al cruce en ese plano inclinado que nos llevaba a la bancarrota, y no cejaremos hasta arbitrar todas las medidas que nos permitan desarrollar nuestros recursos naturales, y con ello retomar el perdido curso de nuestro progreso.

Con estas palabras, señor presidente, he querido aportar mi pequeña contribución a dilucidar este asunto que voto con la absoluta conciencia de hacerlo por el bienestar nacional, sin atarme a esquemas que considero caducos para la nacionalidad. (*¡Muy bien! Aplausos prolongados.*)

**Sr. Lebrero.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

**Sr. Lebrero.** — Han hablado, señor presidente, hombres que representan a provincias del Este, del Oeste y del Norte argentino. Yo lo voy a hacer en nombre de la joven y lejana provincia que represento, que es la más austral de la República.

El tema, desde el punto de vista político, jurídico y constitucional, está prácticamente agotado. Sin embargo, el enfoque que haré será breve, y quizás con él interprete también el pensamiento de mi compañero de representación, el doctor Bartolomé Pérez, que hoy está ausente de este recinto, porque tiene el honor de representar a este alto cuerpo en Méjico.

Voy a hablar en nombre de una provincia que dispone de 44 kilovatios-hora en una época que el género humano ha denominado como la de la era atómica, significando con ello la importancia que la humanidad le da a la energía. Como digo, mi provincia dispone de 44 kilovatios-hora, vale decir, prácticamente todo el pueblo de una provincia está alumbrado en el año 1960 a candil. No por ello mis palabras van a estar animadas por resentimientos ni por rencor hacia gobierno o hacia gobernante alguno. Pero sí digo desde ya que voy a aprovechar esta ocasión en que se debate la ley de energía para decir que el atraso pastoril en que se encuentra mi provincia, como muchas otras, es consecuencia de la mala política energética nacional que hasta ahora hemos debido sorportar y que hoy estamos dispuesto a remover.

Los hombres que han discrepado con nosotros en los planteamientos políticos y que han trazado la línea de la explotación energética en un sentido distinto al nuestro, aquéllos que cuando se firmaron los contratos petroleros nos ca-

lificaron con distintos epítetos, de las cuales el más suave era el de «entreguistas», nuevamente salen a la palestra y nos vuelven a señalar con ese calificativo. Y yo pregunto: ¿quiénes son los entreguistas? Si nosotros, que hemos dado al pueblo argentino la seguridad absoluta de que va a poder seguir trabajando en sus maquinarias aunque conflagraciones mundiales impidan la importación de combustibles; nosotros, que horadando la superficie de la tierra proveemos de mayor cantidad de gas para el bienestar del pueblo argentino, gas que va a ser utilizado en el mes que viene para que se alce la primera gran chimenea industrial en Puerto Deseado, para que ahí se obtenga el caucho sintético, la petroquímica, un pilar fundamental para la economía de la Nación; si nos llaman entreguistas por haber entregado tanto bienestar al pueblo argentino, les aceptamos ese calificativo.

¿Pero, para qué nos vamos a engañar, señores senadores, si todos los que ocupamos bancas en este cuerpo somos hombres políticos y sabemos ver lo que ocurre bajo la superficie? Sabemos que cada vez que el pueblo y el gobierno buscan el camino de la liberación económica nacional, los intereses antinacionales tratan de aplastarlo. Por ello en grandes títulos en un diario vespertino, la semana pasada esos intereses antinacionales expresaban que «la ley de energía no se cumplirá y en su momento será derogada». Yo les pregunto si creen que es tan fácil frenar el impulso de todo un pueblo, si ellos creen que van a poder volver a tapar los pozos de petróleo que le dan al pueblo trabajador argentino la seguridad de que no va a depender de la importación de combustibles del extranjero; si van a tapar los pozos de gas y romper las maquinarias que se van a levantar con motivo de esta ley de energía.

El déficit energético no lo vamos a arreglar con discursos parlamentarios, con disquisiciones teóricas, sino con enfoques técnicos.

A pesar de que se han dado datos estadísticos, yo me voy a permitir resumir algunos que me han llamado la atención. En el momento actual la República Argentina dispone nada más que de 400 kilovatios-hora por habitante. Los kilovatios-hora significan trabajo y energía en términos mecánicos, riqueza en lo económico y bienestar en lo social. Si nosotros comparamos con otros países, vemos que Canadá dispone de casi 3.300 kilovatios-hora por habitante, Estados Unidos de América, de 3.200 y Noruega de 5.500.

Nuestro potencial hidroeléctrico está calculado por los técnicos en 20 millones de kilovatios. ¿Cuánto tenemos en explotación? No alcanza a 300.000 kilovatios.

Dicen los geólogos que vivimos sobre un lago de petróleo. ¿De cuánta energía —equivalente en petróleo— disponemos los argentinos? De 900 kilogramos por habitante, cuando Canadá

tiene 6.000, Estados Unidos 4.300 y Noruega 6.600. Cada día que pasa es mayor el deterioro económico y la herida que se inflige a la economía nacional por causa de este déficit energético y por eso ahora voy a hacer mías las palabras de un alto funcionario de la Secretaría de Energía y Combustibles, que manifestó que «estamos discutiendo el precio de la manguera cuando la casa se nos está quemando».

Hasta ahora, en materia energética nemos vivido, como en muchos otros órdenes, bajo el sistema de prestación integral por parte del Estado, y el resultado lo tenemos a la vista. Por más que inflemos nuestros presupuestos y por más dinero que queramos asignar a Agua y Energía, siempre el suministro de energía está muy por debajo de las necesidades del pueblo argentino. Barrios enteros de la Capital Federal se encuentran a oscuras, hay provincias como la mía, donde la iluminación es a candil, y la industria está semiparalizada, prácticamente asfixiada, imposibilitada de desarrollarse.

El mensaje y proyecto de ley que nos envía el Poder Ejecutivo, y que ha tenido sanción favorable de la Cámara de Diputados, a mi entender divide el problema en dos departamentos estancos, absolutamente separados: en uno coloca la producción, la transformación y la transmisión de la energía, considerándolo como un acto comercial, tal como podría ser la generación, transformación y transmisión de cualquier otro producto bruto; y coloca en otra esfera, bien salvaguardada la soberanía nacional, al dejar la distribución de esa energía eléctrica en manos del Estado.

Como representante de una provincia que ha sido y es celosa custodia del federalismo, también quiero replicar a la crítica que se nos hace de invasión al federalismo, diciéndoles que la creación del Consejo Federal de la Energía, integrado por técnicos que representan a cada uno de los Estados argentinos, sin cuyo dictamen previo nada hará el Ejecutivo, deja también a salvo los intereses de cada una de las provincias.

Señor presidente: por estas razones y por los fundamentos que han dado los oradores que me han precedido en el uso de la palabra, desde ya adelanto mi voto favorable a este proyecto de ley que se debate. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Mansilla.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).** — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Mansilla.** — Seré muy breve, señor presidente.

A pesar de las magistrales exposiciones de los señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra y que se han referido exhaustivamente a los aspectos técnico-jurídicos que avalan la sanción del proyecto de ley nacio-

nal de la energía, venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, algo más tengo que agregar como representante de la provincia de Jujuy, para dejar perfectamente en claro que mi voto afirmativo será la exacta traducción de mi más íntima convicción en favor de esta ley, que hubiera admitido mayor perfectibilidad, pero que la votaré tal como ha venido de la Cámara baja, sin quitarle ni agregarle ni un solo punto ni una sola coma, con plena conciencia y afrontando la responsabilidad histórica de este acto ante el pueblo de la República y ante el pueblo de la provincia de Jujuy.

No puedo echar en la balanza de los valores humanos ni títulos universitarios ni una ilustración extraordinaria, porque he llegado a esta banca luchando desde muy abajo contra la adversidad y contra la pobreza. Pero he traído sobre mis sienes encanecidas toda una vida de trabajo, de lucha, de sacrificios, de una trayectoria limpia y de una conducta insobornable al servicio de la República. Pertenezco a una generación que formó filas en la Unión Cívica Radical en el año 1930, después de la caída de Yrigoyen, cuando nada podía ofrecernos el partido, en la época luctuosa de la otra dictadura y cuando un manto oscuro se alzaba en el horizonte preñado de amenazas para la libertad y para la democracia argentinas. Aceptamos el puesto de lucha, señor presidente. Fuimos una juventud sacrificada y sufrida, pero sin una sola queja arrancamos marchando por el camino del deber y del decoro. Treinta años llevo caminando sin claudicaciones, treinta años, incluso los doce de esta otra dictadura, luchando desde una misma trinchera, con las mismas banderas, con las mismas consignas por la libertad, por la justicia y por el bienestar de la República. Todo esto autoriza al senador que habla para darle pleno sentido de conciencia y responsabilidad al voto afirmativo que, sin ninguna vacilación, sin ninguna reserva mental, acordaré a la ley que estamos considerando.

Bueno es que sepan los francotiradores emboscados en ciertas emisoras y en ciertos diarios, que han llegado a calificar como un acto de traición a la patria la sanción de esta ley, que los hombres que nos sentamos en estas bancas somos fieles depositarios del federalismo argentino y celosos defensores de la legalidad constitucional y que la acusaciones inconsistentes de esta índole no traerán perturbaciones ni en nuestras mentes ni en nuestros espíritus, y no nos apartaremos ni un ápice de nuestra voluntad de construir la gran Argentina que todos soñamos, surcada en todos sus ámbitos por redes nacionales de ferrocarriles, de caminos, de aeronavegación, de tráfico fluvial, de riqueza petrolera, de oleoductos, de gasoductos, de electricidad, de grandes diques y sus obras de irrigación y energía hidroeléctrica, de industrias, de escuelas, de viviendas dignas, de progreso y de felicidad humana.

Sepa también el pueblo de la provincia de Jujuy que mediante esta ley se posibilita la construcción de sus grandes diques, como Santa Rosa, Almona y Capillas, que pueden generar 1.066.000.000 de kilovatios por hora, y regar 117.000 hectáreas de tierras hoy infértiles, que así podrán industrializar sus ingentes riquezas minerales, levantar sus industrias y entrar definitivamente, en una era de constante y positivo progreso que la convertirá en el emporio industrial del norte argentino. Y todo esto no es, precisamente, contrario al principio del federalismo que reza la Constitución Nacional.

Nada más, señor presidente. (*¡Muy bien!*)

**Sr. Racedo.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Racedo.** — Señor presidente: confieso que no estoy preparado para este debate que considero importante, histórico y trascendente. Después de escuchar a los señores senadores por Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, y no sigo enumerando porque todos los representantes de los distritos argentinos han hecho escuchar sus voces esclarecedoras en torno a este tema, como representante del distrito de la Capital Federal me veo obligado a señalar, muy brevemente, mis razones y por qué voto conscientemente la ley de energía que estamos considerando.

Antes de ello quiero decir, como presidente de la Comisión de Defensa Nacional, que estimo esta ley necesaria e imprescindible para la defensa nacional. Recuerdo perfectamente, señor presidente, que había terminado la última guerra y escuché una conferencia del mayor Seversky, que fue el gran teórico de la aviación americana, y dijo algo que entristeció a mi espíritu de argentino. Expresó: He recorrido la República de Norte a Sur, de Este a Oeste, y la República Argentina tiene un papel preponderante en la lucha del futuro, en suministrar las municiones de boca. Es decir, nos relegaba como país pastoril solamente a participar, en una futura contienda, como abastecedores de carne y de trigo. Desgraciadamente, señor presidente, lesionaba nuestro profundo orgullo, profundo y acendrado orgullo nacionalista, como dijera el presidente del Comité Nacional. Nosotros queremos, señor presidente, que frente a un impacto que jamás deseamos, pero que producido entre Oriente y Occidente, la República Argentina ocupe el lugar dentro de las fuerzas armadas de la democracia a que la obligan su historial brillante y glorioso.

Recientemente, acompañado por el señor senador por Buenos Aires, escuché una disertación magistral y maravillosa en el Centro de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas. La disertación estaba a cargo del coronel Martínez, y cuando hablaba de la necesidad de la defensa nacional, de las necesidades de la industrialización del país, decía que no podíamos continuar

construyendo, haciendo y formulando hipótesis si no partíamos de bases ciertas, y una de ellas era, precisamente, la necesidad de electrificar el país, porque como muy bien lo dijera el profesor Weidmann, electrificando al país vamos a dar la fuerza impulsora para que se industrialice, para que marchen sus fábricas y para que mañana toda esa conjunción del esfuerzo del trabajador argentino contribuya a fortalecer y a intensificar la defensa argentina, la defensa nacional.

Y repito, señor presidente: a mí muchas veces se me ha atribuido un espíritu belicista, y ello no es exacto. La República Argentina tiene una tradición pacifista, y lo ha demostrado en la práctica y en los hechos. Ha resuelto mediante el arbitraje y mediante el derecho internacional todos sus conflictos. Pero yo me pregunto, en la misma forma que lo hacía el señor senador por Tucumán: ¿frente a esta hoguera que amenaza al mundo, podremos permanecer indiferentes, podremos ser neutrales? Si estamos seguros de que esas circunstancias no se nos van a presentar, entonces la República Argentina debe prepararse también para lo otro, intensificando todos los elementos que son imprescindibles para la defensa nacional.

Estamos atravesando, señor presidente, un momento nuevo en la vida del mundo. Observo al pasar un enunciado de un diario de esta tarde, en el cual se dice que «hay ansiedad en el mundo». El mundo vive un estado de ansiedad. ¿Por quién es despertado ese estado? Por las fuerzas disociadoras del comunismo. En lo futuro ya no vamos a asistir a las expresiones clásicas de la declaración de guerra, porque la República Argentina y todo Occidente están viviendo un estado de beligerancia permanente por la penetración comunista. Ellos actúan con profundo sentido de lo que están haciendo y proceden siguiendo instrucciones y en cumplimiento de un plan perfectamente determinado y con objetivos precisos. Frente a ello, podemos decir que realmente estamos viviendo un estado de guerra interno, e incluso las mismas leyes que hemos sancionado no tienen otra finalidad que la de defender a la República frente a la permanente exigencia y penetración comunista.

¿Quiénes son los mejores aliados del comunismo? Desgraciadamente debemos reconocer que son los partidos políticos opositores. Aclaro que no formulo cargo a su nacionalismo ni al argentinismo de los partidos, pero sí lo hago en la idea de que por la pasión política, por el espíritu de revancha, se convierten en ciegos instrumentos de los objetivos que ellos mismos desconocen y cuyo realización están favoreciendo.

Pasando a otro aspecto, vuelvo a repetirlo, diré que esta noche se ha hablado mucho, pero no lo bastante como para esclarecer debidamente este problema.

Ya bien ha dicho el profesor Weidmann que este tema parece tabú en la vida argentina. Como

representante de la Capital Federal, he de decir a mis colegas, representantes a su vez de los Estados provinciales, que sí, es tabú este problema. Desde que surgió en el panorama nacional es tabú en la vida política argentina, es decir, tiene esa condición desde el año 1936, época en que se prorrogaron las concesiones de la CADE. Faltaba un año para que terminara la concesión y, con conocimiento de causa, el senador que habla suscribió, juntamente con el doctor Arturo Frondizi, la moción de expulsión de los concejales de la CHADE, que así se denominó a aquellos concejales que anticiparon su reunión de tablas porque sabían que la convención metropolitana iba a dar las instrucciones en distinto sentido para que se opusieran a la prórroga.

Hoy podrán preguntarnos por qué nos oponíamos a la prórroga. Nos oponíamos porque había dinero negro que estaba manchando las conciencias de los representantes de un partido político. Esa también es una de las etapas de la gran discrepancia que tenemos con los hermanos comunes, con los hermanos de lucha, completamente consustanciados en toda una vida, de reclamar permanentemente el restablecimiento democrático en el país. Y hace también a mi sinceridad, decir que, ninguno de los hombres que están sentados en estas bancas, ninguno de los concejales que están en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, a ninguno les llega el pecado, y nadie ha osado decir que en esta ley haya corrido el menor elemento corruptor. Se podrá criticar, se podrán dar distintas razones de hombres que están aferrados a viejas estructuras, como muy bien dijo el senador Cañeque. Tenemos un objetivo que realizar, la grandeza de la patria, y posibilitar el cumplimiento de un plan económico de desarrollo.

Por eso, señor presidente, se habla mucho de estas cosas; se habla mucho y en este país pareciera que todavía las cosas estuvieran en borrador. Yo recuerdo perfectamente, y la sanción que vamos a dar a la ley esta noche no la contradice en absoluto, la más prístina tradición partidaria, sin dejar de reconocer que es necesario un profundo convencimiento dentro de mi partido, de que hay que actualizar nuestra plataforma partidaria, en la misma forma que en Inglaterra, los laboristas estatistas, también han reconocido últimamente la necesidad de actualizar su plataforma y sus medios de acción política.

Por eso, frente a estas cosas, recuerdo con veneración algo que en mi vida política ha servido como catecismo, y es el discurso pronunciado por Honorio Pueyrredón en la Convención Nacional del año 1939. Dije que para mí era un catecismo. Por eso, en la misma forma en que conozco el catecismo de mi religión católica, también conozco ese catecismo político, y recuerdo que Honorio Pueyrredón decía repitiendo las palabras de Hipólito Yrigoyen, aquel hombre a quien todos reverenciamos y hoy reverencian todos los hombres en la Argentina, sin distinción

de partidos políticos, en esa definición que hizo de capitalismo e imperialismo, conceptos que se confunden: capitalismo es crear las condiciones que un país necesita para su desarrollo. El capitalismo internacional es como esos ríos que corren por los planos inclinados más favorables y cuando son desfavorables se retiran, emigran y se van, pero dejan la tierra fertilizada, dejan las posibilidades creadoras de todo curso que va creando riquezas. Y así como el radicalismo no es anticapitalista, en la misma forma y con el mismo orgullo, proclamamos que el radicalismo es eminentemente antiimperialista. El antiimperialismo es la función política del capital que nosotros no aceptamos y rechazamos con toda dignidad y valentía y con todas las fuerzas de nuestra razón.

Señor presidente, quiero cumplir con la brevedad anunciada al comienzo de mi exposición. Creo que en torno a esto no puede haber ninguna duda. El señor senador Weidmann con la erudición que lo caracteriza, ha demostrado que todos aquellos agoreros que mencionó, han tomado argumentos de biblioteca; los han desvirtuado totalmente, pero sí creo que en torno a esto hay un problema, un crudo problema de baja política. Y es necesario que los argentinos nos pongamos de una vez de acuerdo sobre lo que necesita el país, sobre lo que favorece su desarrollo y engrandecimiento, y dejemos los planteos políticos donde se puede hacer política. Más aún, creo que todo el Parlamento debe estar muy contento, debe sentirse muy feliz. No se va a crear ninguna situación de sospecha de su honestidad, de su moral y de su ética. La responsabilidad que el Parlamento argentino delega en el Poder Ejecutivo se hace sin que perdamos nuestra autoridad para criticar, derogar y censurar.

Señor presidente: voto completamente tranquilo, con felicidad y con el convencimiento de que con esta ley estamos dando al Poder Ejecutivo nacional las armas necesarias para lograr el objetivo fundamental de nuestro partido, que es la felicidad del hombre argentino y el engrandecimiento nacional. (Aplausos.)

**Sr. Rica.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).** — Tiene la palabra el señor senador por Chubut.

**Sr. Rica.** — Señor presidente: con emoción de argentino, he tenido el placer y la satisfacción de escuchar a mis distinguidos colegas en el esclarecimiento total y definitivo de la ley de energía que el Honorable Senado considera en estos momentos. Creo que están de más las palabras que podrían significar una redundancia, ya que los distinguidos colegas —y en especial el señor senador Weidmann— se han expresado con mucha claridad de concepto. Por eso, señor presidente, me asocio para votar decididamente esta ley.

En la provincia que represento se está construyendo un dique, el Florentino Ameghino, y dentro de poco tiempo más tal vez tengamos la suerte de verlo terminado, ya que esta ley

va a permitir la terminación de esa obra que va a estimular en aquella región de la Patagonia, en Chubut, mi provincia, el progreso en todo orden de cosas, para las industrias ya instaladas y las que se instalen en el futuro.

No me sorprenden ni temo las publicaciones antojadizas de algunos periódicos o diarios que son adversarios de la Unión Cívica Radical Intransigente, los que en sus editoriales afirman que si votamos esta ley entregamos el patrimonio nacional al extranjero. Yo les contesto desde esta banca que ningún senador nacional perteneciente a la Unión Cívica Radical Intransigente ha de entregar por una ley el patrimonio de la grandeza nacional al capital extranjero. Antes renunciaríamos cien veces a las bancas que ocupamos.

Yo les digo a esos señores que con tan temeraria acusación nos sindicán a nosotros, que ellos, los que nos critican y dicen todo eso, fueron los mismos que el 6 de septiembre de 1930 echaron por tierra al gobierno responsable y representativo de la Unión Cívica Radical y entregaron el oro negro del petróleo al capital extranjero. Esos que nos tildan a nosotros de esa manera son los mismos que bajo la presidencia del general Justo, cuando se discutió en este honorable recinto la ley de carnes, hicieron entrar a un irresponsable para que por la espalda diera muerte a un senador de la Nación. Pero los gobiernos radicales pueden estar bien tranquilos que esos graves hechos no han de volver a ocurrir; pero también quiero que el pueblo argentino sepa que en estas bancas del Senado de la Nación se encuentran sus representantes y que ésta es la casa de los argentinos, que ha dejado de ser de las castas privilegiadas para ser la casa y la puerta ancha por donde pueden entrar todos los argentinos bien nacidos para escuchar las deliberaciones de la Cámara baja o de la Cámara alta.

Por eso no quiero entrar en otras consideraciones que no vienen al caso. Quiero, simplemente, decir que tanto el que habla como mi colega de representación, el señor senador Ciarlotti, vamos en esta noche de fiesta nacional —porque le damos al Poder Ejecutivo y al gobierno un arma de progreso para que lo intensifique en toda la extensión del territorio argentino— a apoyar y a votar sin titubeos, sin ningún reparo y sin ningún miedo, esta ley de energía que es para la felicidad del pueblo argentino. Nada más. (*Aplausos.*)

**Sr. Rocha Errecart.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Rocha Errecart.** — Señor presidente: nuestro bloque ha resuelto votar el proyecto de ley de Diputados tal cual viene, sin introducirle absolutamente ninguna modificación. Y deseo explicar por qué lo hacemos así.

Si la oposición hubiera cumplido con su deber de realizar su función de control y de ayudar a la confección de una ley que pueda quizás ser más perfecta, si supiéramos que existe en ella ese espíritu constructivo para la República, si no se hubiera roto este diálogo que debe existir entre los distintos partidos políticos en bien del país, en este momento no nos veríamos frente a un tremendo dilema, que consiste en darle al país, de una vez por todas, la ley de energía que entendemos es indispensable para poder realizar el plan de desarrollo en que estamos embarcados, o no darle ningún tipo de ley.

Y en ese dilema no podía ser otra nuestra posición que la de darle esta ley, que hemos discutido ampliamente, que no pretendemos que sea perfecta, que es perfectible, como toda obra humana, y que tampoco creemos que marque una conducta definitiva y permanente para nuestro partido. Entendemos que es la ley necesaria en este momento en la República en las circunstancias que estamos viviendo.

Nuestro bloque estudió concienzudamente la ley, y prueba de ello son las enjundiosas exposiciones que los señores senadores han hecho, analizando sus distintos artículos, en donde, a mi juicio, han quedado destruidas en forma definitiva todas las objeciones fundamentales que se le han formulado.

Pero hay algo más: nosotros votaremos esta ley con la conciencia tranquila de que estamos cumpliendo el deber de la hora, porque habiendo lanzado al país en un plan de desarrollo para el que es indispensable contar con este instrumento jurídico, nosotros, paralelamente, hemos sometido a nuestro pueblo, sobre todo a los sectores de más bajos ingresos, a ingentes sacrificios. Lo sabemos y lo reconocemos: y agradecemos la colaboración que ese pueblo callado y sufriente está realizando en beneficio de la República.

Queremos que ese sacrificio cese cuanto antes: entendemos que toda dilación es traición a ese pueblo al que tenemos que sacar rápidamente de la situación de privaciones en que en este momento está sumergido. Por eso pensamos que esta ley creará riqueza, bienestar, alegría, que era un imperativo, y que no darla implicaba, repito, una traición a ese mismo pueblo, y nosotros desde ahora contraemos el compromiso de que serán premiados esos sacrificios que hace el pueblo. Por eso no hemos de consentir en manera alguna que esa nueva riqueza que se cree pueda ser en beneficio de sectores determinados; hemos de contribuir con nuestra presencia en la acción política a que esa riqueza se reparta en forma equitativa entre todos los sectores de la población, sobre todo teniendo en cuenta a aquellos que más han contribuido a la realización de este plan de desarrollo.

Nosotros, señor presidente, afrontamos la crítica que desde ya descontamos, pero tenemos la seguridad de que el juicio imparcial de las generaciones futuras será de comprensión y que sabrán valorar nuestro esfuerzo, y ésa será nuestra justificación histórica. Carguen nuestros detractores con la parte condenatoria de sus conductas que ese mismo juicio histórico ha de darles.

Con este sentido, señor presidente, es que nuestro bloque votará afirmativamente el proyecto venido de la Honorable Cámara de Diputados. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Guido).** — Si ningún señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general, dándose previamente cumplimiento al artículo 150 del reglamento.

—Se llama para votar.

—Luego de unos instantes dice el

**Sr. Presidente (Guido).** — Se va a votar en general.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Guido).** — Ha resultado afirmativa por el voto de los 40 señores senadores presentes en el recinto. (*Aplausos.*)

En consideración en particular. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

**Sr. Rocha Errecart.** — Señor presidente: como el proyecto está en todas las bancas y ha sido objeto de una prolija lectura por parte de todos los señores senadores, solicito que simplemente se enuncien los artículos.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Guido).** — Habiendo asentimiento, así se procederá.

—Sin observación, se enuncian y aprueban los artículos 1º a 9º inclusive.

—Se enuncia el artículo 10 y dice el

**Sr. Jaritonsky.** — Pido que por Secretaría se dé lectura al artículo 10.

**Sr. Prosecretario (Rodríguez).** — (*Leyendo*):

«Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes de cualquier naturaleza, obras, instalaciones, construcciones y sistemas de explotación, de cuyo dominio fuera indispensable disponer para el cumplimiento de los fines de esta ley, y especialmente para el regular desarrollo o funcionamiento de la red nacional de interconexión y/o los restantes sistemas eléctricos nacionales.

»El Poder Ejecutivo hará uso de esta declaración genérica designando a quién tendrá facultad en cada caso para promover los procedimientos judiciales de expropiación.»

**Sr. Jaritonsky.** — Señor presidente: he recorrido en estos últimos días mi provincia y he

recibido la inquietud de varias cooperativas de usuarios. Quisiera hacer la consulta al miembro informante sobre esta inquietud que me han hecho llegar las cooperativas de usuarios del interior: en qué situación quedarían con respecto a este artículo que se acaba de leer.

**Sr. Cañeque.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).** — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Cañeque.** — El artículo 11 *in fine* expresa categóricamente lo siguiente: «En cuanto a los sistemas eléctricos provinciales, referidos en el artículo 35, inciso b) de esta ley, como también a los servicios públicos definidos en el primer párrafo del artículo 3º de la misma, que fueran de jurisdicción local, serán los gobiernos provinciales los que resolverán en todo lo referente al otorgamiento de las autorizaciones y concesiones y ejercerán las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional.»

Es decir que las cooperativas son de jurisdicción local, provincial o comunal, según corresponda, siempre que no integren un servicio o una red nacional de interconexión. No se puede dar el caso, por otra parte, de que las cooperativas integren dicha red porque son de reducida potencia y están circunscritas a zonas o áreas delimitadas dentro de la provincia. De manera que no se podrá dar el caso de ninguna cooperativa que integre el sistema; por el contrario, podrá en el futuro ser compradora de energía y proceder a su distribución de acuerdo con la organización respectiva.

**Sr. García.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).** — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

**Sr. García.** — Podría agregarse además que el artículo 21, segundo párrafo, se refiere particularmente a la situación de las entidades cooperativas en el tratamiento preferencial que tienen, lo que se acentúa en los artículos 33 y 34, a tal punto que establecen que el Fondo Nacional de la Energía y el otro que del mismo se separa —que es el Fondo de Electrificación Rural— darán un trato preferencial para los préstamos y para los plazos de amortización para las cooperativas que establezcan usinas.

Con esto se demuestra una insidia más que se lanzó a la opinión pública para prevenirla contra el proyecto de ley, afirmándose que las cooperativas serían arrasadas por sus disposiciones y que la jurisdicción nacional las entregaría íntegramente a los grandes sistemas interconectores, cuando en rigor de verdad la ley está previendo perfectamente el caso de las cooperativas.

**Sr. Jaritonsky.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).** — Tiene la palabra el señor senador por Neuquén.

**Sr. Jaritonsky.** — Con las explicaciones bien caracterizadas de mis distinguidos colegas con-

sidero que la inquietud de las cooperativas del interior —y especialmente de mi provincia— queda completamente aclarada.

**Sr. Presidente (Guido).** — Se va a votar el artículo 10.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se enuncian y aprueban los artículos 11 a 24.

—Al enunciarse el artículo 25, dice el

**Sr. García.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).** — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

**Sr. García.** — Deseo destacar ante los señores senadores un aspecto en el que no hemos insistido por considerarlo sobreentendido; pero conviene que quede claramente establecido que este artículo se refiere a la constitución del Consejo Federal de la Energía, el que debe estar integrado por tres funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, por veintitrés representantes de las provincias y, según se establece en el último apartado, el Poder Legislativo nacional podrá designar de entre sus miembros tres por la Cámara de Senadores y tres por la Cámara de Diputados, que podrán participar en las reuniones del consejo.

Es decir, señor presidente, que el Congreso está permanentemente representado; vigilando y observando todo el proceso de planificación y ejecución, porque, como más adelante se señala, el Consejo Federal de la Energía tiene facultades no sólo de dar su opinión final cuando se va a efectuar una contratación, sino de participar en todo el proceso como asesor y consultor del Poder Ejecutivo y, más aún, es el encargado de proyectar la reglamentación de esta ley.

Esta es una circunstancia que conviene añadir a las que se han destacado en este debate: el Poder Legislativo estará permanentemente representado. Ahora bien, la redacción final dice «podrá designar» porque no puede imponerse a una Cámara que designe representante si no desea hacerlo, pero lo natural es, dada la inquietud y composición de ambas Cámaras del Congreso, que estén nuestros mejores hombres, con más disposición de tiempo y preparación para ello, integrando permanentemente el Consejo Federal de la Energía.

**Sr. Presidente (Guido).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 25.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se enuncian y aprueban los artículos 26 a 50.

**Sr. Presidente (Guido).** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se hará la comunicación pertinente al Poder Ejecutivo.

Corresponde considerar la moción de inserción formulada por el señor senador por Santa Fe. Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Guido).** — Se hará la inserción solicitada (1).

## 8

### FONDOS COMUNES DE INVERSION

**Sr. Presidente (Guido).** — Corresponde considerar el despacho de las comisiones de Economía y Legislación General en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre fondos comunes de inversión. Por Secretaría se va a dar lectura.

**Sr. Prosecretario (Rodríguez).** — (*Leyendo*):

#### Despacho de comisión

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Legislación General y de Economía han considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sobre «Fondos Comunes de Inversión», y, por las razones que darán sus miembros informantes, os aconseja su aprobación con las siguientes modificaciones:

Artículo 4º — Sustitúyese al inciso a) por el siguiente: a) la dirección y administración de Fondos Comunes de Inversión estará a cargo de una sociedad anónima especialmente constituida y habilitada para esta gestión, que actuará con la designación de «sociedad gerente»;

Artículo 5º — Sustitúyese la primera parte por la siguiente: Artículo 5º — Los bienes integrantes de un fondo común de inversión se depositarán en uno o más bancos autorizados, con domicilio en el país que actuarán con la designación de «depositario».

Artículo 8º — Sustitúyese el inciso a) por el siguiente: a) El reglamento de gestión que se celebrará por escritura pública antes del funcionamiento del fondo de inversión entre la sociedad gestora y el «depositario», establecerá las normas contractuales que regirán las relaciones entre los nombrados y los copropietarios indivisos. Dicho reglamento deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio.

Artículo 18. — Sustitúyese por el siguiente: La Inspección General de Justicia de la Nación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 93 de la ley 11.672 (T. O. 1942), tendrá a su cargo la fiscalización y registro de los Fondos Comunes de Inversión, sin perjuicio de las funciones específicas que

(1) Véase la inserción en el Apéndice.



el Boletín Oficial, órgano oficial de la Bolsa de Comercio o un órgano de conocida difusión correspondiente a la sede del fondo común; c) La publicidad y anuncios que practiquen los fondos con carácter de propaganda, deberán ajustarse a normas de seriedad, no pudiendo contener afirmaciones o promesas engañosas, y en ningún caso podrán asegurar ni garantizar los resultados de la inversión. El organismo a que se refiere el artículo 18 de la presente ley, tendrá atribuciones para intervenir al respecto.

Art. 21.—a) Ambos órganos activos del fondo común podrán rescindir, total o parcialmente, el reglamento de gestión mediante el preaviso que al efecto se determine en el mismo; b) La rescisión podrá evitarse, si se celebra un nuevo convenio que reemplace al rescindido. Cualquier reforma o modificación de que se haga objeto al reglamento de gestión deberá formalizarse e inscribirse con las mismas solemnidades prescritas para su celebración.

Art. 22.—No podrán integrar los directorios de los órganos activos del fondo, las personas sometidas a interdicción judicial, los quebrados o concursados no rehabilitados, menores o incapacitados, condenados a penas que lleven la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, o por delitos infamantes, y quienes no pueden ejercer el comercio.

Art. 23.—Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán reprimidas cada una con penalidades consistentes en el pago por vía de apremio de pesos diez mil (\$ 10.000) como mínimo a pesos cinco millones (\$ 5.000.000) como máximo, aplicables por los jueces en lo penal económico en la Capital Federal y jueces federales de primera instancia en las provincias, sin perjuicio de la facultad de ordenar el inmediato cese, temporal o definitivo, de las actividades de las entidades infractoras. El procedimiento podrá ser promovido de oficio, por las autoridades de las bolsas de comercio, o personas que demuestren un interés legítimo.

Art. 24.—Los fondos comunes existentes con anterioridad a la sanción de esta ley, deberán ajustar sus disposiciones a las establecidas por la misma, dentro del perentorio término de ciento ochenta días de su promulgación.

Art. 25.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

4

#### **Incorporación a la Aeronáutica con el grado de vicecomodoro del ciudadano Eduardo Alfredo Olivero**

—El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la página 1261.

## II

### **INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR WEIDMANN**

#### **Cuarta conferencia nacional de abogados**

*Organizada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados reunida en Tucumán, en julio 13-18 de 1936*

Delegados y miembros de la cuarta conferencia nacional de abogados: Albarracín Godoy, Jorge; Alsina, Hugo; Alvarado, Juan Luis; Alvarez Hayes, Justo; Alvo, Sebastián E.; Anastasi, Leonidas; Andradá e Silva, José Bonifacio de; Andreozzi, Manuel; Antelo, Mario; Antille, Armando G.; Antoni, José B.; Antoniz, Norberto; Aráoz, José Ignacio; Aráoz, Miguel A.; Arnedo, Rodolfo; Avellaneda, Nicolás A.; Baciagalup Vértiz, J. Tulio; Bagur, Raúl E.; Balbi, José A.; Barrenechea, Pablo; Barrera, Carlos A.; Bartoloni Ferro, Abraham; Basabe, Estela M.; Basaldúa, Dalmiro J.; Basaños Zavalla, Carlos; Bayer, Sixto; Berho, Roberto M.; Bielsa, Rafael; Black, Ernesto N.; Borrás, Modesto J.; Bossi, Luis N.; Braun Méndez, Armando; Bulacio Núñez, Antonio; Busso, Eduardo B.; Cacace, Agustín; Calderón, Osvaldo M.; Canal Feijóo, Bernardo; Cano, Guillermo (h.); Cansino, Manuel L.; Carranza, Clodomiro E.; Caseaux, Pedro N.; Castiglione, Antonio; Cervini, Francisco; Christensen, Emilio A.; Colombres, Adolfo E.; Colombres Ugarte, Dardo; Cornejo, Benjamín; Correa Luna, Horacio; Corti Videla, Alberto; Cossio, Alberto; Cossio, Benjamín; Cullen, Tomás R.; Daguerre, Juan M.; Danuzzo Amadey, Juan P.; Dávalos Michel, Benjamín; Day, Alberto A.; de la Fuente, Pedro G.; de la Vega, Alfonso M.; de la Vega, Arturo; de la Vega, Carlos Alberto; della Croce, Alfredo; Depetris, Juan B.; Desmarás, Carlos R.; Díaz Cisneros, César; Díaz Cisneros, Juan Carlos; Díaz de Vivar, Miguel A.; Díaz, Miguel P.; Di Lullo, Carlos A.; Doncel, Salvador A.; Elena, Walter; Elizalde, Enrique; Escobar, Manuel F.; Fels, Ricardo; Fernández, Julio A.; Ferrer, Manuel Augusto; Figueroa, Adolfo; Figueroa, Angel María;

Filloy, Juan; Fiorini, Bartolomé A.; Forgás Fornés, Joaquín; Forté, Elías; Frías, Carlos A.; Frías, Jorge H.; Frías Silva, Eduardo; Frugoni, Adolfo; Funes, Luis; Galindo Borda, Ernesto; Galli, Enrique V.; Garasino, Manuel A.; Garbarini Islas, Guillermo; García, Eduardo A.; García Zavallia, Rafael; Gil, Enrique; Giménez Bustamante, Enrique; González, Miguel Angel; Goulú, Jorge Eduardo; Goytia, Víctor Daniel; Greco, Víctor H.; Guastavino, Elías F.; Guinazú, Carlos A.; Gutiérrez, Celedonio; Gutiérrez, Ernesto C.; Heller, Juan; Herrera, Estanislao H.; Herrera, Santiago Dardo; Heyde Garrigós, Alejandro von der; Jorba, Octavio R.; Lafaille, Héctor; Landa, Augusto; Landman, José; Larguía, Mario; Larreguy, José Leal, José L.; Legón, Faustino J.; Lizondo Borda, Manuel; Lobos, Roberto N.; López, Agustín (h.); López Zavaleta, Javier, Lo Valvo, José; Loza, Juan Carlos; Lozano Muñoz, José; Lugones, Lorenzo A.; May José C.; Marsán, Horacio F.; Martín, Angel S.; Martínez, Hilario; Martínez Zavallia, Eduardo; Mathus Hoyos, Alejandro; Maurice Echagüe, Jorge; Meana Colodrero, Diego; Medina, David León; Méndez, Miguel G.; Mendoza Paz, Rodolfo; Mendoza Padilla, Luis; Miguens, José C.; Molina Carranza, Lisardo; Montoro, Vicente; Mosset Iturraspe, Mario; Moyano, Federico J.; Moyano, Juan Agustín; Moyano, Luis A.; Noé, Julio; Novoa, Manuel; O'Donnell, Ramón F.; Ojea, Julio O.; Ordóñez, Blas D.; Orgaz, Alfredo; Pagliaro García, Domingo; Paz, Mariano R.; Pazzi, Serafin; Palento, Pedro B.; Peña, Eliseo; Peña Guzmán, Gerardo; Piossek, Adolfo; Pocard, Alfonso E.; Ponc, Carlos J.; Pondal, Roque V.; Ponz, Manuel Alberto; Posse, Mario R.; Poviña, Alfredo; Poviña, Horacio L.; Premoli, Luis A.; Quinteros Luques, José; Ramayón, Antonio E.; Remedi, Juan F.; Reviriego, Emilio; Ríos, Belisario; Ríos, Eduardo C.; Rodríguez del Busto, Nicanor; Rodríguez, Julio C.; Rodríguez Saráchaga, Oscar; Román, Ernesto J.; Romay, Fran-

cisco A.; Roncoroni, Atilio; Ruiz López, Demóstenes; Ruiz Moreno, Isidoro; Salgado, Eduardo J.; Sánchez Ceschi, Eduardo A.; Sánchez Espiridión; Sangiacomo, Juan V.; Santillán, Carlos María; Santillán, José Raúl; Saravia Castro, David; Sayago, Manuel A.; Seghizzi, Emiro A.; Serres, José R.; Silgueira, J. Honorio; Soria, Raúl A.; Sosa, Ismael; Sourrouille, Ernesto; Spota, Alberto G.; Spota, Víctor; Suárez Anzorena, Carlos; Terán, Juan (h.); Terán, Sixto (h.); Tissembaum, Mariano R.; Toledo Pimentel, Juan; Ugalde Touza, Benjamín E.; Undiano, Roberto; Usandivaras, Juan Carlos; Usandivaras, Raúl; Vallejo, Leopoldo; Vampa, Alfredo; Vázquez, Ramón F.; Vera, Cruz; Vilgré Lamadrid, Juan; Villegas, A. Walter; Villegas Basavilbaso, Benjamín; Yadarola, Mauricio L.; Yussem, Hortensia; Zaefferer Silva, Oscar; Zavalía, Joaquín de.

### Tercera sesión ordinaria

15 de julio de 1936

(Presidencia de los doctores Miguel P. Díaz y Honorio Silgueira)

### SUMARIO

- 1.— Se considera y aprueba el despacho de la comisión encargada del estudio del tema «Régimen de concesiones de servicios públicos». Orden del día número 2.
- 2.— Asuntos entrados.

### 1

### REGIMEN DE CONCESIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

*Sr. Presidente (Díaz).*— Queda abierta la tercera sesión ordinaria de la Cuarta Conferencia Nacional de Abogados.

La presidencia estima conveniente advertir a los señores delegados que procuraremos ajustar nuestras deliberaciones estrictamente, en cuanto sea posible, al reglamento que nos rige, y, subsidiariamente, al de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*) De manera que tendrá, en primer término, el uso de la palabra el miembro informante de la comisión respectiva, y será concedida luego a los miembros informantes de los despachos en disidencia, en el caso de que los hubiere.

Se va a dar lectura del despacho número 2: «Régimen de concesiones de servicios públicos».

—Se lee:

Buenos Aires, 10 de junio de 1936.

*Señor presidente de la Comisión Organizadora de la Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, doctor J. Honorio Silgueira.*

S/D.

La comisión encargada del estudio del tema: «Régimen jurídico de la concesión de servicios públicos», ha producido despacho; y, por las razones que se darán en la exposición de motivos, aconseja a la Cuarta Conferencia la aprobación del siguiente proyecto.

### SUMARIO

#### CAPÍTULOS

- I.—Definición.
- II.—Naturaleza jurídica.
- III.—Caracteres jurídicos.
- IV.—Competencia y formas.
- V.—Régimen jurídico.
- VI.—Poder de policía.
- VII.—Continuidad.
- VIII.—Ejecución directa.
- IX.—Tarifas.
- X.—Efectos jurídicos.
  - I) Derechos del concesionario.
  - II) Obligaciones del concesionario.
  - III) Relaciones del concesionario y de los usuarios.
  - IV) Relaciones del concesionario y de la administración pública.
- XI.—Extinción.
  - I) Rescisión.
  - II) Caducidad.
  - III) Quiebra.
- XII.—Jurisdicción.
  - I) Tribunales contencioso-administrativos.
  - II) Juicio arbitral.

#### CAPÍTULO I

##### Definición

La concesión es un acto jurídico del derecho público, por el cual el concedente delega en el cesionario un poder jurídico sobre una manifestación de la actividad administrativa, con el fin de que realice, por propia cuenta y riesgo, bajo el contralor del concedente, el servicio público concedido.

#### CAPÍTULO II

##### Naturaleza jurídica

1º — La concesión no es un contrato de derecho privado sino un contrato de derecho administrativo, acto jurídico complejo, creador de dos situaciones jurídicas distintas: una legal o reglamentaria y otra contractual de derecho administrativo. Es un acto de imperio y de gestión.

2º — La delegación no implica para el poder concedente renuncia de sus facultades; sólo atribuye al concesionario las indispensables para la realización del servicio en la forma y modo establecidos o que establezca el poder concedente.

3º — El poder concedente se reserva sus poderes de intervención, contralor y dirección.

4º — El poder concedente atribuye al concesionario un derecho personal, siempre temporal.

5º — El poder concedente mantiene el poder de prestar el servicio.

6º — El servicio concedido continúa en todo momento siendo servicio público.

7º — La concesión se hace en el interés público, estipulándose condiciones que el concesionario no puede modificar.

8º — El poder concedente tiene facultad para:

- a) Modificar el funcionamiento del servicio concedido;
- b) Imponer penalidades correctivas al concesionario: multas, suspensiones en la explotación y la caducidad;

c) Proceder a la ejecución directa del servicio, disponiendo temporariamente del uso y modo de empleo de los medios de explotación, en los casos en que el concesionario no preste el servicio.

9º—La situación legal o reglamentaria tiene por exclusivo objeto regular el servicio —fin de la concesión— en la misma forma que lo haría el Estado por gestión directa.

10.—La situación legal o reglamentaria que crea y organiza un servicio público, se concreta en una ley en sentido material y es modificable toda vez que lo exija el servicio público.

11.—La situación contractual regula la retribución económica del concesionario, dentro de límites prefijados y bases determinadas que aseguren el juego de un mecanismo compensador. Su contenido es de naturaleza económico-financiera.

12.—La situación jurídica individual —contractual— de la concesión que constituye su base económico-financiera, no es modificable por medidas especiales para la concesión y en el caso que lo fuera por actos del poder concedente, originaría para el concesionario el derecho a una indemnización, a fin de restablecer el equilibrio de la ecuación financiera.

13.—El aspecto contractual de la concesión es de derecho público y no de derecho privado, y su interpretación como contrato tiene carácter restrictivo. Las reglas y preceptos del derecho civil o comercial, son extraños a su regulación jurídico-legal; sólo en subsidio pueden serle de aplicación.

14.—La situación legal o reglamentaria obedece principalmente a los principios siguientes:

- a) El servicio público concedido debe funcionar de una manera regular y continua; no debe sufrir más interrupciones que las que pudiera tener si fuera realizado directamente por la administración pública.
- b) El servicio público debe ser mejorado por nuevas reglamentaciones, como si lo realizara directamente la administración pública.

15.—La concesión es un medio transitorio de realización de un servicio público propiamente dicho, no es simple empresa privada de las que autoriza y vigila la administración (servicios públicos impropios, v. gr.: coches de alquiler, farmacias, etcétera).

16.—La concesión no determina de una manera inmutable, *ne varietur*, las cargas asumidas por el concesionario, sin perjuicio en su caso, de una indemnización equitativa.

17.—La garantía constitucional del derecho de propiedad no impide ni traba la actividad del poder concedente, sino que se refiere y se limita a la protección de la base económico-financiera de la concesión, cuando ésta se altera por actos especiales del concedente, en cuyo caso procede la indemnización correspondiente por aplicación del principio constitucional de la expropiación.

### CAPÍTULO III

#### Caracteres jurídicos

1º—El contrato de concesión tiene los siguientes caracteres jurídicos: de buena fe, sinalagmático, conmutativo, *intuitu personae*.

### CAPÍTULO IV

#### Competencia y formas

1º—El concedente es siempre el Estado (administración pública, en sentido lato: Nación, provincia, comuna), excepcionalmente una entidad autárquica institucional.

2º—La competencia del poder concedente está determinada por la jurisdicción, la que a su vez está demarcada por normas constitucionales expresas o virtuales.

3º—Es nula la delegación directa o indirecta que el concedente haga de sus facultades como tal, especialmente las de contralor del servicio, la de no declarar la caducidad en casos de incumplimiento de la obligación de prestar el servicio, la de percibir tasas no autorizadas, la de someter a arbitrajes, la determinación de la clase u objeto del servicio público, la de no rever tarifas y la de preferencia en los nuevos períodos de explotación.

4º—Los interventores en provincias y los interventores o comisionados comunales no pueden otorgar concesiones ni prorrogar los plazos convenidos, ni autorizar modificaciones sustanciales del servicio, ni aprobar o autorizar aumento de tarifa, ni reducir o limitar los procedimientos de contralor administrativo o financiero que se ejerce sobre los concesionarios; vencido el término de la concesión durante su mandato, podrán autorizar el funcionamiento de la misma, según el régimen en vigor, hasta la constitución de las autoridades provinciales o comunales, según corresponda.

Tampoco podrán renunciar a los recursos de nulidad o apelación ni consentir sentencia dictada contra la administración pública ni nombrar árbitros en ningún caso. Las transacciones, los compromisos arbitrales y las renunciaciones a los recursos de apelación o nulidad o consentimiento de sentencia dictada en juicio entre la administración pública y los concesionarios, serán objeto de decisión expresa de los consejos deliberantes o autoridades normales, en las cuales resida el poder de decisión. La publicación de estos actos y de las sentencias especialmente arbitrales, deberá hacerse por la prensa.

5º—Los contratos de concesión tienen forma solemne y escrita. Deben formalizarse por escritura pública que contenga transcripción de todos los documentos habilitantes: autorización superior, decisión, etcétera.

6º—Los libros de concesionarios deben ser rubricados e inspeccionados por la administración pública, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio, etcétera.

Las autoridades administrativas al hacerse cargo de sus funciones levantarán acta haciendo en ella relación circunstanciada de los expedientes administrativos concernientes a las concesiones y de los expedientes relativos a juicios, de cualquier clase, promovidos por o contra de los concesionarios, expresándose el estado de ellos.

### CAPÍTULO V

#### Régimen jurídico

1º—Las relaciones del concesionario con el poder concedente son de derecho público y de derecho privado.

Son de derecho público:

- a) El derecho que se confiere al concesionario para expropiar en la forma que determinan las leyes generales y especiales;

- b) Los privilegios que se reconocen al concesionario, por créditos originados en la prestación del servicio;
- c) El derecho de servidumbre y de imponer restricciones al dominio, en el interés público;
- d) La protección y amparo del poder concedente, para el regular y continuo funcionamiento del servicio.

Son de derecho privado:

Las relaciones que se originan en la gestión patrimonial o económica puramente privada.

## CAPÍTULO VI

### *Poder de policía*

1º — El poder de policía de servicios públicos no se limita al contrato del servicio; su ejercicio se extiende hasta la modificación de la concesión cuando el interés colectivo lo exija, bajo las justas indemnizaciones o bonificaciones equitativas, en los casos en que la ecuación económico-financiera de la concesión haya sido alterada en manera extraordinaria. No darán lugar a indemnizaciones al concesionario las modificaciones impuestas por disposiciones de policía general (de seguridad, higiene, etcétera), o de policía especial del servicio, ni las contribuciones fiscales generales, como el impuesto a los réditos, a las transacciones y las tasas de policía.

## CAPÍTULO VII

### *Continuidad*

1º — El funcionamiento y prestación del servicio no puede suspenderse. El Estado (en sentido lato: Nación, provincia o comuna) tiene la obligación de asegurar la continuidad de los servicios públicos y está facultado para realizar el servicio concedido mediante la prestación de la fuerza pública o la militarización del servicio, cuando la suspensión pone en peligro la continuidad de la función administrativa esencial.

2º — La continuidad en el funcionamiento del servicio justifica la ejecutoriedad de todas las decisiones del poder concedente o de la autoridad administrativa competente.

## CAPÍTULO VIII

### *Ejecución directa*

1º — La ejecución directa del servicio por el poder concedente o autoridad administrativa competente, por cuenta y riesgo del concesionario, no altera la concesión ni extingue las obligaciones del concesionario de prestar el servicio cuando el poder concedente considere que debe cesar la sustitución. Si el concesionario considera arbitraria o inmotivada la sustitución directa, puede demandar el pago de daños y perjuicios.

2º — Cuando la imposibilidad sea realmente debida a una causa extraña a la voluntad del concesionario, desaparece su responsabilidad, pero siempre procede la sustitución en la medida necesaria para asegurar la continuidad y regularidad del servicio.

3º — La sustitución directa por el poder concedente es atribución inalienable y es ejercida en tanto y en cuanto éste la juzgue necesaria al interés público. En todo caso, siempre que se proceda a la sustitución, se hará en virtud de resolución fundada y motivada.

## CAPÍTULO IX

### *Tarifas*

1º — La tarifa uniforme y cierta, es un elemento esencial de la organización de un servicio público.

2º — La tarifa no tiene carácter contractual; es un acto reglamentario de la administración pública sobre el precio del servicio para el usuario.

3º — La tarifa, para tener validez, debe ser necesariamente fijada u homologada por la autoridad pública.

4º — La tarifa puede ser modificada en todo momento, salvo las bases determinadas en la concesión.

La intervención del concesionario en la fijación de la nueva tarifa, es necesaria. La decisión administrativa que fijare la tarifa sin la intervención del concesionario, sería jurídicamente nula.

## CAPÍTULO X

### *Efectos jurídicos*

#### *I — Derechos del concesionario*

1º — Derechos de uso sobre las partes del dominio público afectadas por el servicio público; este derecho de uso es temporal y revocable y no puede ser disminuido sino por la extinción o caducidad de la concesión o disposición transitoria especial del dominio público o uso especial permanente que no desnaturalice el uso del concesionario.

2º — Derecho de expropiación de servidumbres y de meras restricciones determinadas por el concedente.

3º — Derechos a la policía de la explotación, sin perjuicio de la policía general y de la policía del servicio que ejerce la administración pública.

4º — Derecho a cobrar, además del precio por retribución del servicio, las tasas autorizadas por el concedente y fijadas siempre por tarifas aprobadas por éste.

#### *II — Obligaciones del concesionario*

1º — Las obligaciones del concesionario son, en primer término, las de prestar el servicio público en forma regular y continua.

2º — En caso de duda, la concesión debe ser interpretada en el sentido más favorable para el funcionamiento regular y continuo del servicio público.

3º — El concesionario debe cumplir las prestaciones estipuladas en la concesión en todas las circunstancias, aun en los casos de acontecimientos económicos excepcionales, independientes de la voluntad de las partes e imprevisibles, que originen una subversión en la economía de la concesión.

4º — Únicamente en el caso de imposibilidad absoluta para el concesionario de ejecutar el servicio —considerado como tal el de fuerza mayor propiamente dicho y no el caso fortuito—, cesa la responsabilidad del concesionario.

5º — El concesionario que interumpa el servicio público —fuera del caso de imposibilidad material absoluta en los términos del precepto anterior—, incurre en falta grave y, por lo tanto, se hace pasible de multa y aun de la obligación de pagar daños y perjuicios, sin perjuicio de la revocación de la concesión por su culpa y riesgo, si no se ha previsto la caducidad.

6º — Si a pesar de los acontecimientos económicos excepcionales, independientes de la voluntad de las partes e imprevisibles que subvierten la economía de la concesión, el concesionario no interrumpe el servicio público y hace todos los esfuerzos para continuarlo en las condiciones previstas en la concesión,

tiene derecho de exigir que la administración pública participe en las pérdidas de la explotación (teoría de la imprevisión).

7º— Si la pérdida que reclama el concesionario se reduce a una disminución de las ganancias, la teoría de la imprevisión es absolutamente impracticable.

8º— El concesionario está obligado a indemnizar los daños y perjuicios que el servicio pueda causar a terceros, y a ese efecto deberá constituir un fondo afectado a las indemnizaciones. La base de ese fondo no podrá ser alterada. Si lo fuera, procede la renovación de la concesión.

9º— Si se hubiese pactado que al vencimiento del término de la concesión, las instalaciones o cosas afectadas a la explotación pasaran a ser propiedad del concedente durante el término de la concesión, no podrían transferirse por venta, permuta u otro acto de disposición sin la autorización del concedente, a menos que el acto de imposición no altere sustancialmente la instalación. Tampoco esos bienes podrán ser hipotecados ni constituirse sobre ellos derechos reales, con excepción de servidumbres públicas o privadas que no afecten el servicio público ni disminuyan el valor de las cosas afectadas.

10.— No podrá hacerse transferencia de concesión alguna sin la anuencia del concedente.

Si el concedente no se pronunciare en el plazo de dos meses, prorrogable en el caso de ser necesaria una información documentada sobre la proposición de transferencia, procederá el recurso contencioso administrativo según la ley respectiva, para obligar a la administración pública a decidir sobre la proposición.

### III.—Relaciones entre el concesionario y los usuarios

1º— Los usuarios están obligados a pagar según la tarifa aprobada por la administración pública. Los usuarios con derecho a un servicio público podrán deducir acciones o recursos judiciales, contenciosos administrativos o administrativos relativos: 1º, a la obligatoriedad de prestar el servicio en las condiciones establecidas por la administración pública; 2º, a la continuidad; y 3º, al precio establecido por ella, invocando las disposiciones contractuales de la concesión o legales en vigor, además de las del contrato de suministros;

### IV.—Relaciones entre el concesionario y la administración pública

1º— La tarifa debe ser modificada según las necesidades económicas, sociales o políticas.

2º— Es inalienable el poder de la autoridad pública para adaptar las tarifas a las necesidades del servicio público.

3º— La intervención del concesionario en la preparación o modificación de la tarifa no debe ser considerada como una participación en el acto jurídico de la tarifa, en calidad de coactor.

4º— La ley debe prescribir el procedimiento para establecer la tarifa y determinar qué autoridad es competente para su homologación.

5º— La administración pública tiene el poder de reducir de oficio la tarifa sin el asentimiento del concesionario y aun contra su voluntad, sobre las bases de la concesión.

En el caso en que la reducción de oficio de la tarifa originara para el concesionario una pérdida —dismi-

nución del beneficio normal—, la administración pública está obligada a indemnizarla.

6º— Es inalienable el poder de la administración pública para:

- a) Contralorear la gestión financiera del concesionario a fin de saber si la tarifa es justa y equitativa y si corresponde al beneficio normal previsto por las partes;
- b) Imponer reducciones a la tarifa en virtud de las causas previstas en el número anterior;
- c) Determinar si el concesionario forma parte de un trust o corporación no autorizada por la ley.

7º— La tarifa es obligatoria. El concesionario no puede modificarla sin la anuencia del concedente.

8º— El concesionario no puede negarse a la prestación del servicio a quien cumpla las condiciones de la tarifa válidamente aplicada.

9º— La tarifa debe ser la misma para todos los individuos que reclaman el mismo género de prestación con las mismas modalidades y cumplen las mismas condiciones fijadas por la tarifa.

10.— Los usuarios tienen la obligación de pagar según la nueva tarifa, desde el momento en que ha sido regularmente homologada y publicada.

11.— La aplicación de la nueva tarifa —en principio— no debe tener efecto retroactivo. Pero la declaración de ilegal o irregular de una tarifa aplicada antes, autoriza la repetición de lo pagado indebidamente.

12.— Si la administración pública, en el ejercicio regular de su poder —legal o reglamentario—, modifica de una manera grave e imprevista la situación legal existente, el concesionario, en el caso de probar que ha sufrido sobre el beneficio normal una disminución, tiene el derecho de un reajuste de la tarifa, a fin de que la remuneración sea normal, con excepción de lo dispuesto en la base del capítulo VI.

13.— La administración pública puede proceder a la revisión de la tarifa, si las medidas tomadas por la administración modifican considerablemente, en un sentido favorable al concesionario, la situación legal cuyo mantenimiento había sido considerado para la fijación de la tarifa.

## CAPÍTULO XI

### Extinción

#### I.—Rescisión

1º— El poder concedente puede declarar la rescisión del contrato de concesión por incumplimiento de obligaciones del concesionario y demandar además a éste la indemnización de daños y perjuicios.

2º— Puede pactarse la rescisión de la concesión *mutuo dissensus*.

3º— El rescate y la expropiación se refieren exclusivamente a los bienes afectados al servicio concedido.

4º— El concedente puede revocar la concesión cuando falten los motivos presupuestos en cuya virtud ésta se otorgó. Por ejemplo, cuando un invento o procedimiento técnico superior o una nueva adaptación del servicio conviniere más al interés público, tanto en punto a la eficiencia o comodidad, como al precio. En tal caso, en igualdad de propuestas, será preferido el concesionario que prestó el servicio anterior. Esta cláusula debe ser insertada en todos los contratos de concesión; no obstante, cuando no lo

fuere, el concedente ejercerá también ese derecho, pero indemnizará al concesionario sobre bases documentadas, especialmente por pericias técnicas y en constancias administrativas (certificaciones de aduana, etcétera, sin perjuicio de las que obraren en los libros del concesionario si el concedente lo considerare necesario. La determinación en otros casos podrá ser judicial o arbitral.

## II — Caducidad

1º — La caducidad puede ser dispuesta por el poder concedente por incumplimiento de las obligaciones esenciales del concesionario, después de agotarse el procedimiento legal conminatorio. El procedimiento legal comprende desde la aplicación de multa hasta la ejecución directa y caducidad.

2º — El criterio y apreciación de las causas de caducidad por motivos de interés público está sometido al poder concedente, según considere substentes o no los motivos de utilidad general.

3º — La declaración de caducidad no puede ser renunciada por el poder concedente.

## III — Quiebra

1º — La concesión se extingue ipso jure por la quiebra del concesionario, pero es necesario el acto formal de la revocación.

## CAPÍTULO XII

### Jurisdicción

#### I — Tribunales contenciosoadministrativos

1º — Todas las cuestiones originadas por la concesión de servicio público que rescindan, modifiquen, interpreten o alteren la concesión, deben ser del exclusivo conocimiento y juzgamiento de tribunales de lo contenciosoadministrativo.

2º — Esta jurisdicción y el procedimiento deben ser legislados teniendo presente la estructura de nuestro régimen constitucional.

3º — Los tribunales deben ser colegiados y sus sentencias inapelables, salvo en los casos de alegarse inconstitucionalidad, en que queda abierto el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.

#### II — Juicio arbitral

1º — El juicio de árbitros juris o de árbitros arbitradores, sólo es procedente en el régimen de la concesión, cuando se trate de cuestiones de hechos o técnicas, pero no en lo relativo a la determinación del objeto del servicio o a sus principales modalidades, ni en lo que concierne a la seguridad pública de los usuarios. — *Rafael Bielsa.* — *R. Corominas Segura.* — *Victor Daniel Goytia.* — *Julio O. Ojea.* — *B. Villegas Basavilbaso.*